

Derechos humanos y desarrollo: Racismo ambiental en el Río Anchicayá

Kenny Constanza Riascos Rentería

Maestría en Derechos Humanos y Democratización

**Departamento de Derecho Constitucional, Universidad Externado de
Colombia**

10 de agosto de 2023

KENNY CONSTANZA RIASCOS RENTERÍA

**UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRATIZACIÓN**

Rector: Dr. Hernando Parra Nieto

Secretario General: Dr. José Fernando Rubio

Decana Facultad de Derecho: Dra. Emilssen González de Cancino

**Director Departamento
Derecho Constitucional:** Dr. Humberto Sierra Porto

Director de Tesis: Dr. Bernardo Vela Orbegozo

Examinador: Dr. César Vallejo Serna

Dedicatoria

En memoria de mi mamá Mélida, oriunda de Anchicayá.

El presente trabajo lo dedico a mi hija Sofía, que me da fuerzas para continuar. A mi familia, a la de sangre, y a familia extendida que la vida ha tenido la bondad de regalarme, esa que se representa en el amor bonito y en las amistades genuinas que se vuelven hermandad. A las comunidades negras de este país, por las luchas y reivindicaciones de nuestros derechos. A las comunidades del Río Anchicayá, por su resistencia, y por contribuir a la visibilización de la existencia del racismo ambiental en Colombia.

Agradecimientos

Agradezco a mi familia de sangre y a mi familia extendida. Agradezco infinitamente a las comunidades Negras del Río Anchicayá. Agradezco a mi tío Silvano Caicedo, por su testimonio generoso y su compromiso con nuestro pueblo, el territorio y el río Anchicayá. Agradezco profundamente a la comunidad del Programa de Maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia. Agradezco al profesor Bernardo Vela Orbegozo por su gentil, sabia y paciente orientación en la construcción de este trabajo. Y agradezco a quienes tal vez no vean sus nombres escritos en esta línea, pero están en la historia de mi vida.

ÍNDICE

Resumen

Introducción.....	7
1. Capítulo 1. Del colonialismo al racismo ambiental.....	10
1.1 Colonialismo, conceptualización de raza y racismo.....	11
1.1.1 Construcción del colonialismo.....	11
1.1.1.1 El colonialismo y el racismo.....	13
1.1.1.2 El colonialismo y el capitalismo.....	15
1.1.1.3 Poscolonialismo - Colonialismo interno.....	17
1.2 Conceptualización de raza, etnicidad y racismo.....	21
1.2.1 Etnicidad.....	21
1.2.2 Raza.....	23
1.2.3 Racismo.....	25
1.3 Conceptualización de Racismo Ambiental.....	34
2. Capítulo 2. El racismo ambiental como factor determinante en las tensiones entre derechos humanos y desarrollo.....	56
2.1 Modelos de desarrollo.....	57
2.1.1 Modelo de crecimiento económico.....	57
2.1.2 Modelo de desarrollo humano – Amartya Sen.....	63
2.2 Derechos Humanos como marco de análisis.....	67
2.2.1 Derecho al desarrollo y derecho a un medio ambiente sano.....	71
2.3 Mecanismos de amparo a derechos a partir del Sistema Internacional de los derechos humanos de los pueblos étnico raciales.....	76
2.3.1 Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial – CERD.....	77
2.3.2 Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.....	79
2.4 Derechos Humanos y empresa.....	83
2.5 Vulnerabilidades traducidas en políticas públicas de desarrollo con impactos en un grupo racial en específico.....	88
2.5.1 Caso 1. Titusville, Alabama.....	88

2.5.2 Caso 2. Esmeraldas, Ecuador.....	95
2.5.3 Caso 3. Consejos Comunitarios Puerto Rey y Tierra, La Boquilla, Cartagena, Colombia.....	103
3. Capítulo 3. Racismo ambiental en Anchicayá. Estudio de caso.....	114
3.1 Leyes que regulan la titularidad de la tierra a las comunidades negras.....	115
3.2 ¿Por qué Anchicayá?.....	118
3.2.1 Presentación del río Anchicayá.....	119
3.3 Presentación del caso.....	122
3.3.1 Hechos y daños ambientales causados por la intervención.....	123
3.3.2 Línea de tiempo respecto del litigio del caso y la respuesta estatal.....	131
3.3.2.1 Procesos ante la jurisdicción contencioso – administrativa.....	132
3.3.2.2 Procesos ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.....	134
3.4 Análisis del caso a la luz de las etapas de las políticas pública.....	139
3.4.1 La decisión.....	140
3.4.2 Planificación.....	142
3.4.3 Implementación.....	146
3.4.4 Evaluación.....	148
3.5 Análisis del caso a la luz de la colonialidad del conocimiento.....	153
3.6 Hacia una apuesta por el etnodesarrollo.....	158
Conclusiones generales.....	162
Bibliografía.....	165

Resumen

La empresa EPSA (hoy CELSIA) y la institucionalidad estatal colombiana han afectado significativamente el Río Anchicayá, sus territorios y comunidades negras. En primera medida, con la contaminación del río por el vertimiento de sedimentos del embalse en el año 2001, y luego mediante un proceso judicial y administrativo que ha durado dos décadas sin que hasta el momento se hayan efectuado medidas de reparación y restauración socioecológica. Si bien, recientemente se han dado decisiones judiciales que atienden las demandas históricas de las comunidades, resta aún surtir un proceso complejo de implementación. Por ello, en este trabajo se sostiene que este caso está atravesado por el racismo ambiental en la medida en que confluyen la discriminación racial, afectaciones desproporcionadas en las comunidades negras, privación en la participación en espacios de toma de decisiones y políticas públicas sobre el territorio, exclusión estructural, y denegación sistemática de derechos étnico territoriales. Lo anterior se constata abordando un marco teórico que desarrolla el racismo ambiental y sus orígenes en el colonialismo y el racismo estructural; desarrollando una aproximación analítica desde una perspectiva de derechos humanos, desarrollo humano y etnodesarrollo; y evidenciando estas situaciones en el estudio de caso.

Abstract

The company EPSA (today CELSIA) and the Colombian state institutions have significantly affected the Anchicayá River, its territories and its black communities. Firstly, with the contamination of the river due to the dumping of sediments from the reservoir in 2001, and then through a judicial and administrative process that has lasted two decades without any socio-ecological reparation nor restoration measures being carried out to date. Although judicial decisions that address the historical demands of the communities have recently been issued, a complex implementation process still remains to take place. For this reason, in this work it is argued that this case is crossed by environmental racism to the extent that racial discrimination, disproportionate effects on black communities, deprivation of participation in public policy decision-making spaces on the territory, structural exclusion, and systematic denial of ethnic territorial rights converge. The foregoing is verified by addressing a theoretical framework that develops environmental racism and its origins in colonialism and structural racism; developing an analytical approach from a perspective of human rights, human development and ethno-development; to finally demonstrate these situations through the case study.

Key words

Environmental racism, colonialism, postcolonialism, human rights, development, ethnic communities, territory, Anchicayá case.

DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO
**“Derechos Humanos y Desarrollo. Racismo Ambiental en los Consejos
Comunitarios de las comunidades negras en el Río Anchicayá”**

INTRODUCCIÓN

*El río ya no ruge, el río ya no habla, el río ya no llora, río ya no canta, a la larga es
como un río muerto, ¿no? un río que era tan vigoroso que tenía tanto, tanto vigor,
hoy está casi moribundo.*

La presente investigación propone un análisis sobre las relaciones que existen entre derechos humanos y el modelo de desarrollo hegemónico. Problematisa los sistemas de opresión, centrándose en el racismo estructural, representado en las relaciones de poder que permean todas las esferas de la vida en sociedad, que redundan en la negación de derechos a los pueblos racializados, de manera particular, en este texto, los pueblos negros y afrodescendientes.

En la implementación de proyectos de desarrollo, las comunidades étnico raciales colombianas han tenido que enfrentar el racismo ambiental por parte de las instituciones y la sociedad en su conjunto. Esto ha ocurrido precisamente en el territorio de una de las cuencas más importantes que desembocan en el Océano Pacífico, el Río Anchicayá, en donde la implementación de políticas de desarrollo ha versado en la violación de derechos étnico - territoriales de las comunidades que la habitan. Usualmente estos análisis se harían en clave de vulneración de derechos, no obstante, este documento presenta el racismo ambiental como categoría de análisis, pues es la categoría central de este tipo de problemáticas.

Esta aproximación busca generar consciencia sobre la existencia del racismo ambiental como problemática en Colombia, partiendo de una perspectiva decolonial. Siguiendo a Bullard (2005), Mills (2001), Westra (2001) y Keucheyan (2016) El racismo ambiental obedece a lógicas racistas y excluyentes que soportan el modelo político-económico hegemónico, y se refleja en la toma de decisiones políticas y económicas que se toman desde la institucionalidad. Responde primordialmente a la exacerbación de los efectos negativos medioambientales

causados por la implementación de políticas y proyectos de desarrollo en territorios habitados por población étnica racialmente diferenciada.

De esta manera lo expresa Keucheyan (2016)

Así como existen desigualdades económicas o culturales, también se las encuentra en la relación de los individuos o grupos de individuos con la naturaleza, tanto con los recursos que ofrece como con la exposición a los efectos nefastos del desarrollo (...) En ciertos casos, las desigualdades ambientales resultan de la acción del Estado, cuyas políticas están lejos de ser neutras en la materia, (...) (Keucheyan, 2016, pág. 15)

El racismo ambiental ha impactado particularmente a los pueblos étnicos y racializados de Colombia, y a pesar de que se ha evidenciado la afectación a sus territorios por proyectos económicos de desarrollo, este concepto no se ha posicionado significativamente en el debate público. Es importante visibilizar que existe una carga racial impuesta en la toma de decisiones de políticas medioambientales, y que ello redunda en una respuesta estatal discriminatoria ante las afectaciones generadas a comunidades étnico-raciales.

Este aporte a la discusión pública, pretende precisamente posicionar el concepto de racismo ambiental en el análisis de la formulación e implementación de políticas públicas que impacten territorios de comunidades étnico raciales. En vista de ello, se abordará el estudio de caso en el Consejo Comunitario del Río Anchicayá, donde confluyen elementos relacionados con racismo ambiental.

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis desde diversos modelos de desarrollo, políticas medioambientales, derechos humanos, teorías críticas raciales – específicamente teorías poscoloniales, y un análisis comparativo de casos, que permita, concluir en el estudio de caso del Río Anchicayá, y así poner en evidencia en qué fase de política pública se expresa el racismo ambiental: En la fase del diagnóstico, en la fase de la formulación de la política, en la fase de la ejecución o en la fase de la evaluación.

La hipótesis sostiene que en el caso mencionado de la Cuenca del Río Anchicayá, las decisiones de implementación de proyectos de desarrollo que generan impactos medioambientales negativos tienden a coincidir con los territorios habitados por poblaciones étnico racialmente diferenciadas, imponiéndoles una alta carga, sin aportarles beneficios, es decir, existe un gran desbalance costo-beneficio. En esta medida, la formulación e implementación de política pública sobre proyectos de desarrollo en la Cuenca del Río Anchicayá están transversalizadas por el racismo ambiental.

Este trabajo está dispuesto de la siguiente manera:

El primer capítulo propone un enfoque teórico que resulta adecuado para posicionar la colonialidad como base fundante de los sistemas económicos, sociales y políticos que imperan actualmente, así como la génesis del racismo y la discriminación racial. Inicia con la discusión teórica alrededor de los conceptos de colonialismo, poscolonialidad, raza y racismo, como paradigma que ha sido determinante para la toma de decisiones medioambientales, tendientes al desarrollo y crecimiento económico de las sociedades. Al final se abordan los elementos que constituyen el racismo ambiental. Lo anterior, con el fin de avanzar en el estudio del enfoque teórico de racismo ambiental, el cual nace como un movimiento, pero deriva hacia un paradigma, que busca poner en la agenda las afectaciones diferenciadas que los daños al medio ambiente causan en las poblaciones racializadas y empobrecidas.

El segundo capítulo aborda las implicaciones de un modelo de desarrollo sustentado únicamente en el crecimiento humano, problematizándolo desde el desarrollo humano propuesto por Amartya Sen (2000); y realiza una aproximación al racismo ambiental desde algunos casos emblemáticos en Lousiana – Estados Unidos, Esmeraldas – Ecuador, y La Boquilla – Colombia. Este análisis es punto de partida para abordar el racismo ambiental en el caso objeto de estudio de esta investigación. Del mismo modo, en este apartado se alude al marco de derechos humanos que cobijan a los pueblos étnicos, aterrizándolo en los derechos étnico-territoriales.

En esta línea, presenta los lineamientos de derechos humanos y empresa, en relación con los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los pueblos étnico-raciales, lo cual permite analizar si en la práctica se incumplen los mandatos allí contenidos, como es el caso de la consulta previa, libre e informada.

Finalmente, el tercer capítulo realiza una aproximación al racismo ambiental, la colonialidad del conocimiento, y presenta una apuesta por el etnodesarrollo, con el fin de realizar el estudio de caso del Consejo Comunitario del Río Anchicayá - Buenaventura, a partir de la discusión teórica que ofrece André Noël Roth (2002), a través del análisis de las etapas de las Políticas Públicas. En este sentido, la exposición del caso se realiza contrastando los puntos relevantes del proceso de políticas públicas, a partir del análisis de la democratización de la toma de decisiones en el marco del proyecto desarrollado en el territorio en cuestión, así como los niveles de consideración el impacto en derechos humanos y medio ambiente. Y cómo la respuesta estatal termina ratificando políticas públicas con una carga racista. El fin último de este capítulo es demostrar, a través de este caso, la existencia de aspectos relevantes sobre el racismo ambiental y cómo opera en el caso del Río Anchicayá.

CAPÍTULO 1

1. Del colonialismo al racismo ambiental

El presente capítulo tiene como objetivo abordar un enfoque teórico que permita conceptualizar el racismo ambiental a partir del abordaje del colonialismo y el colonialismo interno como bases fundantes de la construcción de la estructura racista de la sociedad, que redundan en la discriminación a razón de raza, al momento de tomar decisiones con alto impacto medioambiental, causando daños y afectaciones desproporcionadas sobre los pueblos racializados, sin que se traduzcan en beneficios en tanto acceso de derechos.

1.1. Colonialismo, colonialismo interno, conceptualización de raza y racismo

1.1.1 Construcción del Colonialismo

El colonialismo no sería posible sin el racismo, pues se requiere del establecimiento de relaciones de poder que permitan justificar las formas de oprimir a unos sectores de la sociedad, a partir de la creación de sistemas desventajosos para estos, mediante el establecimiento de diferencias que se traducen en negación a acceso a derechos, la invisibilización de los seres considerados otros. La presentación de quienes el sistema colonial considera inferiores en un estado de vulnerabilidad, les es de utilidad para justificar la imposición de medidas económicas, formas de uso y acceso a recursos naturales, entre otros aspectos, bajo la bandera de ofrecer soluciones (Quijano A. , 2010).

Siguiendo a Guzmán (2019) el colonialismo se puede definir como el mecanismo de expansión territorial, económica y cultural que realizaron países del viejo mundo hacia nuevas tierras por descubrir, y se convirtió en un proceso de dominación con fines económicos, tanto de los territorios como de los cuerpos de quienes habitaban estos nuevos espacios. Así lo señala este autor.

El colonialismo tiene su origen a fines del siglo XV y es producto de la expansión y conquista de distintos territorios fuera de los límites europeos. Uno de los principales objetivos que movilizó a los conquistadores (...) fue el asegurar mejores rutas de comercio para sus respectivos reinos; sin embargo, al poco andar este objetivo mutó en una carrera desenfrenada por la anexión y control de territorios de ultramar por las metrópolis europeas, territorios que inmediatamente pasan a ocupar una posición subordinada en lo político y dependiente en lo económico (...) (Guzmán, 2018, pág. 121)

El colonialismo se entronca con acciones de agentes externos y poderosos, como lo señala Fanon (2010). Este autor concibe el colonialismo como un fenómeno provocado por un agente externo poderoso, con ansias incrementar el ejercicio de

poder, y que genera un escenario de dominación, apropiación y explotación de un territorio ajeno. Así lo señala este autor:

“es una forma particular de expansión (...) fundada sobre la sumisión de los países conquistados (las colonias) al poder político de las metrópolis. La colonización es entonces <exterior>, en el sentido de que las metrópolis por un lado y las colonias por otro, constituyen entidades distintas, aunque las segundas estén integradas en un espacio político dominado por las primeras. (...). (Fanon, 2010, pág. 7)

Siguiendo a Césaire (2006), y como se expresó arriba, el colonialismo es, en sí mismo, una acción que deshumaniza al otro y a la otra, para sentir la tranquilidad de socavar y abusar de sus cuerpos y sus territorios. No existe una justificación que explique la necesidad de colonizar, que no tenga una raíz económica basada en la superioridad, negando la agencia de quienes son sus víctimas.

“Y digo que de la distancia de la colonización a la civilización es infinita, que de todas las expediciones coloniales acumuladas, de todos los estatutos coloniales elaborados, de todas las circulares ministeriales expedidas, no se podría rescatar un solo valor humano.” (Césaire, 2006, pág. 14)

El colonialismo y el poscolonialismo no se conciben sin relaciones de poder y dominación, permeadas por el desprecio al otro, por la deshumanización de este, y el arrebató de todo tipo de derecho o de pertenencia (Mignolo, 2003; Quijano A. , 2010). Quien ejerce el rol colonizador, considera ser el único sujeto de derechos, y, por ende, construye un sistema social, económico, político y cultural, que le permite disponer de los demás seres para su beneficio. Al respecto afirma Césaire

Habría que estudiar en primer lugar cómo la colonización trabaja para descivilizar al colonizador, para embrutecerlo en el sentido literal de la palabra, para degradarlo, para despertar sus recónditos instintos en pos de la codicia, la violencia, el odio racial, el relativismo moral; (...) (Césaire, 1972, pág. 2, traducción propia)

El colonialismo se establece a partir de relaciones de desigualdad y dominación. No se coloniza a un considerado igual, ni se realiza con pretensiones cooperativas.

Sin contacto humano, pero con relaciones de dominación y sumisión lo que convierte al colonizador en un (...) guardián de celda, (...) y al colonizado en un instrumento

de producción. (...) Lo que resulta en la ecuación: colonización = “cosificación”. (Césaire, 1972, pág. 6, traducción propia)

Tiene como una de sus consecuencias la naturalización del exceso de poder, del merecimiento de quienes la ejercen, y de la falta de valía de quienes la padecen. Permea el sistema, de tal manera que inculca estos antivalores en la sociedad, y se termina aceptando.

Me refiero a millones de hombres a quienes se les ha inculcado astutamente el miedo, a quienes se les ha enseñado el complejo de inferioridad, a temblar, arrodillarse, desesperarse y comportarse como lacayos. (Césaire, 1972, pág. 7, traducción propia)

Por su parte, y en consonancia, se aproxima a lo que es una sociedad con arraigo colonial, que trae consigo las prácticas heredadas y las adecúa y potencia. En este sentido señala Césaire

“una civilización incapaz de resolver los problemas que ha creado es una civilización en decadencia”. Así como “una civilización que elige cerrar sus ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización asolada”. “una civilización que usa sus principios para el engaño, es una civilización moribunda”. (Césaire, 1972, pág. 1, traducción propia)

1.1.1.1 El Colonialismo y el Racismo

Según Fanon, citado por Guzmán (2018) el colonialismo se nutre del racismo en la medida en que no solo impacta territorios y economías, sino también los cuerpos y vidas de los pueblos colonizados. Por ello, para este autor es indispensable atender a “la relación entre el colonialismo, el racismo y el cuerpo.” (Guzmán, 2018, pág. 120) Así lo percibe este autor

(...) una posible clave de interpretación del colonialismo es por medio de los criterios de alterización, los cuales, desde una base y fundamento racial, buscan objetivar los cuerpos, quitarles su historia, lenguaje y toda experiencia previa a la ocupación colonial. En tal sentido, la producción de subjetividades coloniales hace posible y funcional, por un lado, el discurso de una supuesta supremacía blanca y, por otro, el genocidio negro e

indígena, así como la prolongación, mantenimiento y fortalecimiento del sentido de inferioridad que se inscribe en los cuerpos racializados. (Guzmán, 2018, pág. 122)

Según Césaire (1972), el colonialismo se ha justificado como una serie de acciones realizadas que alegando objetivos superiores, terminan desvirtuando desconociendo y aniquilando las formas de ser, percibir y habitar el mundo de los pueblos negros e indígenas. Sólo son válidas las construcciones y sistemas de valores y creencias heredadas de la colonia. Así lo expresa este autor.

Lo que se reduce a las ecuaciones deshonestas *cristiandad=civilización*, *paganismo=salvajismo*, de las cuales no podían derivar sino abominables consecuencias colonialistas y racistas, cuyas víctimas serían los indios, los pueblos amarillos y los negros. (Césaire, 1972, pág. 2, traducción propia)

Para este autor, a pesar de los efectos devastadores en los cuerpos, vidas, culturas, sociabilidades y territorios, la colonización históricamente se ha presentado como la salvación de los pueblos, como la solución civilizatoria de todos sus problemas, y como el camino seguro hacia el progreso. Así lo percibe

¿Colonización y civilización? La maldición más común en este asunto es ser la víctima de buena fe de una hipocresía colectiva, hábil en plantear mal los problemas para legitimar mejor las odiosas soluciones que se les ofrecen. (Césaire, 2006, pág. 14, traducción propia)

La concentración de las riquezas se ha dado a partir de la barbarie y el trato deshumanizante, que además de las razones de clase está atravesada por el racismo (Césaire, 1972).

“(…) la burguesía, como una clase, está condenada a asumir la responsabilidad por todas las barbaridades de la historia, las torturas de la Edad Media y la Inquisición, la beligerancia, y apelar a la razón de ser, el racismo y la esclavitud, en fin, todo en contra de lo que protestó, en el momento en que, como clase atacante, era la reencarnación del progreso humano. (Césaire, 1972, pág. 18, traducción propia)

La situación de la gente negra, continúa este autor, se repite en diferentes contextos y territorios, lo cual comprueba que el racismo estructural opera a nivel mundial.

Cuando nos referimos a la poscolonialidad, entendemos que, más allá de la independencia de naciones, existen prácticas que replican el colonialismo, con centros y periferias, con hegemonías racializadas y de clase.

Y me di cuenta de que existe una “situación del negro” que existía en diferentes áreas geográficas. (Césaire, 1972, pág. 30, traducción propia)

El colonialismo trajo consigo un legado que parece eterno, el racismo, como el sistema de dominación que ha justificado el despojo, la estigmatización y el exterminio de pueblos. Así pues, es importante asumir que racismo y colonialismo son inescindibles (Fanon, 2010). En un sentido similar señala Césaire (2006)

(...) no se puede, si se pretende seguir de cerca la realidad, dejar de abordar el problema que en la actualidad condiciona de manera muy precisa el desarrollo de las culturas negras: la situación colonial. Es decir, quierase o no, no puede plantearse actualmente el problema de la cultura negra sin abordar al mismo tiempo el problema del colonialismo, ya que todas las culturas negras se desarrollan hoy dentro de este particular condicionamiento que es la situación colonial o semicolonial o paricolonial (Césaire, 2006, pág. 45).

1.1.1.2 El Colonialismo y el Capitalismo

Según Mbembe (2016), el racismo tiene impactos en el sistema económico. Para este autor, el capitalismo, así como el colonialismo, tiene una relación inextricable con el colonialismo, pues este sistema económico ha instrumentalizado y se ha vertebrado sobre la opresión racial¹. Así lo destaca

Ese fondo constituyente y material del universalismo capitalista tiene en la expropiación y la violencia su moneda de cambio, y explicita el modo en que la acumulación siempre necesita de suplementos o subsidios raciales.” (Mbembe, 2013, pág. 16)

¹ Para Mbembe, “la crítica de la modernidad permanece incompleta sin el examen exhaustivo acerca de cómo el principio de raza se afirmó como un corpus de saberes, discursos, fantasías y formas de explotación y dominio naturalizadas y, al mismo tiempo, permanentemente renovadas como <materia prima> con la que se fabrica, dice Mbembe, el *excedente* y la *diferencia* de la (post) modernidad capitalista.” (Mbembe, 2013, pág. 15)

Siguiendo a Mbembe (2013) y Césaire (2006), el colonialismo responde a lógicas de expansión de poder y acumulación de recursos, basadas en la idea de superioridad sobre los territorios a colonizar y los seres que los habitan. Este operar se justifica en la usual idea discriminatoria de ejercer “acciones civilizatorias” que salvan a los pueblos de la ignorancia.

Es por ello que Césaire (1972) considera que la extracción de recursos destinados a alimentar los procesos de desarrollo de los países colonizadores, ahonda el proceso de empobrecimiento, desabastecimiento, y olvido en el que son subsumidas las sociedades colonizadas. Así lo señala este autor

Hablo de economías naturales que se han trastornado – economías armoniosas y viables adaptadas a la población indígena – de cultivos alimentarios destruidos, desnutrición introducida permanentemente, desarrollo agrícola orientado únicamente al beneficio de los países metropolitanos, de saqueo de productos, saqueo de materias primas. (Césaire, 1972, pág. 7, traducción propia)

No obstante, como lo apunta Césaire (1972), a pesar de los efectos devastadores de proyectos y políticas de extracción de recursos en territorios de pueblos étnicos y racializados, los colonizadores justifican sus acciones de despojo a partir de los logros obtenidos del desarrollo.

Me refiero a sociedades despojadas de su esencia, culturas pisoteadas, instituciones socavadas, tierras confiscadas, religiones destruidas, magníficas creaciones artísticas destruidas, extraordinarias posibilidades aniquiladas. Ellos lanzan hechos a mi cabeza, estadísticas, kilómetros de carreteras, canales y las vías del tren. (Césaire, 1972, pág. 6, traducción propia)

Ante el maridaje entre colonialismo y capitalismo han emergido movilizaciones y procesos de resistencia por parte de los pueblos afectados, con todo un repertorio de conocimientos surgidos en sus luchas por la sus derechos, la identidad, el territorio y la vida digna. A pesar de la opresión y subalternización histórica de los pueblos étnicos, en medio de sus luchas y vivencias han posicionado otras formas de sociabilidad y relacionamiento con la naturaleza basadas en la relacionalidad. Han demostrado que es posible una vida en profunda interdependencia entre cultura

y naturaleza, retando el núcleo del capitalismo que la concibe como un objeto para apropiar y expropiar (Escobar, 2000; 2010; 2007; 2018).

1.1.1.3 Post-colonialismo-Colonialismo interno.

Dando continuidad a los planteamientos realizados en el primer capítulo, se considera necesario diferenciar el colonialismo y la colonialidad. Siguiendo a Fanon (2010) el primero, es ejercido por países poderosos hacia países considerados inferiores en términos de desarrollo con el fin de aumentar las riquezas. Así lo señala

El contraste centros/periferias es pues inherente a la expansión mundial del capitalismo realmente existente en todas las etapas de su despliegue desde sus orígenes. (...) el colonialismo es una forma particular de expansión de determinadas formaciones centrales (calificadas por este hecho de potencias imperialistas) fundada sobre la sumisión de los países conquistados (las colonias) al poder político de las metrópolis. (Fanon, 2010, pág. 8)

Por su parte, siguiendo a Césaire (1972) y Fanón (2010) la post colonialidad o colonialismo responde a la dominación ejercida por quienes recibieron el poder tras el fin de la colonia, estableciendo relaciones jerárquicas en lógica de centro periferia, despojando y subvalorando los cuerpos y territorios que consideran inferiores. Es entonces la transferencia de poder unas élites a otras, conservando las matrices de dominación y desigualdad. Así lo afirma Fanon

Los fenómenos de colonialismo interno se producen por las combinaciones particulares de la colonización de población, por una parte, y la lógica de la expansión imperialista, por otra. La acumulación primitiva en los centros asume la forma de una expropiación sistemática de las capas pobres del campesinado y crea en consecuencia un excedente de población que la industrialización local no siempre es capaz de absorber íntegramente... (Fanon, 2010, pág. 8)

Para Mignolo (2000) el colonialismo interno o post colonialidad responde a estructuras de poder que perviven o se reconfiguran una vez se dan procesos libertarios en los países colonizados. Después de procesos de independencia acometidos por luchas libertarias, se posicionan élites que terminan dominando, concentrando los recursos, despojando cuerpos y territorios y dirigiendo los destinos

de las nuevas naciones. Así pues, es la continuidad de las prácticas y sociabilidades coloniales esta vez ejercida por las élites locales. Así lo señala este autor

La conciencia criolla, como conciencia racial, se forjó internamente en la diferencia con la población afro-americana y amerindia. La diferencia colonial se transformó y reprodujo en el período nacional y es esta transformación la que recibió el nombre de "colonialismo interno." El colonialismo es, pues, la diferencia colonial ejercida por los líderes de la construcción nacional (Mignolo, 2000, pág. 68).

El post-colonialismo muta y evoluciona, pero tiene las mismas bases a través del tiempo. Actualmente, el modelo económico hegemónico basado en el desarrollo ha sido copiado por los dirigentes de países herederos de la colonia, y ello ha incidido en la manera en que se construye la naturaleza y se transversaliza la discriminación contra los pueblos racializados (Césaire, 1972; 2006; Mignolo, 2000; Quijano, 2010).

En el post-colonialismo la naturaleza, lejos de asumirse desde la interrelación con la cultura y la sociedad, se ha construido como una fuente de recursos a explotar, la mayoría de ellos esparcidos en territorios habitados por pueblos étnicos. Se desconocen y aniquilan sus formas de relacionamiento con la naturaleza basadas en la relacionalidad e interdependencia, pues solo importa la extracción y aprovechamiento de recursos (Alimonda, 2011; Escobar, 2000; 2018).

Siguiendo a Césaire (1972) El post-colonialismo ha incidido en la normalización de la discriminación de los pueblos racializados a niveles institucional y sociocultural. Refuerza una cultura del prejuicio y su deshumanización, construyéndolos como inferiores en todos los escenarios sociales y en el operar de la institucionalidad. Así lo manifiesta este autor

(...) la colonización, repito, deshumaniza al hombre incluso más civilizado; que la acción colonial, la empresa colonial, la conquista colonial, fundada sobre el desprecio del hombre nativo y justificada por este desprecio, tiende inevitablemente a modificar a aquel que la emprende (...) (Césaire, 1972, pág. 5, traducción propia)

Como en otras latitudes, el post-colonialismo tuvo asiento en América Latina. Para Fanon (2010) en el caso de América Latina, exceptuando la revolución de Haití, los

procesos libertarios respondían a la necesidad de generar mejores condiciones para las clases altas de la sociedad criolla, manteniendo la estratificación que la colonia había impuesto, en la que las personas esclavizadas y los pueblos originarios ocupaban el último eslabón. Así lo resalta este autor

La primera y única revolución social que conoció el continente americano, hasta tiempos muy recientes, fue la de los esclavos de Santo Domingo (Haití), que conquistaron su libertad por sí mismos. La pretendida <Revolución americana> del siglo XVIII, como los posteriores de las colonias españolas, no fueron sino revueltas de las clases dominantes locales que buscaban librarse de los tributos que pagaban a la madre patria para continuar con la misma explotación de los esclavos y de los pueblos conquistados que emprendieron las metrópolis del capitalismo mercantilista. Nunca tuvieron una revolución en el sentido completo del término. (Fanon, 2010, pág. 6).

Siguiendo a Mignolo (2000), los actos libertarios del siglo XIX no tenían como finalidad cambiar el sistema de opresión sino modificar los puestos de poder, basados nuevamente en un linaje racial que definiría las posiciones en la sociedad.

“La doble conciencia, en suma, es una consecuencia de la colonialidad del poder y la manifestación de subjetividades forjadas en la diferencia colonial. (...) La particularidad de la imagen de "hemisferio occidental" fue la de marcar, de manera fuerte, la inserción de los criollos descendientes de europeos, en ambas Américas, en el mundo moderno/colonial. Esta inserción fue, al mismo tiempo, la de la consolidación de la doble conciencia criolla que fue forjándose en el proceso mismo de colonización.” (Mignolo, 2000, pág. 64)

Así pues, como lo sostiene este autor, América como continente, reproduce las prácticas de la colonia, si bien, la independencia pretendía desligar a los países americanos del yugo europeo, las prácticas en términos del manejo del poder continúan profundamente relacionadas con las de la época colonial.

“La idea de "hemisferio occidental" (...) establece ya una posición ambigua. América es la diferencia, pero al mismo tiempo la mismidad. Es otro hemisferio, pero es occidental. Es distinto de Europa (...), pero está ligado a ella.” (Mignolo, 2000, pág. 65)

Además, Mignolo (2000) expone que el reflejo de la cultura europea forjó la cultura criolla blanca, quienes pretendían con orgullo resaltar su americanidad, sin abandonar lo que de Europa les definía. Sobre todo, la necesidad de marcar la diferencia entre ellos y las personas negras e indígenas.

“La negación de Europa no fue, ni en la América hispana ni en la anglo-sajona, la negación de "Europeidad" puesto que ambos casos, y en todo el impulso de la conciencia criolla blanca, se trataba de ser americanos sin dejar de ser europeos; de ser americanos pero distintos a los amerindios y a la población afro-americana. Si la conciencia criolla se definió con respecto a Europa en términos geo-políticos, en términos raciales se definió su relación con la población criolla negra y con la indígena.” (Mignolo, 2000, pág. 69)

Siguiendo a Mignolo (2000) la idea de post-colonialidad, de creación de un nuevo establecimiento mantiene las jerarquías y estratificaciones a razón de raza. Se pensó en una libertad con beneficios a quienes se consideraban herederos de las coronas, y sosteniendo el statu quo.

“En suma, "hemisferio occidental" y "nuestra América" son figuras fundamentales del imaginario criollo, sajón e ibérico, pero no del imaginario amerindio (en el norte y en el sur), o del imaginario afro-americano (tanto en América Latina, como en el Caribe, como en América del Norte).” (Mignolo, 2000, pág. 68)

Habiendo hecho este breve recorrido, siguiendo a Césaire (1972; 2006) se debe resaltar que en la construcción del post-colonialismo, al igual que en el colonialismo, se ha normalizado el negar la humanidad de seres semejantes. . Por ello persiste esta intrínseca relación con el racismo, el colonialismo y el operar del capitalismo en territorios étnicos. En esta medida, este autor invita a un ejercicio profundo a nivel sociocultural de descolonizar las mentes, la vida y las interacciones sociales. Así lo señala

(...) la relación entre lo consciente y lo real es extremadamente compleja. Es por esto que es igual de necesario decolonizar nuestras mentes, nuestra vida en el interior, al mismo tiempo que decolonizamos la sociedad. (...) al final, debemos lidiar con la única raza a la que se le niega hasta la noción de humanidad.
(Césaire, 1972, pág. 31, traducción propia)

1.2 Conceptualización de raza, etnicidad, racismo y discriminación racial

Este aparte expone algunas definiciones de raza, etnicidad, y racismo. Su relevancia radica en permite contar con una base para entender cómo las relaciones sociales, y por ende, la toma de decisiones está permeada, y prácticamente definida por estos fenómenos.

El enfoque de esta investigación es étnico racial, es decir, se abordará como una intersección, puesto que no es posible establecer una diferencia diametral entre los mismos. Focalizar una de estas categorías y no la otra, redundaría en ignorar la problemática como un todo.

“(...) la etno-racialidad se convirtió en el engranaje de la diferencia colonial. (...) Fue con y a partir del circuito comercial del Atlántico cuando la esclavitud se convirtió en sinónimo de negritud.” (Mignolo, 2000, pág. 63)

1.2.1 Etnicidad

Partiendo de la base que, lo étnico se refiere, sobre todo a las prácticas culturales, a la relación con el territorio, opciones propias de futuro, formas de gobierno, cosmovisión, desde allí, los grupos étnicos se encuentran en sus formas de relacionarse y habitar el entorno. Por su parte, lo racial está más ligado a aspectos fenotípicos, no de manera exclusiva, pues en algunos casos también se refiere al origen territorial, historia común (ej. esclavización), factores socioeconómicos (asociados a la exclusión), estigmatización (asignación de un rol).

No obstante, a partir de las disertaciones de Wade, se infiere que “las identificaciones raciales y étnicas sí se superponen tanto analítica como prácticamente. En un nivel abstracto, tanto la raza como la etnicidad contienen un discurso sobre los orígenes y sobre la transmisión de las esencias a través de las generaciones.” (Wade, 2000, pág. 29, traducción propia)

Wade anota inicialmente, que “con el desmantelamiento del racismo científico se empezó a utilizar la expresión ‘grupo étnico’ (...) para referirse a grupos que todavía se consideraban agrupaciones biológicas, sin ser razas biológicas. De ahí en adelante, la palabra se ha empleado para referirse a grupos de gente considerados

como minorías dentro de sus naciones estado.” (Wade, 2000, pág. 23, traducción propia)

Wade (2000) analiza la definición de etnicidad, retomando varios autores, y concluye que aún es difusa la diferencia entre raza y etnicidad, ya que si bien, la etnicidad se puede entender como “una construcción social para las identificaciones de la diferencia y la igualdad, (...) lo mismo podría decirse de la raza, el género y la clase (...); no obstante, resalta que “el consenso general es que la etnicidad se refiere a las diferencias ‘culturales’, mientras que la raza se refiere a las diferencias fenotípicas (...)” (Wade, 2000, pág. 24, traducción propia)

Como lo cita Wade, para Banks, la etnicidad es una creación antropológica y la define a partir de diversos preceptos provenientes de esta rama, como “una colección de afirmaciones más bien simplistas y obvias sobre las fronteras, la otredad, las metas y los logros, el ser y la identidad, y la descendencia y la clasificación que han construido tanto el antropólogo como el sujeto” (Wade, 2000, pág. 24, traducción propia)

Wade (2000) considera que la etnicidad no se puede entender aislado al lugar donde se desarrolla la cultura desde las diferencias. Al mismo tiempo, su posición está encaminada a entender los dos términos de una manera complementaria, y no diametralmente diferentes, así mismo afirma que no se puede negar la raza por su carga histórica, porque “negar un papel específico a las identificaciones raciales, o a las discriminaciones que se basan en ellas, es desdibujar la *historia particular* por la cual dichas identificaciones llegan a tener su fuerza efectiva.” (Wade, 2000, pág. 29, traducción propia)

Por su parte, Césaire (1972) ofrece una definición de etnicidad, como un aspecto definitivo al momento de entender un grupo en particular, como la base que determina su forma de ser y habitar este mundo.

“Diría, entonces, no etnicidad, sino identity (identidad), palabra que designa bien lo que designa: lo que es fundamental, aquello sobre lo que el resto se edifica y puede edificarse, el núcleo duro e irreductible; lo que da a un hombre, a una cultura, a una

civilización su propio carácter, su estilo y su irreductible singularidad.” (Césaire, 1972, pág. 89, traducción propia)

1.2.2 Raza

En este mismo orden, Césaire (1972) relaciona la etnicidad con la raza y la pertenencia, como una forma de identificarse y reivindicar la exigibilidad de derechos que esta implica, tanto como individuos y como comunidad.

“Todo eso ha sido negritud: búsqueda de nuestra identidad, afirmación de nuestro derecho a la diferencia, requerimiento hecho a todos de un reconocimiento de ese derecho y del respeto de nuestra personalidad comunitaria.” (Césaire, 1972, pág. 90, traducción propia)

Y así, Mignolo (2003) aborda lo racial como una construcción social que tiene raíces históricas en la organización a los grupos poblacionales a manera de estratos a partir de la raza a la que pertenecen. Es así como todas las personas son atravesadas por lo racial, solo que, se ubican en diferentes niveles, unos en situación de privilegio y otros en condición de exclusión.

“En este punto, es necesario mencionar un giro nuevo y crucial en el imaginario del sistema-mundo moderno/colonial. Si los siglos XVI y XVII estaban dominados por el imaginario cristiano (...), a finales del siglo XIX asistimos a un cambio radical. La "pureza de sangre" dejó de medirse en términos religiosos y pasó a basarse en el color de la piel; y éste comenzó a ser utilizado para distinguir la "raza" aria de otras "razas" y, cada vez más, para justificar la superioridad de la "raza" anglosajona con respecto del resto.” (Mignolo, 2003, pág. 92)

Quijano (1999) resalta las líneas divisorias creadas desde muy temprano, entre lo avanzado y lo atrasado, el primero, en representación de lo blanco, y el segundo, definitorio de lo negro.

(...) el momento inicial de lo que, desde el siglo XVII, se constituye en el mito fundacional de la modernidad, la idea de un original estado de naturaleza en el proceso de la especie y de una escala de desarrollo histórico que va desde lo “primitivo” (lo más próximo a la “naturaleza”, que por supuesto incluía a los “negros”,

ante todo y luego a los “indios”) hasta lo más “civilizado” (que, por supuesto, era Europa), pasando por “Oriente” (India, China) (Quijano A. , 1999, pág. 149).

Por su parte, López (2000) define la raza, iniciando con una crítica a la concepción de Hudgins, quien lo explica como

(...) alguien es negro si tiene un solo antecedente africano, o si tiene una “nariz chata” o “la cabeza con un cabello parecido a la lana”. Empiezo por aquí porque en los últimos dos siglos nuestra concepción de raza no ha progresado mucho más allá de la visión primitiva defendida por el juez Tucker. (López, 2000, pág. 240, traducción propia)

Lo que llama la atención de López (2000) es que, realmente, esta definición, que se puede percibir como básica, sigue imperando actualmente, y es validada por los estamentos sociales. Así, precisamente, se caracteriza a las personas negras.

Y lo racial, que como lo anotó anteriormente López (2000), atraviesa la vida de quienes habitan este mundo, se ha perpetuado como la manera de definir a los seres humanos, de diferenciar formas de actuar, capacidades de agencia, ubicación geográfica, roles sociales, entre otros aspectos, que están naturalizados.

(...) “existe una especie de ‘etiqueta racial’, un conjunto de códigos interpretativos y significados raciales que operan en la interacción de la vida diaria... La raza se convierte en ‘sentido común’, una forma de comprender, explicar y actuar en el mundo”. Esta etiqueta social de la ignorancia común es evidente en el discurso jurídico de la raza. (López, 2000, pág. 240, traducción propia)

Para este autor, el concepto de “raza” lo sostiene la existencia de un grupo de seres humanos que comparten aspectos de procedencia y forma de vida, así como aspectos físicos, que los relacionan de una manera superficial. Lo que realmente genera estas clasificaciones son construcciones sociales.

La raza debe entenderse como un fenómeno social sui generis en el que sistemas de significado controvertidos sirven como conexiones entre rasgos físicos, rostros y características personales. En otras palabras, los significados sociales conectan nuestras almas. (...) Los referentes de términos como “negro” y “blanco” son grupos

sociales, no ramas genéticamente distintas de la humanidad. (López, 2000, pág. 240, traducción propia)

En conclusión, como lo explica Mbembe, “<La raza es la negación de la idea de lo común>”. (Mbembe, 2013, pág. 19) Es un mecanismo de diferenciación, de separación y de definición de espacios a ocupar en el mundo, en la escala social, económica, política.

Retomando la postura de López (2000), sobre la construcción social de la raza, y la manera como se ha recurrido a mecanismos para comprobar su legitimidad, y no ha sido posible, porque realmente se caen por su peso.

Más bien, la noción de que la humanidad puede dividirse a lo largo de líneas blancas, negras y amarillas revela el origen social en lugar del científico de la raza. (...) Sin embargo, la historia de la ciencia ha sido durante mucho tiempo la historia de los esfuerzos fallidos para justificar estas creencias sociales. (...). "El siglo XIX fue un período de búsqueda exhaustiva y, como resultó, inútil de criterios para definir y describir las diferencias raciales." (López, 2000, pág. 241, traducción propia)

La raza constituye entonces un constructo ideado para regular las relaciones sociales. El concepto raza ha sido creado, transmitido, y aprendido de generación en generación. López (2000) retoma una concepción de la formación racial.

La raza debe ser vista como una construcción social. Es decir, la interacción humana en lugar de la diferenciación natural debe verse como la fuente y la base continua para la categorización racial. El proceso por el cual surgen los significados raciales ha sido etiquetado como formación racial. En esta formulación, la raza no es determinante o un residuo de algún otro fenómeno social, sino que se erige por sí sola como una amalgama de fuerzas sociales en competencia. La formación racial incluye tanto el surgimiento de grupos raciales como su constante cosificación en el pensamiento social. (López, 2000, pág. 243, traducción propia)

1.2.3 Racismo

Iniciando con el planteamiento de Bhabha (1994), el racismo atiende a la carga pesada que la sociedad le asigna a la pertinencia a un grupo social. Su ciudadanía

termina siendo construida como de segunda categoría y ello redundando en prácticas transversales de discriminación, carencia en acceso a derechos, todo ello basado en la diferenciación racial. Desde ese punto, se genera entonces el racismo y la discriminación racial, teniendo como base la diferenciación racial construida y aceptada socialmente.

Caballero (2000) define el racismo a partir de varios aspectos determinantes:

Creer que los seres humanos se dividen, fundamentalmente, en razas. (...) Asignar a las razas características inmutables, y creer que los caracteres transmitidos hereditariamente no son sólo los rasgos físicos, sino también ciertas aptitudes y actitudes psicológicas, que son las que generan las diferencias culturales que se pueden apreciar. Creer que existe una jerarquía entre razas siendo alguna, o algunas de ellas, superiores a las otras. Entender la mezcla de las razas como un proceso de degeneración de las razas “superiores”. (Caballero, 2000, pág. 95)

Por su parte, Grosfoguel (2012) cita la definición de racismo construida por Frantz Fanon, “Para Fanon, el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el «sistema imperialista/occidentocéntrico/cristianocéntrico/capitalista/patriarcal/moderno/colonial».” (Grosfoguel, 2012, pág. 93)

Fanon (2010) teoriza la línea del ser y no ser, desde el reconocimiento de derechos basado en el reconocimiento de la humanidad y del merecimiento de quienes son considerados superiores socialmente, en términos raciales, en contraposición con la negación de la humanidad, por tanto de la titularidad de derechos.

Hay una zona de no-ser, una región extraordinariamente estéril y árida, una rampa esencialmente despojada, desde la que puede nacer un auténtico surgimiento. (Fanon, 2010, pág. 42)

El racismo, si bien está ligado a una connotación histórica basada en la supuesta superioridad de razas, constituye en la actualidad una práctica social, y un factor determinante en todos los aspectos de relacionamiento humano, permea el ámbito político, económico, cultural, y hace parte de escenarios como la educación, el

trabajo, en fin, las relaciones humanas como un todo. Para Fanon (2010), el racismo es el máximo exponente y el factor que mejor explica las formas de poder que tienen como base el colonialismo y la colonialidad.

Siguiendo esta línea, Quijano (1999) sostiene que, el racismo, a pesar de no ser la única forma de discriminación, si se erige como un sistema de dominación fuerte que se relaciona con los demás, y generalmente, predomina.

La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero comienzo de la formación de América y del capitalismo, en el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes fue impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa. (Quijano A. , 1999, pág. 141)

Quijano (1999) sostiene que el racismo es una estrategia eficaz de identificación y separación de grupos sociales, que es decisoria al momento de toma de decisiones económicas, políticas y sociales.

Impuesta como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo, según ella fueron distribuidas las principales nuevas identidades sociales y geoculturales del mundo. (Quijano A. , 1999, pág. 141)

Y que además, como lo argumenta Quijano (1999) ha demostrado su eficiencia en la perdurabilidad de los preceptos raciales, a través del tiempo. Si bien, se considera políticamente incorrecto llamar la raza a la escena como factor que justifica la discriminación y el racismo, sigue vigente en la actualidad.

Es, pues, profunda, perdurable y virtualmente universal, la admisión de que “raza” es un fenómeno de la biología humana que tiene implicaciones necesarias en la historia natural de la especie y, en consecuencia, en la historia de las relaciones de poder entre las gentes. En esto radica, sin duda, la excepcional eficacia de este moderno instrumento de dominación social. (Quijano A. , 1999).

Así pues, siguiendo López (2000) y DiAngelo (2020) el racismo es la base de la sociedad que habitamos. Es un problema estructural, basado en la falsa creación de la superioridad de las razas. Es una ideología materializada en una realidad que

ha estratificado a los seres humanos, basándose en diferencias raciales. El racismo es un sistema que requiere una estructura social, política, económica y cultural, encargada de mantener el statu quo. Así lo expresa este autor

El racismo y la estigmatización racial perjudican no sólo a la víctima y al autor de actos racistas individuales, sino también a la sociedad en su conjunto. El racismo es una violación del ideal del igualitarismo, de que "todos los hombres son creados iguales" y cada persona es un agente moral igual, (...). Una sociedad en la que algunos miembros están regularmente sujetos a la degradación debido a su raza difícilmente ejemplifica este ideal. El hecho de que el sistema jurídico no haya reparado los daños del racismo y de los insultos raciales transmite a todos la lección que el igualitarismo no es un principio fundamental; la ley, a través de la inacción, enseña implícitamente que el respeto por los individuos es de poca importancia. (López, 2000, pág. 181, traducción propia)

Por su parte, Robin DiAngelo (2020), ofrece una definición de racismo que explica muy bien el carácter sistemático de este,

El racismo es lo que sucede cuando respaldas el sesgo racial de un grupo con autoridad legal y control institucional. ... Cuando respaldas el sesgo colectivo de un grupo con ese tipo de poder, se transforma en un sistema de gran alcance. Se convierte en el valor predeterminado. Es automático. No depende de su acuerdo, creencia o aprobación. Está circulando 24/7, 365. (DiAngelo, 2020, traducción propia)

No obstante, siguiendo a Delgado (2000) nos han enseñado a pensar en un racista como alguien que consciente e intencionalmente busca lastimar a las personas en función de la raza. Hay una percepción desde la conciencia, de hacer las cosas con intención. Por lo tanto, se cree que el racismo es una acción individual y tiene efectos individuales, pero es necesario entender que en realidad es una estructura de poder y dominación que influye en todas las áreas de nuestras vidas y causa problemas sociales. Este sistema está inmerso en el lenguaje y en los actos cotidianos, como reflejo o resultado de las políticas nacionales, e internacionales. Así lo expresa este autor

Otra manifestación del racismo inconsciente es similar al desliz de la lengua. Uno podría llamarlo un desliz de la mente: mientras uno dice lo que uno pretende, uno no logra comprender las implicaciones racistas de las palabras o el comportamiento benignamente motivado de uno. (Delgado, 2000, pág. 320, traducción propia)

Esa manera de categorizar a la humanidad, continúa Delgado (2000), permite la existencia de estereotipos arraigados socialmente, que son fáciles de aprender, en tanto se utilizan de manera recurrente para explicar fenómenos sociales, comportamientos, y rendimiento. Luego se generaliza al respecto.

Los cognitivistas ven el proceso de categorización como una fuente común de estereotipos raciales y de otro tipo. Todos los seres humanos tienden a categorizar para dar sentido a la experiencia. (...) Cuando una categoría (por ejemplo, la categoría de persona negra o persona blanca) se correlaciona con una dimensión continúa (por ejemplo, el rango de inteligencia humana o la propensión a la violencia), uno tiende a exagerar las diferencias entre categorías en esa dimensión y a minimizar las diferencias dentro de cada una. (Delgado, 2000, pág. 318, traducción propia)

Para Delgado (2000) clasificar a la sociedad en grupos hegemónicos y grupos externos es una práctica efectiva de la discriminación, permite entonces generar escenarios comunes donde se erigen estereotipos y preconcepciones que logran separar de manera visible cada grupo de personas, ubicando a quienes tienen una pertenencia étnico racial en lugares empobrecidos, peligrosos, sucios, y por ende, generar la carga de sospecha sobre el cuerpo de estas mujeres y hombres, suponer una procedencia o un oficio particular, se ha naturalizado en las sociedades. Así lo expresa este autor

Cuanto más importante es una clasificación particular de personas en un grupo para un individuo, más probable es que distinga claramente las características de las personas que pertenecen a los diferentes grupos. (...) Si un individuo es hostil hacia un grupo de personas, tiene una inversión emocional en preservar las diferenciaciones entre su propio grupo y el grupo del otro. Por lo tanto, la preservación de juicios inexactos sobre el grupo fuera es auto-compensante. Esto es particularmente así cuando el juicio prejuicioso ocurre en un entorno social que

acepta y fomenta actitudes negativas hacia el grupo fuera. En estos casos, el juicio grupal refuerza y ayuda a mantener el juicio individual sobre la falta de valor del grupo otro. (Delgado, 2000, pág. 319, traducción propia)

Delgado (2000) sustenta que naturalizar la discriminación racial y el racismo es el resultado de un aprendizaje generacional. Nadie nace siendo racista, pero la sociedad y los círculos cercanos lo enseñan a diario. La transmisión de conocimiento, de percepciones, de hechos históricos, al igual que inculcar estereotipos ha definido, no solo el relacionamiento entre personas, sino el fundamento de las estructuras sociales, económicas y políticas, que determinan, finalmente, el acceso a derechos. Así lo expresa

El contenido de las categorías sociales a las que las personas se encuentran asignadas se genera durante un largo período de tiempo dentro de una cultura y se transmite a los miembros individuales de la sociedad mediante un proceso cognitivista llamado asimilación. La asimilación implica aprender e internalizar preferencias y evaluaciones. Los individuos aprenden actitudes culturales y creencias sobre la raza muy temprano en la vida, en un momento en que es difícil separar las percepciones del maestro (generalmente un padre) de las propias. En otras palabras, uno aprende sobre la raza en un momento en que uno es muy sensible a los entornos sociales en los que vive. (...) Las lecciones aprendidas en esta etapa temprana del desarrollo no son cuestionadas; se aprenden como hechos más que como puntos de vista. (Delgado, 2000, pág. 319, traducción propia)

La creación de estereotipos se ve reflejado, para Delgado (2000), en la falta de representación o la tergiversación de rol de las personas racializadas en la construcción de una sociedad. Se naturaliza y se aceptan las prácticas excluyentes a partir de diversos mecanismos de justificación.

Si un individuo nunca ha conocido a un médico o abogado negro o está expuesto a los negros solo a través de un medio de comunicación donde son retratados en los roles estereotipados de comediante, criminal, músico o atleta, es probable que deduzca que los negros como grupo están naturalmente inclinados hacia cierto comportamiento y no son aptos para ciertos roles. Pero la lección no es explícita; se

aprende, se internaliza y se usa sin tener conocimiento de su origen. (Delgado, 2000, pág. 320, traducción propia)

Adicionalmente, de acuerdo con Delgado (2000) el lenguaje, una de las herramientas más poderosas de construcción de relaciones sociales, está permeado por ideas y concepciones racistas, que se expresan de manera cotidiana y tranquila, pues hacen parte del diario vivir. El lenguaje es una herramienta tan poderosa, que la gente se acostumbra y casi que no lo cuestiona.

El insulto racial sigue siendo uno de los canales más generalizados a través del cual se imparten actitudes discriminatorias. Ese lenguaje lesiona la dignidad y la autoestima de la persona a la que va dirigido, comunicando el mensaje de que las distinciones de raza son distinciones de mérito, dignidad, condición y personalidad. El oyente no sólo aprende e interioriza los mensajes contenidos en los insultos raciales; estos mensajes colorean las instituciones de nuestra sociedad y se transmiten a las generaciones siguientes. (Delgado, 2000, pág. 179, traducción propia)

Así mismo, como lo plantea el autor, lo aprendido culturalmente, se refleja en la toma de decisiones, genera sesgos que generalmente no son reconocidos por quienes tienen en sus manos dicha responsabilidad. Los estereotipos tienen un peso importante en la forma en que las instituciones se relacionan con los pueblos o individuos pertenecientes a grupos étnico – raciales. Los mecanismos de participación, la forma en que no se entienden las necesidades, prioridades y apuestas de estos. “Este mismo proceso opera en el caso de decisiones políticas de mayor alcance que llegan a la atención judicial debido a su impacto discriminatorio.” (Delgado, 2000, pág. 320, traducción propia)

Por lo tanto, el comportamiento racialmente prejuicioso que en realidad es el producto de las preferencias culturales aprendidas se experimenta como un reflejo de la deducción racional de la observación objetiva. El tomador de decisiones que no es consciente de la percepción selectiva que ha producido su estereotipo no lo verá como tal. Ella creerá que sus acciones no están motivadas por prejuicios raciales, sino por su atracción o aversión a los atributos que ha "observado" en los

grupos que ha favorecido o desfavorecido. (Delgado, 2000, pág. 320, traducción propia)

Es por esto que, a pesar de la constante negación de la existencia del racismo, para Delgado (2000), el resaltar el sentido histórico/anticuado que este implica, y la apelación al “resentimiento”, o al negarse a superar esa “práctica que ya no existe”.

Hoy, más de un siglo después de la abolición de la esclavitud, muchos ciudadanos sufren de actitudes y prácticas discriminatorias, infectando nuestro sistema económico, nuestras instituciones culturales y políticas, y las interacciones cotidianas de los individuos. La idea de que el color es una insignia de inferioridad y una justificación para la negación de oportunidades y la igualdad de trato está profundamente arraigada. (Delgado, 2000, pág. 179, traducción propia)

Como lo señala López (2000), el racismo no ha pasado de moda, sigue vigente, y determina acciones que causan afectaciones y daños reales a quienes son considerados de una categoría humana inferior. Así lo enfatiza

(...) El destino humano aún se basa en la ancestralidad y la apariencia. Las características de nuestro cabello, complexión y rasgos faciales aún influyen si somos libres o esclavizados, en sentido figurado. La raza domina nuestras vidas personales. (...) la raza determina nuestros prospectos económicos. (...) La raza permea nuestra política (...); y vicia la conducta de las fuerzas del orden. En resumen, la raza influye en cada aspecto de nuestras vidas. (López, 2000, pág. 239, traducción propia)

En la misma línea, siguiendo a López (2000), resalta lo racial en la esfera legal, particularmente en la manera en que se interpretan y aplican. Tienen cargas racistas que se manifiestan en los prejuicios a la hora de tomar decisiones, basadas en características, socialmente construidas, que se supone, definen el comportamiento de las personas negras, afrodescendientes. Así lo señala este autor,

(...) enfatizar el papel de la ley en la cosificación de las identidades raciales. Al embalsamar en forma de presunciones legales y cargas probatorias los prejuicios que la sociedad atribuye a los vestigios de ascendencia africana, Hudgins demuestra que la ley no solo sirve para reflejar sino para solidificar los prejuicios

sociales, haciendo de la ley un instrumento fundamental en la construcción y refuerzo de la subordinación racial. (López, 2000, pág. 239, traducción propia)

Así las cosas, López asevera: “Afirmo que no existe ningún cuerpo legal que no esté contaminado por el riguroso poder de la raza en nuestra sociedad.” (López, 2000, pág. 240, traducción propia)

Finalmente, en la línea de definir lo racial, de una manera más amplia, para Delgado (2000), es imperante entender que todas las personas están atravesadas por este concepto, quienes son considerados blancos son en sí una raza. La diferencia es la condición en la que, socialmente se percibe esta raza blanca. Lo que para unos grupos sociales – excluidos – representa un problema, para el grupo hegemónico implica sostener unas condiciones de privilegio.

Es importante tener en cuenta que a partir de esta definición, los blancos existen como una raza. No son solo las personas llamadas “de color” las que encuentran que sus identidades están mediadas por la raza o las que están implicadas en la construcción y mantenimiento de las construcciones raciales. La identidad blanca es igualmente una fabricación racial y los blancos están igualmente, o incluso más, implicados en la preservación del estatus quo construido racialmente. (López, 2000, pág. 240, traducción propia)

Así entonces, existe un interés de mantener las líneas raciales que estratifican, con el fin de perpetuar el poder históricamente sostenido. En este sentido, el autor expresa “explícitamente animo a los blancos a prestar atención crítica a las construcciones raciales.” (López, 2000, pág. 240, traducción propia)

En esta línea, DiAngelo (2000) se refiere a la complicidad y a la inexistencia de una posible posición neutral cuando de racismo se trata. No solo basta con no realizar prácticas racistas, sino de beneficiarse del sistema sin generar ninguna acción que propenda por mejorar las condiciones del segmento de la sociedad que está siendo discriminado.

El racismo es la base de la sociedad en la que estamos. Y simplemente continuar sin absolutamente ninguna interrupción activa de ese sistema es ser cómplice de él. Y de esa manera, podemos decir que las personas blancas y agradables que

realmente no están haciendo nada más que ser buenas personas son racistas. Somos cómplices de ese sistema. No hay un lugar neutral. (DiAngelo, 2020, traducción propia)

Es por ello que este autor considera que es indispensable generar conciencia acerca de estos procesos y construcciones que despojan y discriminan a los pueblos étnicos. En consecuencia, frente a la matriz racista del colonialismo, desde una perspectiva decolonial, no se pretende un aislamiento de culturas y civilizaciones, sino entender que la colonización nunca más debe ser la manera de construir sociabilidades y políticas públicas, culturales y económicas. Se debe partir de la conciencia del proceso histórico del colonialismo y el racismo para evitar su naturalización y normalización, y reivindicar los derechos de los pueblos étnicos (Césaire, 1972; 2006). Así lo afirma,

(...) admito que está bien poner en contacto civilizaciones diferentes entre sí como una excelente forma de mezclar diferentes mundos... que una civilización retraída se atrofia... pero entonces formuló la siguiente pregunta: ¿la colonización realmente puso a las *civilizaciones en contacto*? O si se prefiere, de entre todas las formas para establecer contacto, ¿era esta la mejor? Yo respondo no. (Césaire, 1972, pág. 2, traducción propia)

En una misma línea, como lo plantea Cusicanqui (2018), no se trata de tomar posturas nostálgicas que aleguen un retorno al pasado en el que las culturas se consideren estáticas, monolíticas e idealizadas. Por el contrario, es una cuestión de partir de la conciencia del legado de la huella colonial para confrontarla, asumiendo que nuestras sociabilidades tienen múltiples pasados e historias que no pueden ser obviadas, y que desde esta conciencia del pasado y el presente se camine permanentemente la reivindicación de los derechos y dignificación de los pueblos étnicos (Cusicanqui, 2018).

1.3 Conceptualización de Racismo ambiental

Siguiendo a los autores citados en el presente marco teórico, tales como Bullard (2005), Keucheyan (2016) y Escobar (2000), el medio ambiente y la interacción del ser humano con este, así como los efectos negativos de los daños ambientales no

es un escenario neutro, constituye un terreno de lucha de poderes, por ende, de la imposición del poder hegemónico. Por ello, como lo puntualiza Keucheyan, que “La naturaleza no escapa a las relaciones de fuerza sociales: es la más política de las entidades.” (Keucheyan, 2016, pág. 13)

Las relaciones con la naturaleza y el medio ambiente se mueven por intereses económicos, pues es una fuente de recursos y materia prima para grandes empresas y prestadores de servicios públicos. Por ello la naturaleza ha sido asumida como una fuente de acumulación (Harvey, 2016; KEUCHEYAN, 2016).

De esta manera entonces, tal como lo plantea Keucheyan (2016), no escapa de las desigualdades existentes y sistemas de opresión que históricamente han reglado las relaciones humanas. Las decisiones políticas y económicas sobre el medio ambiente están mediadas por la imposición de poderes, la discriminación y la exclusión. Al respecto sostiene este autor

Así como existen desigualdades económicas o culturales, también se las encuentra en la relación de los individuos o grupos de individuos con la naturaleza, tanto con los recursos que ofrece como con la exposición a los efectos nefastos del desarrollo: polución, catástrofes naturales o industriales, calidad del agua, acceso a la energía... En ciertos casos, las desigualdades ambientales resultan de la acción del Estado, cuyas políticas están lejos de ser neutras en la materia, (...) En otros, son el fruto de la lógica del mercado entregada a ella misma. En otros más, son resultante de lógicas económicas y políticas inextricablemente mezcladas. (Keucheyan, 2016, pág. 15)

A este punto es necesario citar a (Davis, 2004) y (Crenshaw, 1991) Kimberlé Crenshaw, quienes establecen la necesidad de abordar las discriminaciones de manera integral, a partir de la perspectiva interseccional, que implica el cruce de diversos sistemas de opresión o factores de vulnerabilidad sobre un cuerpo, y posicionan la intersección mujer, raza y clase.

Keucheyan (2016), siguiendo los postulados de Davis (2004) y Crenshaw (1991), plantea que el medio ambiente y las injusticias que se dan a partir del acceso y uso, así como los beneficios y costos que resultan de la interacción entre los seres

humanos y la naturaleza, no pueden ser vistos de manera aislada, sino partiendo del entendimiento de la existencia de la interseccionalidad,

La “interseccionalidad” entre la raza, la clase y el género, (...) debe ser así completada por una cuarta dimensión, que viene a complicarla: la naturaleza. (...) Aquí nos concentraremos en la cuestión del racismo ambiental, es decir, en la intersección de la “naturaleza” y de la “raza”. Sin embargo, este fenómeno sólo se puede comprender con la condición de tener en cuenta el conjunto de las desigualdades en obra en el seno del sistema. (Keucheyan, 2016, págs. 15, 16)

Históricamente, señala este autor, se ha establecido que tanto la naturaleza como el medio ambiente son bienes comunes a todos los seres humanos, y que los efectos de su deterioro afectan a la humanidad como un todo. Sin embargo, esta percepción elimina la realidad de las discriminaciones y exclusiones existentes.

Estas desigualdades son inherentes a la constitución de los Estados-nación modernos. Sin embargo, fueron invisibilizados en el curso de la historia debido a (...) la idea de que la naturaleza es un bien universal accesible a todos, sin distinción de clase, de raza o de género. Si se mira de cerca, nada es más contrario a la realidad. (Keucheyan, 2016, pág. 20)

Es por ello que, la justicia ambiental es una reivindicación y exigencia del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, los derechos del pueblo negro y afrodescendiente,

El movimiento por la justicia ambiental no surgió ni del movimiento ecologista, que nace en los años cincuenta ni del movimiento ambientalista, que aparece en el siglo XIX, sino del movimiento de los derechos cívicos. (Keucheyan, 2016, pág. 20)

En esta línea, Bullard (2005, pág. 6) resalta que “La justicia ambiental se considera actualmente como un asunto de derechos humanos.” internacionalmente reconocido como un derecho, que va ligado a derechos fundamentales como la vida y la salud. Así lo afirma el autor

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, reconoce que toda persona tiene el derecho intrínseco a la vida, salud, y medioambiente saludable. (Bullard, 2005, pág. 6, traducción propia)

Sin embargo, en algunos países, los tomadores de decisiones relegan la importancia de la protección del medio ambiente con el fin de dar viabilidad a proyectos de desarrollo, priorizando la monetización ante la protección medioambiental.

No obstante, muchas naciones, (...) “han renunciado al poder de proteger estos derechos cuando hacerlo interferiría con ganancias corporativas” (Bullard, 2005, pág. 6, traducción propia)

Así, basado en evidencias de casos recurrentes, Keucheyan (2016) resalta la elevada coincidencia entre los lugares habitados por personas pertenecientes a grupos étnico-raciales y ubicados en las escalas sociales más excluidas, y los lugares escogidos para depositar los desechos.

(...) la raza es un factor explicativo, y en muchos casos el principal, de la localización de las descargas tóxicas en los Estados Unidos. Si usted quiere saber dónde tiene más posibilidades de ser sepultado un depósito de desechos, pregúntese dónde viven los negros, los hispanos, los amerindios y otras minorías raciales. Pregúntese también dónde se encuentran los barrios pobres. (Keucheyan, 2016, pág. 22)

En esta línea, sostiene Keucheyan (2016) que la situación de vulnerabilidad y discriminación preexistente, que redundo en el alto costo del daño medioambiental, se suma el bajo nivel de acceso a mecanismos de protección de derechos, al igual que el poco o nulo cubrimiento mediático de las problemáticas que les afectan.

Las categorías populares y las minorías raciales tienen en general una menor propensión a recurrir a la ley para impedir el enterramiento de desechos tóxicos cerca de sus barrios. Ésta es una de las razones por las cuales el Estado se libra de esos desechos en esos lugares. Su capacidad para movilizarse con eficacia, para adoptar iniciativas, también en principio es más baja, debido a una dotación en “capitales” (...) menor. (Keucheyan, 2016, pág. 21)

Robert D. Bullard va más allá y resalta que la invisibilización de las desigualdades responde a una estructura racista a la que obedece el movimiento ecologista, y cómo los intereses de quienes defienden el medio ambiente meramente desde la perspectiva universalista, blanquean la ecología. “Robert Bullard, (...) llama el

elitismo ambiental de los movimientos ecologistas dominantes. El color de la ecología no es el verde, sino el blanco. (Keucheyan, 2016, págs. 25, 26)”

De manera errónea, “El “medio ambiente” es considerado como ajeno a las relaciones de fuerza sociales. En realidad, es la más política de las entidades. (Keucheyan, 2016, pág. 26)” Lo anterior explica que siempre confluyen muchos intereses en torno al manejo del medio ambiente, el acceso al medio ambiente sano, y los lugares propensos a recibir los altos costos del desarrollo.

De acuerdo con Keucheyan (2016), el medio ambiente es político a tal punto que depende de cada país y sus políticas el manejo que se le dé. El medio ambiente es un sujeto de política pública, donde se priorizan los aspectos de interés que están relacionados con este.

Adopta una significación diferente según el país en que uno se encuentre. En la medida en que el medio ambiente es construido por políticas públicas, la forma Estado-nación influye en sus contornos. El medio ambiente es también un concepto de clase que, al incluir ciertas problemáticas, por esa misma razón excluye a otras. (Keucheyan, 2016, pág. 26)

Finalmente, para Keucheyan (2016), la comprensión del racismo ambiental facilita el entendimiento del racismo como concepto, ya que refuerza la realidad de que no es necesario tener la intención de discriminar sino el hecho de ser favorecido de los beneficios que el sistema le representa a un sector de la población, que, a su vez, redundan en efectos negativos hacia otro u otros sectores de la población.

La noción de racismo ambiental permite tomar conciencia de las desigualdades que afectan la relación de los grupos sociales con el medio ambiente. No obstante, también permite progresar en la comprensión de lo que es el racismo. El racismo no es una simple cuestión de opinión o de intención racista, aunque también sea eso. En la época moderna tiene una dimensión sistémica. Esto significa que, independientemente de lo que piensen, ciertas categorías de individuos - involuntariamente - sacan provecho de la lógica racista, debido a que están del “buen” lado de las discriminaciones y que otros las padecen. (Keucheyan, 2016, pág. 30)

En esta línea, el racismo no se puede abordar de manera aislada, se entrelaza con otras discriminaciones, y con aspectos relacionados con intereses económicos y sociales, así como las decisiones sobre el medio ambiente.

El racismo es un fenómeno “multiescalar”, que se despliega en varias escalas: la del individuo y de ideología, la del mercado y de su lógica de asignación de los bienes, la del Estado y de las políticas públicas que pone en marcha, por ejemplo en materia de gestión de los desechos tóxicos, por último la de las relaciones internacionales y del imperialismo. Estas escalas no dejan de interactuar y entrecruzarse unas con otras. (Keucheyan, 2016, págs. 30, 31)

Esta afirmación se explica de manera específica a través del siguiente ejemplo, el cual ilustra un caso de costo beneficio, donde una empresa causa daños medioambientales en un barrio de población negra, basada, en principio, en criterios económicos, pero realmente, están tomando decisiones que responden a las ventajas que les ofrece el sistema racista.

Imaginemos una empresa contaminante que se instala cerca de un barrio negro en los Estados Unidos, (...) La decisión de la empresa de instalarse en ese sitio está motivada, hipotéticamente, por un solo criterio: el precio del bien inmueble, que desafía toda competencia en ese sitio. (...) ¿Se trata de una decisión racista? No si el criterio considerado es la intención, puesto que la única intención de la empresa es minimizar sus costos. El problema es que el precio del bien inmueble en ese sitio está estrechamente correlacionado con la “sedimentación espacial de las desigualdades raciales” (...) El mercado, en este sentido, es un mecanismo de asignación que es todo menos neutro. El proceso de formación de los precios del bien inmueble internaliza no sólo las contaminaciones sino también la lógica racista. Por eso en materia de comprensión del racismo, interesarse en las opiniones y las intenciones no basta. Se requiere un punto de vista sistémico, porque es el único en condiciones de percibir la dimensión multiescalar del fenómeno. Naturalmente, la variable racial no está aislada, se mezcla con otras, y principalmente con la variable de clase. (Keucheyan, 2016, pág. 31)

Con base en estos elementos, Keucheyan (2016) define el racismo ambiental como una de las formas de inequidad en términos ambientales, que no se puede abordar

de manera aislada sino como una confluencia o intersección de desigualdades existentes.

(...) Las desigualdades ambientales constituyen un dato estructurante de las relaciones de fuerza políticas en la época moderna. Ellas implican que las consecuencias nefastas del desarrollo capitalista no son padecidas de la misma manera, en el mismo grado, por todos los sectores de la población. (...) Una forma particular de desigualdad ecológica llamó aquí nuestra atención: el racismo ambiental. Pero comprender este último supone tener en cuenta otras lógicas no igualitarias, la clase y el género en particular. (Keucheyan, 2016, pág. 74)

Por su parte, Bullard argumenta que el racismo ambiental resulta de la privación de derechos a las poblaciones compuestas por personas racializadas.

El racismo ambiental es uno de los eslabones de la cadena de actos del desarrollo insostenible. Implica la negación de derechos humanos, protección del medio ambiente, y oportunidades económicas a las comunidades donde viven y trabajan las personas de color. (Bullard, 2005, pág. 1, traducción propia)

La histórica negación de derechos a la que se han visto sometidas las personas con pertenencia étnica y racializadas, redundando en la falta de acceso a mecanismos de protección, y la idea de que, como lo dice Bullard, finalmente no la merecen. “Muchas personas de color asumen que ellos “no tienen la complejidad para la protección”. (Bullard, 2005, pág. 2, traducción propia)

Se complementa lo anterior, con lo que Bullard llama el racismo internalizado, y es cómo el sistema racista, que permea todos los aspectos de la vida humana, termina resonando en quienes son víctimas de este, estos prejuicios dividen los grupos y generan escenarios propicios para la violación de derechos humanos.

**El racismo internalizado - el proceso mediante el cual un miembro de un grupo oprimido acepta y vive bajo los mitos y estereotipos incorrectos que han sido impuestos a ese grupo - aún evita que el grupo oprimido trabaje junto, aunque sepan que es por su propio interés. (Bullard, 2005, pág. 33, traducción propia)

En esta línea, los niveles de protección a las personas racializadas, que son quienes reciben la mayor parte de los daños medioambientales, tanto en garantías legales como en la incidencia en publicidad y medios de comunicación son mínimos.

Si una comunidad es pobre o está habitada mayoritariamente por personas de color, existe una buena posibilidad de que reciba menos protección que una comunidad adinerada o blanca. Esta situación es uno de los resultados de las políticas ambientales del país, la mayoría “distribuyen los costos en un patrón regresivo mientras otorgan beneficios desproporcionados para las personas educadas y adineradas”. (Bullard, 2001, pág. 3, traducción propia)

De ahí que Bullard defienda la justicia ambiental como mecanismo de defensa de derechos para las personas que son excluidas y afectadas por las decisiones medioambientales. “(...) la discriminación ambiental es injusta, inética e inmoral. (...) la justicia ambiental es una cuestión de derechos civiles y derechos humanos.” (Bullard, 2005, págs. 1, 2, traducción propia)

Para Bullard (2005), el medio ambiente se define a través de decisiones políticas, que se materializan mediante políticas públicas. Así, los daños medioambientales causados por actividades que contribuyen al desarrollo, las cuales se ejecutan generalmente en lugares habitados por personas que no se benefician de manera igualitaria de las políticas públicas, terminan siendo elecciones humanas. Los efectos medioambientales adversos afectan otros derechos como el derecho a la salud, el agua, entre otros.

Cómo se toman las decisiones y quién las toma puede tener importantes implicaciones para la salud. La salud es el enfoque principal del movimiento de justicia ambiental en Estados Unidos. (...) Aquí, La Organización Mundial de la Salud define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no sólo como “la ausencia de enfermedad”. Estas definiciones de medio ambiente y salud capturan la esencia de las luchas por justicia ambiental que libran las comunidades conformadas por grupos de personas de color y de bajos ingresos. (Bullard, *The quest for environmental justice*. ISBN 10: 1-57805-120-7, 2005, pág. 2)

Los daños medioambientales afectan de manera inequitativa a diferentes sectores de la población, por ello, para quienes reciben los costos desproporcionados, de acuerdo con Bullard, el medio ambiente es un derecho esencial.

Para las comunidades ubicadas en la primera línea del ataque ambiental, la protección ambiental es un asunto de vida o muerte. Esas comunidades definen protección medioambiental como un derecho básico. (Bullard, 2005, pág. 2, traducción propia)

Las desigualdades en cuanto el goce efectivo del derecho a un medio ambiente sano, son determinadas por el racismo estructural que permea las instituciones y por ende, la formulación e implementación de políticas públicas, encaminadas a ubicar a las personas en determinados sitios, así como permitir la instalación de empresas cuyas actividades afectan el medio ambiente.

Muchas de las diferencias, en tanto calidad del medio ambiente entre las comunidades negras y blancas son el resultado del racismo institucional. El racismo institucional influencia el uso local de la tierra, la aplicación de regulación medioambiental, la ubicación de instalaciones industriales, y, para las personas de color, la elección de lugar para vivir, trabajar y jugar. (Bullard, 2005, pág. 32, traducción propia)

En esta línea, cabe resaltar el origen del concepto racismo ambiental, y qué impulsó nombrarlo de esta manera, de acuerdo con Keucheyan,

La noción de “racismo ambiental” fue forjada por el reverendo Benjamin Chavis, quien coordinó el informe sobre la relación entre la raza y los desechos tóxicos y que en la época era director de la comisión por la “justicia racial” de la United Church of Christ. (Keucheyan, 2016, págs. 22, 23)

Bullard propone una definición de racismo ambiental que evoca la diversidad de aspectos que confluyen para materializar la injusticia que recae sobre los pueblos racializados en la toma de decisiones medioambientales. Una desproporcional distribución costo beneficio, a través de la implementación de políticas públicas y proyectos de desarrollo, que se apoya de un sistema racista y clasista, que se ha encargado de ubicar a cada quien en el lugar que se ha considerado le corresponde,

es decir, la las personas racializadas y empobrecidas, en los lugares más vulnerables y con mayores riesgos medioambientales.

El racismo ambiental se refiere a cualquier política, práctica o directiva que afecta de manera diferencial o ponga en desventaja (con intención o no) a individuos, grupos, o comunidades a razón de su raza o color. El racismo ambiental en políticas públicas y prácticas industriales resulta en otorgar el beneficio a los blancos y transferir los costos a la gente de color. El racismo ambiental es reforzado por las instituciones gubernamentales, legales, económicas, políticas y militares. (Bullard, 2005, pág. 32, traducción propia)

Westra evoca a Benjamin Chavis, quien profundiza en la definición de racismo ambiental, haciendo evidente que, ante la distribución desproporcional de los daños ambientales, los procesos de reparación por parte del Estado y las compensaciones provenientes de las empresas se dan en menor proporción y son más demoradas en zonas donde habitan personas que ya de hecho son discriminadas y excluidas.

El estudio del director, Benjamin Chavis, acuñó el término “racismo ambiental”. Otros estudios revelan que las compensaciones por daños son menores en las comunidades donde habitan minorías, y que los esfuerzos ordenados por el gobierno son más lentos y menos exhaustivos. Entre las consecuencias morales del daño causado por el humano a los ecosistemas, está la distribución racista de los riesgos ambientales. (WESTRA, 2001, pág. XVIII, traducción propia)

La ubicación de las personas racializadas en los espacios, están determinados por marcadores racistas que las posicionan en los lugares más vulnerables, y los más propensos a ser receptores de elementos de contaminación. Su acceso a mecanismos de protección es directamente proporcional a sus niveles de vulnerabilidad.

La protección desigual puede resultar de las decisiones de uso de la tierra que determinan la ubicación de las comodidades o incomodidades residenciales. Comunidades de comunidades pobres de afroamericanos sufren el “triple” de vulnerabilidad a la ubicación de instalaciones nocivas. (Bullard, 2001, pág. 7, traducción propia)

Las personas racializadas usualmente no se encuentran en el poder, o por lo menos no ocupan las mayorías decisivas, en este sentido, en aspectos como la distribución de la tierra su participación es casi nula.

Las personas de color generalmente son víctimas de las decisiones del uso de la tierra que reflejan los arreglos de poder realizados por la sociedad dominante. (...) Pocas personas de color participan en la escritura de estas leyes. De hecho, la mayoría de los individuos que participan encajan en una descripción bastante reducida. (...) son hombres; 9 de 10 hombres son blancos; y la mayoría superan los 40 años. (Bullard, 2005, pág. 32, traducción propia)

No es coincidencia que los lugares más empobrecidos, alejados, riesgosos de las ciudades y de los países estén poblados por personas históricamente excluidas del sistema económico y político, y, tal como lo argumenta Bullard (2005), estos son los lugares escogidos para depositar los desechos y desarrollar las industrias más contaminantes.

En gran parte, las personas negras, las personas de color, e inquilinos habitan las comunidades más vulnerables. Las leyes de zonificación son frecuentemente armas legales “desplegadas en la causa del racismo” permitiendo que cierta gente “indeseable” - como inmigrantes, personas de color y gente pobre - y operaciones, como las industrias contaminantes, sean excluidas de las áreas. (Bullard, 2005, pág. 33, traducción propia)

Siendo el medio ambiente un escenario político, manejado por intereses económicos y estratégicos principalmente, Bullard sostiene que los tomadores de decisiones están compuestos por las clases sociales y políticas históricamente en el poder.

La toma de decisiones de política medioambiental frecuentemente refleja los arreglos de poder de las sociedades e instituciones dominantes. El racismo ambiental pone en desventaja a la gente de color mientras provee de ventajas a los blancos. Una forma de exacción ilegal forza a las personas de color a pagar los costos de los beneficios medioambientales que recibe el público en general. La cuestión sobre quién *paga* y quién se *beneficia* de las políticas medioambientales e

industriales actuales es central para este análisis de racismo ambiental y otros sistemas de dominación y explotación. (Bullard, 2005, pág. 34, traducción propia)

Bullard (2005) parte de la base de que las decisiones medioambientales son tomadas por la clase dominante, históricamente excluyente, tienen un origen racista que implica costos elevados para las poblaciones racializadas y beneficios en términos medioambientales y económicos para los sectores favorecidos.

El racismo influye en la probabilidad de exposición a riesgos ambientales y de salud, así como influencia su acceso a servicios de atención en salud. Muchas de las políticas ambientales nacionales distribuyen los costos en patrones regresivos mientras brindan beneficios desproporcionados para los blancos y las personas que se encuentran en el extremo superior de la escala de educación y de ingresos. (Bullard, 2005, pág. 34, traducción propia)

Generalmente, la sociedad y la clase dirigente acepta más fácilmente las diferencias de clase que el racismo, y se tiende a responsabilizar al clasismo de las exclusiones y segregaciones que viven sectores de la población, que coincidentalmente son, en su mayoría personas negras e indígenas. Westra (2001) lo aborda a partir del caso estadounidense, sin embargo, es un modelo que se sigue en otras áreas del mundo, como Latinoamérica.

(...) En Estados Unidos, las personas pobres, afroamericanas, hispano americanas, y nativos americanos están expuestas de manera desproporcionada ante la contaminación medioambiental. Porque las minorías afectadas son considerablemente más pobres que el americano promedio, algunas personas han argumentado que las minorías experimentan cargas desproporcionadas debido no al racismo, sino a la pobreza por sí sola. (...) Sin embargo, la mayoría de los estudios que han investigado la influencia relativa del ingreso y la raza en la exposición a toxinas ambientales, (...) concluyen que la raza es un factor influyente, más de lo que se ha pensado. (WESTRA, 2001, pág. XVII, traducción propia)

Siguiendo a Westra (2001), en ocasiones, el racismo ambiental más allá de reflejarse en la toma de decisiones que afectan a unos segmentos de la población más que a otros, obedeciendo a lógicas racistas, es expresado de manera tácita, y

reafirma, además, que el racismo se da en todos los niveles, no solo en algunas naciones, así lo muestra el caso al que Westra hace alusión a continuación.

Este racismo existe internacional y nacionalmente. El 12 de diciembre de 1991, Lawrence Summers, economista jefe del Banco Mundial, argumentó en un memo dirigido a colegas que la contaminación tóxica debería estar ubicada en países pobres. (...) Y debía ser en los países pobres donde la salud se viera afectada, argumentó. (WESTRA, 2001, pág. XVIII, traducción propia)

Aclara Westra (2001) que el hecho de que las zonas más afectadas por los riesgos medioambientales estén poblados por personas no-blancas, y que a su vez no creen las políticas, no tomen las decisiones de inversión de proyectos de desarrollo, y que finalmente no perciban los beneficios, o que estos sean mínimos, es lo que genera la variable racismo en el plano ambiental.

El elemento de racismo aparece cuando se considera que los países pobres son abrumadoramente no-blancos, (...) Entonces la propuesta anterior equivale a esto: Los peligros tóxicos deberían localizarse entre los no-blancos, aunque sean generados por blancos en procesos industriales inventados en su mayoría por blancos y empleados por corporaciones propiedad de gente blanca que proveen productos y servicios mayoritariamente para blancos. La economía dominante, también inventada por blancos, le otorga a esta propuesta un apoyo “racialmente neutral”. (WESTRA, 2001, pág. XVIII, traducción propia)

Para Bullard es importante que todos los sectores sociales, de diversos orígenes raciales, culturales, políticos, de clase, entre otros factores, tengan voz en los temas medioambientales, ya que “La equidad social se refiere al rol de los factores sociológicos, como la raza, etnicidad, clase, cultura, estilos de vida, y poder político, en la toma de decisiones ambientales.” (Bullard, 2001, pág. 8, traducción propia)

Se plantea así, siguiendo a Keucheyan (2016), por parte de diferentes autores, se apuesta por el posicionamiento de la justicia ambiental en la agenda de los asuntos medioambientales, como respuesta al racismo ambiental, desde el movimiento por los derechos civiles, se explica por la exclusión de esta problemática por parte de

las vocerías del ambientalismo, ignorando las afectaciones exacerbadas que los daños ambientales causan en los pueblos racializados y empobrecidos.

Que el movimiento por la justicia ambiental sea en el origen una emanación del movimiento por los derechos cívicos se explica por supuesto por la centralidad de la cuestión racial en el seno de este último. Pero esto también se explica por la ausencia casi completa del hecho de que las organizaciones ambientalistas estadounidenses tradicionales tengan en cuenta esta dimensión. (Keucheyan, 2016, pág. 24)

Adicionalmente, Bullard (2001) propone elementos clave para lograr la justicia ambiental, que busca que los gobiernos avancen hacia la protección y la reparación de los daños causados por las decisiones tomadas, que afectan a las poblaciones empobrecidas y racializadas.

Principios de justicia ambiental: para ponerle fin a la inequidad en protección medioambiental, los gobiernos deberían adoptar cinco principios de justicia ambiental: garantizar el derecho a la protección ambiental, prevenir el daño antes de que ocurra, trasladar la carga de la prueba a los contaminadores, obviar la prueba de la intención de discriminar, corregir o reparar las inequidades existentes. (Bullard, 2001, pág. 9, traducción propia)

En este sentido, como lo menciona este autor, los Estados deberían adoptar políticas encaminadas a evitar y mitigar los daños que se puedan causar al medio ambiente.

Prevención del daño: Prevención, la eliminación de la amenaza antes de que ocurra el daño, debería ser la principal estrategia de los gobiernos. (Bullard, 2001, pág. 12, traducción propia)

El tercer elemento fundamental, siguiendo a este autor, consiste en que sean los agentes contaminadores los que asuman la responsabilidad de probar su accionar, ya que son ellos quienes causan los daños al medio ambiente y someten a la población históricamente excluida a sus consecuencias. Los grupos poblacionales racializados y empobrecidos no tienen fácil acceso a mecanismos de protección ni

defensa de derechos, y no son ellos quienes deberían tener una carga adicional. Así lo manifiesta

Trasladar la carga de la prueba: Bajo el sistema actual, los individuos que desafían a los contaminadores deben probar que han sido afectados, discriminados, o afectados de manera desproporcionada. Pocas comunidades pobres y de minorías cuentan con los recursos para contratar abogados, testigos expertos, ni los doctores que se necesitan para sostener tal desafío. En este sentido, la carga de la prueba debe dirigirse hacia los contaminadores que hacen daño, discriminan, o no ofrecen protección igualitaria a las minorías y otras clases sobrecargadas. (Bullard, 2001, pág. 16, traducción propia)

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con Bullard (2001), uno de los más grandes desafíos e impedimentos que se presentan al momento de avanzar en procesos contra la discriminación, sobre todo, la discriminación racial, es probar la intencionalidad. Como lo mencionamos anteriormente, el racismo sobrepasa la intención de discriminar, pues es un sistema de dominación que permea la estructura de la sociedad en todos los aspectos, y del cual se beneficia la población no racializada. En este sentido, Bullard propone:

Obviar la prueba de intencionalidad: Las leyes deberían permitir impactos y pesos estadísticos impares - en lugar de la "intención" - de inferir discriminación intencional o deliberada en un tribunal de justicia es casi imposible. (Bullard, 2001, pág. 18, traducción propia)

Finalmente, Bullard (2001) defiende que la justicia ambiental requiere de la reparación de las desigualdades costo-beneficio, para resarcir el daño causado por las acciones de agentes contaminantes, y la discriminación que supuso la toma de decisiones al respecto.

Reparar las inequidades: Los impactos desproporcionados deben ser reparados mediante la focalización de acciones y recursos. Los recursos deberían ser gastados donde los problemas de salud y ambientales son más graves, determinados bajo algún esquema de clasificación - pero no uno que esté limitado a la evaluación de riesgos. (Bullard, 2001, pág. 20, traducción propia)

Bullard (2001) hace un llamado a repensar y redirigir la forma en que se exige la prueba de los daños ambientales, pues las empresas que generan actividades contaminantes se excusan en herramientas técnicas y delegan en las víctimas la responsabilidad de probar los daños causados.

Confiar únicamente en la prueba de una relación de causa-efecto tal como la define la epidemiología tradicional disfraz a la forma explotadora en que las industrias contaminantes han operado en algunas comunidades y aprueba una aceptación pasiva del status quo. Debido a que es difícil establecer la causalidad, las industrias contaminantes tienen la ventaja. Siempre se pueden esconder tras la “ciencia” y exigir “pruebas” de que sus actividades causan daño a la humanidad o al medio ambiente. (Bullard, 2001, pág. 21, traducción propia)

Bullard (2001) insiste en que la justicia ambiental debe partir del principio de no discriminación y protección de derechos.

La solución a la protección desigual se encuentra en el ámbito de justicia ambiental para todas las personas. Ninguna comunidad - rica o pobre, negra o blanca - debería convertirse en una “zona sacrificada”. (Bullard, 2001, pág. 22, traducción propia)

En este orden, Bullard (2001) exige que además de reconocer que discrimina a un sector de la población en cuanto al derecho a un medio ambiente sano, la reivindicación de la justicia ambiental tenga soporte legal.

(...) la justicia ambiental requiere fundamento legislativo. No es suficiente con demostrar la existencia de condiciones injustas; las prácticas que causan las condiciones deben convertirse en ilegales. (Bullard, 2001, pág. 23, traducción propia)

En esta línea, para Mills (2001), los efectos negativos de los daños medioambientales, no deberían concentrarse en las personas racializadas y empobrecidas, no debería existir un criterio racista para la toma de decisiones medioambientales. Esta toma de decisiones debería tener en su eje central los derechos humanos universales, y plantearse mecanismos de protección para la población en general, sin discriminaciones.

El problema de la eliminación de residuos suele plantearse con un desafío ambiental para una población “humana” no diferenciada y sin razas. (Mills, 2001, pág. 73, traducción propia)

Sin embargo, como lo resaltaba Keucheyan anteriormente, el medio ambiente es una entidad política, y las decisiones que se toman sobre este reflejan los prejuicios, preconcepciones, discriminaciones que definen el accionar quienes representan los gobiernos y las empresas. El punto aquí, de acuerdo, es que se le resta humanidad a las personas racializadas y empobrecidas.

(...) los propios negros han sido considerados desechables y excrementos en el cuerpo de la política y, por lo tanto, parte del problema. (Mills, 2001, pág. 74, traducción propia)

Mills (2001) pone sobre la mesa tres argumentos, encaminados a la redefinición de las relaciones sociales, políticas y económicas, teniendo en cuenta los espacios físicos y el punto en donde las decisiones políticas los han ubicados en tanto la relación con el medio ambiente, para este caso, resalto dos:

- Una concepción materialista completa de la política requiere una teorización de sus relaciones espaciales. (Mills, 2001, pág. 74, traducción propia)
- Las cuestiones medioambientales necesitan ser re pensadas y reformuladas en este contexto de política y espacio racializados. (Mills, 2001, pág. 74, traducción propia)

De esta manera, Mills (2001) hace el llamado a abandonar la idea que defiende la imparcialidad de los Estados y quienes los gobiernan, en cuanto la distribución de recursos, la ubicación espacial de la población, la creación y aplicación de leyes. Estos escenarios están altamente influenciados por los sesgos, los prejuicios, y las formas discriminatorias de tratar a los sectores sociales considerados diferentes e inferiores, que se ha gestado por siglos.

El Estado (...) históricamente ha funcionado como un estado racial, haciendo cumplir leyes que no han sido neutrales sino sesgadas a favor de la ciudadanía blanca. (Mills, 2001, pág. 76, traducción propia)

Mills (2001) resalta que la política no es un escenario inerte, sino que responde a las posiciones, pensamientos, creencias de seres humanos, que tienen la potestad de definir qué espacios ocupa cada grupo social.

La política está, después de todo, situada en espacio, ocupa espacio y está habitada por seres físicos que se mueven en el espacio y establecen ciertas relaciones espaciales entre unos y otros, de manera individual o colectiva. (Mills, 2001, pág. 76, traducción propia)

Según lo apunta Mills (2001), la herencia racista que derivan en prácticas excluyentes, hace que socialmente las personas negras sean asociadas a connotaciones negativas, a la fealdad, a la pobreza, al atraso, al peligro, a lo malo per se.

Bajo esta lógica, de acuerdo con Mills (2001), se justifica que donde se encuentran ubicados se puedan lanzar desechos, generar actividades contaminantes, y expulsar todo lo que sobra en la sociedad.

Estas imágenes y asociaciones entran en una oscura sinergia entre sí, generando un significado de negatividad para todo propósito, conceptualizado en el vocabulario de la contaminación y la enfermedad y la amenaza a la civilización. (Mills, 2001, pág. 83, traducción propia)

Mills (2001) pone en discusión que cuando se habla del interés general en términos de política, no se refieren a la expresión plana, de sentido universal, sino de cómo se logra beneficiar a la “mayoría” de la población, aunque esto implique sacrificar a una menor parte de esta. Lo interesante aquí es encontrar quienes componen esa “mayoría”, y quienes la “minoría” y dónde están ubicados.

En un marco cognitivo racista, las concepciones blancas de "su" cuerpo político blanco y sus prescripciones morales para su futuro estarán impulsadas en gran medida por estas metáforas. La raza y sus tropas en evolución influyen en lo que se considera moralmente apropiado: lo que se siente bien y lo que simplemente se siente mal. (Mills, 2001, pág. 84, traducción propia)

Sostiene Mills (2001) que la distribución inequitativa del costo y el beneficio de la contaminación medio ambiental debe entenderse como el resultado de factores

determinantes en la política pública, es decir, la discriminación, los prejuicios raciales basados en la deshumanización de las personas negras.

El funcionamiento del Estado, la estructura del espacio, la estigmatización histórica de los negros dentro de la comunidad política blanca, la ética parcializada resultante, todos estos aspectos necesitan tenerse en cuenta para entender la distribución de los costos de la polución. (Mills, 2001, pág. 84, traducción propia)

En esta línea, Mills (2001) continúa con el posicionamiento del concepto de “basura negra”, como una expresión redundante para la población blanca, quienes están a cargo de la toma de decisiones, pues parten de la preconcepción que las personas negras son inferiores, sucias, peligrosas, por lo cual, casi que naturalmente pertenecen a los lugares destinados para depositar los desechos e implementar proyectos contaminantes.

Para la población blanca, los miembros de pleno derecho de la política, los negros han sido históricamente tan menospreciados que la "basura negra" ha sido casi pleonástico. (...) Basura negra, (...) es redundante, porque lo “negro” ya tiene connotaciones de basura. (Mills, 2001, pág. 84, traducción propia)

En concordancia con lo anterior, plantea Mills (2001), es necesario desmitificar la neutralidad de la toma de decisiones, el objetivo del bien común y la supuesta igualdad respecto de las afectaciones medioambientales. El racismo es un aspecto central a tener en cuenta.

Es entonces, fundamental para Mills (2001) cuestionar quiénes hacen parte del bien común, expresión que denota a simple vista generalidad, imparcialidad, universalidad, pero que en realidad está definido por quienes hacen parte de las “mayorías” y sacrifica a quienes componen las mal llamadas “minorías”.

¿Qué hacemos con la basura? Depende de quienes son “nosotros”. Si la política es racial, y el poder político significativamente racializado, entonces habrá un “nosotros” blanco que cuenta con una racionalidad colectiva y psicología moral grupal que difiere de la minoría negra y tiene un poder diferenciado sobre ellos. (Mills, 2001, pág. 84, traducción propia)

Plantea Mills (2001), que si quienes están en el poder son quienes definen el bien común, es su colectividad la que se ve beneficiada, a pesar de quienes, a su consideración, no pertenecen, es decir, quienes históricamente han sido discriminados, que además se encuentran ubicados en lugares alejados y excluidos. (Mills, 2001)

Si bien el concepto de “basura negra”, posicionado por Mills (2001) se percibe como fuerte, algunas personas podrían decir que es agresivo, lo que el autor realmente está plasmando en una expresión de lo que realmente creen las mayorías blancas sobre la población negra.

El histórico desprecio por las vidas negras y lo que representan, la constante asociación con lo malo, lo sucio, lo desechable, hace que el concepto propuesto por el autor, denominado “basura negra” no sea descabellado ni alejado de la real percepción existente. (Mills, 2001, pág. 84, traducción propia)

Para Mills (2001), si el “nosotros” quiere protegerse de la polución, busca habitar un ambiente más limpio y sano, a su vez, no considera a la gente negra parte del nosotros, sino una de las causas del problema en sí mismo.

Desde esta perspectiva, los negros no son parte del “nosotros” que se enfrenta a los problemas ambientales de que hacer con nuestros desechos. Más bien, se siente que los negros *mismos* son un problema ambiental, con el cual “nosotros” los humanos completos (la población blanca) debemos lidiar. (Mills, 2001, pág. 84, traducción propia)

Y al ser necesario, según lo cuestiona Mills (2001), para la población blanca limpiar el ambiente, embellecer los espacios, habitar tranquilamente, la gente negra debe ser ubicada en los lugares que concuerdan con la descripción otorgada por parte del sistema racista.

Percepciones que sugieren que los lugares donde están ubicadas las personas negras son sucios, abandonados, pobres, peligrosos, pero además, que esos son los lugares que deben habitar porque en los espacios que están a la vista de todos, los escenarios con acceso a derechos, pierden valor y belleza si hay gente negra en ellos. (Mills, 2001, pág. 86, traducción propia)

Es decir, para Mills (2001), el sistema racista ha establecido unos límites para el desarrollo del ser de los pueblos racializados, se les permite estar, pero en los escenarios donde les “corresponde”.

En el macro-cuerpo blanco colectivo, estos espacios son literalmente manchas en el paisaje que tenemos que tolerar pero que no deben traspasar sus fronteras. (Mills, 2001, págs. 87-88, traducción propia)

Concluye Mills, respecto de los argumentos anteriores que “La raza es, entonces, el principio espacial básico de la organización del vasto cuerpo de la política.” (Mills, 2001, pág. 86, traducción propia)

Así, Mills (2001) defiende que quienes ostentan el poder político y económico, desde su posición y su lugar de enunciación blanco, definen que, como lo sostiene Mills (2001), con miras a lograr su bienestar, deben adjudicar derechos, espacios, escenarios, facilidades, de manera diferenciada a partir de un marcador racial.

Si el papel del soberano, como "alma" (Hobbes) del cuerpo político es mantener la salud del cuerpo, entonces el papel del soberano blanco es velar por la salud del cuerpo blanco. Para un estado fundado en el contrato racial, esto significa la asignación diferencial de recursos a la creación y protección de espacios blancos. E históricamente, el estado de hecho ha creado tanto el espacio como la raza, al demarcar por ley las poblaciones codificadas como razas, al imponer la segregación y al tratar divergentemente los respectivos espacios divididos. (Mills, 2001, págs. 86-87, traducción propia)

Mills (2001) sostiene que los recursos están puestos a disposición de las “mayorías” blancas, contrastando con la carencia de acceso a derechos, acceso a servicios y mayor vulnerabilidad a las que se enfrentan los grupos racializados y empobrecidos.

El estado racial actúa en nombre de la ciudadanía blanca, volcando recursos en los espacios blancos privilegiados -escuelas, infraestructura, generación de empleo, carreteras, asistencia hipotecaria, protección policial- ya que son nuestros espacios, los espacios que nosotros, los ciudadanos plenos de la política, habitamos. Así que no hay un espacio común, como el mítico contrato social sin raza. Más bien, están nuestros espacios y sus espacios. (Mills, 2001, pág. 87, traducción propia)

Mills (2001) llama la atención sobre la asignación deliberada de los espacios, que es definida por el cuerpo político blanco, que debe ubicar a las personas negras, racializadas, empobrecidas en aquellos lugares que van acorde a la categoría humana que les ha sido impuesta.

Pero incluso sus espacios son, en cierto sentido, nuestros: son los espacios que les concedemos, en la medida en que (salvo la expulsión total) tienen que ocupar algún espacio. Originalmente, es explícito, entonces, que los negros no tienen libertad de acción sobre la topografía del cuerpo político. Más bien, están restringidos a espacios de segunda clase, como corresponde a su estatus de subpersona de segunda clase. (Mills, 2001, pág. 87, traducción propia)

Mills (2001) aborda la naturalización generalizada de la discriminación, y como consecuencia, las decisiones se toman casi que, de manera automática, entendiendo que hay unos lugares para los desechos, y en aras de proteger el medio ambiente, es necesario mantenerlos allá para que no se esparzan. Esto sucede hasta con los movimientos ambientalistas, que están copados de personas que analizan el problema desde una posición de privilegio.

“La diferencia racial y espacial está marcada por diferencias a las que se les debe dar peso en nuestra deliberación moral... Los ambientalistas tienen una concepción natural de la contaminación como una norma negativa. Si un lugar es concebido como un espacio contaminado debido a los identificadores raciales, necesitamos contener esa contaminación dentro de esa área.” Debido a que esos ya son espacios donde se arrojan los desperdicios, lo más apropiado es que los desechos producto de la industrialización deberían depositarse allá. (Mills, 2001, págs. 87-88, traducción propia)

Así las cosas, para Mills (2001), el ambientalismo convencional es, por lo tanto, el ambientalismo apropiado para este cuerpo - el cuerpo normativo, el cuerpo blanco. Dado que el espacio blanco ha sido históricamente privilegiado, los ecologistas blancos pueden poner énfasis en la preservación y la conservación, eslóganes apropiados para aquellos cuyos espacios se han beneficiado de la plena incorporación al macro cuerpo blanco. (Mills, 2001, pág. 86, traducción propia)

Mills (2001) argumenta que si bien las personas que se encuentran expuestas a los mayores riesgos medioambientales coinciden en ser generalmente racializadas y empobrecidas, se encuentra que el marcador racial es el aspecto más relevante al momento de dividir a la población por sectores. El racismo empobrece.

La Comisión de Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo, encontró varios aspectos en el primer estudio sobre este tema: La raza es “el factor individual más importante (por ejemplo, más importante que los ingresos, tasa de propiedad de viviendas, y precios de las propiedades) en la ubicación de los sitios de desechos tóxicos abandonados. (Mills, 2001, pág. 89)

Finalmente, siguiendo a Mills (2001) la reflexión y llamado a la acción en este punto, va encaminado al reconocimiento de la existencia del racismo ambiental, de las discriminaciones que redundan en las inequidades en tanto el relacionamiento con el medio ambiente diferenciado por pertenencia racial. Mientras se siga negando el racismo y el racismo ambiental, bajo la premisa de que los daños medioambientales

afectan a todos los sectores de la población por igual, no se trabajará hacia las soluciones estructurales que requiere este problema.

En la medida en que el marco ambientalista dominante de los problemas se base en el cuerpo sin raza del contrato social incoloro, continuará mistificando y ocultando estas realidades raciales. El "ambientalismo" para los negros tiene que significar no solo desafiar los patrones de eliminación de desechos, sino también, en efecto, su propio estatus como el desecho racializado, la basura negra, del cuerpo político blanco. (Mills, 2001, pág. 89)

Conclusiones capítulo 1

El desarrollo de este capítulo ha demostrado que el enfoque teórico propuesto es adecuado para el estudio. El marco teórico nos permite concluir que existen estructuras económicas, políticas y sociales que perpetúan relaciones de dominación, que se traducen en opresión e injusticia.

El marco teórico expuesto, permite comprender la relación existente entre el colonialismo, el colonialismo interno y el sistema de opresión basado en la pertenencia étnico-racial, y sus repercusiones en el campo medioambiental.

Se deja claro que el racismo es un factor que direcciona la toma de decisiones sobre los lugares donde se realizan los proyectos y políticas públicas con alto impacto medioambiental.

SEGUNDO CAPÍTULO

2. El racismo ambiental como factor determinante en las tensiones entre derechos humanos y desarrollo

Introducción

Este capítulo se centra el debate sobre medio ambiente y raza, partiendo de los derechos humanos como marco de análisis, aterrizando en la aproximación a algunos mecanismos del Sistema Internacional de los Derechos Humanos que propenden por la protección de los derechos de los pueblos étnico raciales, que permita, a través de casos que ilustran la problemática de la raza y las políticas públicas de medio ambiente, establecer un marco general de las barreras y de los

costos negativos desproporcionados existentes para grupos étnicos, tradicionalmente discriminados.

El desarrollo metodológico de este punto se realizará a partir de la construcción de un estudio de casos que, partiendo de un de derechos humanos, permitan ilustrar el caso colombiano, particularmente el del Río Anchicayá, que se abordará en el tercer capítulo.

2.1 Modelos de desarrollo.

Este aparte pretende exponer los modelos de desarrollo en tensión al momento de examinar las relaciones de disparidad causadas por aspectos raciales y de clase. El punto de partida es el análisis de la manera en que opera el colonialismo a favor de intereses económicos, como base de la construcción social y económica actual, fundamento principal del modelo de desarrollo hegemónico. Al mismo tiempo, se abordan los derechos humanos como marco de análisis, que pretende generar el debate sobre el cumplimiento de estos, para así, a través de un estudio de casos comparados sobre racismo ambiental, poner en tensión derechos humanos y desarrollo.

2.1.1 Modelo de crecimiento económico

Para Escobar (2007) la creación del desarrollo como concepto reconocido a nivel mundial después de la segunda posguerra, suponía la presentación de dos opciones en contraposición, a saber, una idea de lo deseado y lo no deseado. Se puso en escena un objetivo a alcanzar, un grupo de países que lo anhelara, y un aparato que brindara las herramientas para lograrlo. De este modo, países como Colombia se encuentran en ese el grupo que añora lograr niveles de desarrollo establecidos por los países dominantes.

Para los países poderosos, como apunta Escobar (2007), el nuevo enemigo, a partir de la segunda posguerra fue el subdesarrollo. Se instauró así de la necesidad de luchar contra las condiciones que causaban que algunos países no cumplieran con ciertos estándares económicos, sociales y culturales, lo cual se tornó en una lucha

destinada a brindar herramientas para lograr que estos países avanzaran hacia un mejor estatus. Así lo afirma este autor

A finales de los cuarenta, la lucha real entre Oriente y Occidente se había desplazado al Tercer Mundo; el desarrollo se convirtió en la gran estrategia para promover tal rivalidad, y al mismo tiempo, impulsar los proyectos de la civilización industrial. (Escobar, 2007, pág. 69)

En este sentido, continúa Escobar (2007), los gobiernos locales, con miras a replicar el modelo civilizatorio de los llamados países desarrollados en los países subdesarrollados, han adoptado mecanismos que relega los sistemas de creencias y vivencias de los pueblos al campo de la superstición y entronizan la modernización como único destino. Así lo afirma este autor.

La premisa básica era la creencia del papel de la modernización como única fuerza capaz de destruir supersticiones y relaciones arcaicas, sin importar el costo social, cultural y político. La industrialización y la urbanización eran consideradas rutas progresivas e inevitables hacia la modernización. Solo mediante el desarrollo material podría producirse el progreso social, cultural y político (Escobar, 2007, pág. 78)

De esta manera, como anota Babha (1994) se ha consolidado una lógica centro-periferia que erige el desarrollo desde unos focos particulares, los cuales coinciden con los países que han creado el orden mundial, y los segundos, con los países que han sido colonizados. Los primeros se encuentran en posiciones de poder, los segundos, deben seguir el ejemplo.

Lo anterior, refuerza lo que establece Fanon (2010), respecto de una de las características principales del capitalismo, la cual expresa como el capitalismo se erige, desde sus inicios, sobre las disparidades creadas entre países desarrollados y países considerados subdesarrollados.

De esta manera, continuando con Escobar (2007), el desarrollo se ha hecho camino, contribuyendo a la reproducción de una idea centralista que se alimenta de líneas de segregación con bases raciales, de clase y de género. Se separa lo rural de lo urbano, percibiendo y presentando la ruralidad como sinónimo de atraso, y al mismo

tiempo, como fuente de recursos naturales necesarios para el crecimiento económico.

No obstante, como señala Vela (2005), los modelos de desarrollo implantados de los países centrales, no han traído consigo prosperidad o bienestar para las poblaciones de los llamados países tercermundistas. Por el contrario, han acarreado políticas que profundizan la pobreza y la desigualdad. Es por ello que este autor afirma que

(...) los expertos del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo han afirmado en 2003 que en los aspectos económico, político y tecnológico el mundo nunca ha parecido ser tan libre y tan rico y, a la vez, tan injusto. (Citado en: Vela, 2005, pág. 35).

Del mismo modo, siguiendo a Escobar (2007) no solo a nivel mundial, sino en el plano local, los gobiernos, a través de la toma de decisiones en políticas públicas han ubicado espacialmente la población, de tal forma que permiten que un sector de ésta goce de los beneficios del “desarrollo” y otro sector asuma los costos o las cargas. Este otro sector ha estado compuesto por grupos étnico raciales, rurales, y empobrecidos que han sido históricamente discriminados, y cuyas prácticas y saberes propios han sido invalidados.

Frente al relacionamiento con la naturaleza, continúa Escobar (2007) cabe resaltar que la noción de desarrollo sienta sus bases en la idea de la explotación de recursos naturales, los cuales se encuentran principalmente en los países del Tercer Mundo, y mayoritariamente en los sectores rurales, donde están asentados los grupos étnicos. Estos recursos han sido a su vez el sustento del crecimiento de los países desarrollados. Al respecto este autor afirma

En 1948, un conocido funcionario de las Naciones Unidas expresó esta fe diciendo: “Todavía creo que el progreso humano depende del desarrollo y la aplicación en el mayor grado posible de la investigación científica... El desarrollo de un país depende ante todo de un factor material: primero, el conocimiento, y luego, la explotación de todos sus recursos naturales.” (Escobar, 2007, pág. 72).

A la par, como señala Vela (2005), para llevar a cabo la implementación del modelo a escala global, fue necesario crear un entramado institucional, político, económico y hasta cultural a distintas escalas. Así surgieron, apunta Escobar (2007) el Banco Mundial, inicialmente llamado BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y el Fondo Monetario Internacional FMI, con el fin de materializar los planes de socorro de los países del Primer Mundo hacia los tercermundistas.

Bhabha denuncia que la alternativa económica ofrecida por las organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, obedecen a prerrogativas poscoloniales, que ahondan las desigualdades y las discriminaciones.

“las “soluciones” económicas a la desigualdad a nivel nacional e internacional y la pobreza, ofrecidas por el FMI y el Banco Mundial, en efecto, tienen “el sentimiento del gobernante colonial,” (...) (mi énfasis) es la reproducción de economías duales y desiguales como efectos de la globalización lo que hace que las sociedades más pobres sean más vulnerables a la “cultura de la condicionalidad” a través de la cual lo que supuestamente es concesión de préstamos se convierte en la aplicación perentoria de la política. (...)” (Bhabha, 1994, traducción propia)

Para este entramado multilateral, continúa Escobar (2007), la pobreza se convirtió en un tema de discusión que fue definida a su vez por el Banco Mundial. En la lógica del desarrollo, lo importante era detectar aquellos aspectos que no funcionaban de la manera correcta y ofrecer una única salida. Las salidas de la pobreza se enfocaron en la unidireccionalidad del crecimiento económico. En este sentido señala este autor

“En 1948, cuando el Banco Mundial definió como pobres aquellos países con ingreso per cápita inferior a 100 dólares, casi por decreto, dos tercios de la población mundial fueron transformados en sujetos pobres. Y si el problema era de ingreso insuficiente, la solución era, evidentemente, el crecimiento económico. Fue así como la pobreza se convirtió en un concepto organizador y en objeto de una nueva problematización.” (Escobar, 2007, pág. 51).

De esta forma, continúa este autor, a lo largo de su historia, estuvo en manos de instituciones como el Banco Mundial ofrecer el neoliberalismo como alternativa de desarrollo para los países del Tercer Mundo. Es así como “el “desarrollo amistoso al mercado”, estrategia institucional del Banco Mundial para los noventa, constituyó la cristalización definitiva del retorno del neoliberalismo.” (Escobar, La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo, 2007, pág. 164).

Por su parte, apunta este autor, el Fondo Monetario Internacional aportaba al establecimiento de un orden económico que permitiera generar un ambiente propicio para llevar a cabo los cambios a los que se enfrentaban los países del Tercer Mundo.

“Los enfoques estatistas y redistributivos dieron paso a la liberalización del comercio y de los regímenes de inversión, a la privatización de empresas estatales, y a políticas de reestructuración y estabilización bajo el control del amenazador Fondo Monetario Internacional.” (Escobar, 2007, pág. 164)

Siguiendo a Babha (1994), es bien sabido que el modelo de desarrollo basado en políticas neoliberales y de apertura de mercado ahonda las desigualdades entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. A nivel interno, genera brechas entre las grandes ciudades y el campo aislado y excluido, y entre el avance en las tecnologías y los modos de producción tradicionales.

Por ello, siguiendo a Vela (2005) a pesar de los esfuerzos por erradicar la pobreza, a través de los años se han podido constatar los efectos negativos que ha generado este modelo de desarrollo, sus instituciones y particularmente el neoliberalismo de los 90, representado en la apertura económica. Así lo señala

No obstante, estas consideraciones, programas y acciones en favor de la equidad en las relaciones internacionales han tenido un impacto muy precario, (...) por la apertura de los mercados de los años 90, la pobreza y el atraso de la mayoría de los países siguieron incrementándose. (Vela, 2005, pág. 34)

Los mismos organismos multilaterales, como el Banco Mundial, han reconocido que la implementación de sus modelos no ha sido exitosa en todos los lugares del tercer

mundo intervenidos². De hecho, insisten en que la muestra de ello es la persistencia de la pobreza y la desigualdad (IPS, 2006; UNCTAD, 1996).

En este contexto, siguiendo a Escobar (2007) es necesario llamar la atención alrededor de estos procesos de cambio de paradigmas que se realizaron con un objetivo inicial que pretendía rescatar a las naciones de su situación de pobreza y atraso a través de políticas ambiciosas. Sin embargo, resalta esta autor, “nunca se tomó conciencia de que la transferencia no dependía simplemente de elementos técnicos sino también de factores sociales y culturales.” (Escobar, 2007, pág. 73)

De esta manera, continúa este autor, se evidencia la falta de pertinencia cultural que ha existido en la implementación del modelo de desarrollo capitalista, cuyo objetivo, entre otros, ha sido la imposición de modelos sociales y culturales acordes con los avances económicos que este pretende brindar. Al respecto afirma que

(,,,) en América Latina, Asia y África se ha predicado un peculiar evangelio con un fervor intenso: el “desarrollo”. Formulado inicialmente en Estados Unidos y Europa durante los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial y ansiosamente aceptado y mejorado por las elites y gobernantes del Tercer Mundo a partir de entonces, el modelo del desarrollo desde sus inicios contenía una propuesta históricamente inusitada desde un punto de vista antropológico: la transformación total de las culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo con los dictados de las del llamado Primer Mundo.” (Escobar, 2007, pág. 11)

Si bien la idea de que el desarrollo es la solución idónea a los problemas del Tercer Mundo ha tenido un gran eco a nivel mundial, lo cierto es que esta posición surgió de los Estados poderosos, y fue replicada por los gobernantes de los Estados objeto de intervención, quienes a su vez accedieron a transformaciones sociales con miras a avanzar en el camino del desarrollo, a costa de los sectores menos favorecidos (2007).

² Las mismas instituciones multilaterales en diversas oportunidades han reconocido que la implementación de su modelo de desarrollo no ha sido del todo efectiva, atendiendo a las rampantes estadísticas de pobreza y desigualdad en contextos locales intervenidos. Así por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo ha advertido en la Declaración de Midrand que En consecuencia, es desigual el efecto producido por la mundialización y la liberalización económica. (UNCTAD, 1996, pág. 3)

Como lo señala este autor, es así como los cambios exógenos terminaron convirtiendo la carrera por el desarrollo en un círculo vicioso, en el que sólo existe una verdad y una meta por lograr. Esta jornada deja atrás a sectores de la sociedad que no se acoplan a los nuevos escenarios, que son casualmente los segmentos de la población históricamente discriminados, los grupos étnico raciales, los campesinos y campesinas, las mujeres. Al respecto puntualiza que

el etnocentrismo y el patriarcado influyeron en la forma que tomó el desarrollo. Las poblaciones indígenas tenían que ser “modernizadas”, y aquí la modernización significaba la adopción de los valores “correctos”, es decir, los sustentados por la minoría blanca o la mayoría mestiza, (...). De otra parte, los programas de industrialización y desarrollo agrícola no solamente habían vuelto invisible a la mujer en su rol como productora, sino que además tendían a perpetuar su subordinación (...). Las formas de poder en cuanto a clase, género, raza y nacionalidad se ubicaron así en la teoría y en la práctica del desarrollo. (Escobar, La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo, 2007, pág. 83)

En definitiva, siguiendo a este autor, la réplica del modelo de desarrollo de crecimiento económico no funcionó en los países del Tercer Mundo, entre otros motivos, debido a las desventajas que estos presentan en términos de competitividad. Adicionalmente, este modelo de desarrollo impuesto no reconoce ni valora los procesos propios de toma de decisiones debido a su entendido como único camino hacia el crecimiento y avance de las sociedades.

2.1.2 Modelo de desarrollo humano - Amartya Sen

En este trabajo, ante las problemáticas ocasionadas por la implementación del modelo de desarrollo hegemónico, se considera apropiada la visión propuesta por Amartya Sen (2000) frente a lo que ha denominado desarrollo humano. Se considera así partiendo del análisis de Urquijo, (2008), para quien, “una de las ventajas del enfoque de las capacidades es que nos aleja del ámbito de los bienes, los ingresos, las utilidades, etc., para ahondar hasta el ámbito de los elementos constitutivos de la vida.” (Urquijo, 2008, pág. 56)

Este autor defiende la necesidad de garantizar la libertad de los seres humanos para lograr lo que tienen capacidad de hacer. En este sentido, sostiene que, “el desarrollo puede concebirse, (...) como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutaban los individuos. (Sen, 2000, pág. 19).

Sen (2000) sostiene que las condiciones para lograr el desarrollo humano exceden lo material, y en este orden, determinar los niveles de desarrollo requiere un estudio más profundo de factores que afectan directamente la existencia misma.

Siguiendo a este autor, si bien el desarrollo suele asumirse en términos de crecimiento económico, es necesario analizarlo desde aspectos fundamentales para que las personas logren gozar de los beneficios que este trae consigo. Es así como argumenta que el desarrollo debe posibilitar que las personas sean libres. Al respecto afirma

El crecimiento del PNB o de las rentas personales puede ser, desde luego, un medio muy importante para expandir las libertades de que disfrutaban los miembros de la sociedad. Pero las libertades también dependen de otros determinantes, como las instituciones sociales y económicas (por ejemplo, los servicios de educación y de atención médica), así como de los derechos políticos y humanos (entre ellos, la libertad para participar en debates y escrutinios públicos). (Sen, 2000, pág. 19).

En la misma línea, considera que los ingresos que reciba una persona y los bienes que puede adquirir con estos, no son los únicos factores a evaluar cuando de desarrollo se trata, en este sentido, defiende que,

La utilidad de la riqueza reside en las cosas que nos permite hacer, es decir, en las libertades fundamentales que nos ayuda a conseguir. (...) Una concepción satisfactoria del desarrollo debe ir mucho más allá de la acumulación de riqueza y del crecimiento del producto nacional bruto y de otras variables relacionadas con la renta. (Sen, 2000, pág. 30).

En este orden de ideas, sin desestimar la importancia del crecimiento económico y en clave del potenciamiento de las libertades, pone de presente que el desarrollo debe percibirse desde la ampliación de su significado y alcances prestando especial atención a las condiciones con las que cuentan las personas que en él participan.

De este modo, este autor hace un llamado a atender el papel que debería cumplir el desarrollo en tanto mecanismo de crecimiento económico. En su concepción.

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia (...). (Sen, 2000, pág. 19).

En efecto, para este autor no es suficiente la existencia de mecanismos e instituciones para que el desarrollo funcione como tal. Cree fundamental que las personas sean libres de interactuar en el mercado y en general, la vida en comunidad. (Sen, 2000). Por ello, hace hincapié en las desigualdades como limitantes de la libre participación en el mercado. Así lo expresa

También debemos examinar, por otra parte, las persistentes privaciones de algunos segmentos de la comunidad que continúan estando excluidos de los beneficios de la sociedad de mercado, así como las opiniones generales, incluidas las críticas, que pueden tener los individuos sobre el estilo de vida y sobre los valores relacionados con la cultura de los mercados. (Sen, 2000, pág. 24).

Adicionalmente, toma en cuenta los aspectos externos que influyen en los niveles de libertad de las personas, tales como “el papel de los valores sociales y de las costumbres vigentes, que pueden influir en las libertades de que disfrutan los individuos y que tienen razones para valorar.” (Sen, 2000, pág. 26).

De esta forma, sostiene que “el éxito de una sociedad ha de evaluarse, desde este punto de vista, principalmente en función de las libertades fundamentales de que disfrutan sus miembros.” (Sen, 2000, pág. 35). En este sentido, expresa que una sociedad desigual, donde un amplio sector de los individuos no tiene acceso a los servicios sociales y derechos fundamentales, no puede llamarse desarrollada, el desarrollo pasa por las libertades y las libertades constituyen un camino hacia el desarrollo.

Continuando con su mirada, considera fundamental la capacidad del ser humano para ser parte del sistema, es decir, tener acceso a los beneficios que la sociedad ofrece. En este sentido, argumenta que

(...) El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo, y estos temas son fundamentales para el proceso de desarrollo. La cuestión que nos interesa aquí está relacionada con lo que podríamos llamar (...) el "aspecto de agencia" del individuo. (...) En este estudio se refiere especialmente al papel de agencia del individuo como miembro del público y como participante en actividades económicas, sociales y políticas (...). (Sen, 2000, págs. 35,36).

Por su parte, el concepto de pobreza este autor va más allá de la cantidad de ingresos con los que cuentan las personas, pues hay aspectos que coartan a los individuos para alcanzar todo su potencial. La pobreza no debe ser medida solamente en ingresos y capacidad de pago, sino que debe ser asumida como una estructura que limita la libertad de participación en el mercado en condiciones dignas y equitativas. Por esta razón, en su sentir, “existen buenas razones para concebir la pobreza como la privación de capacidades básicas y no sólo como una renta baja.” (Sen, 2000, pág. 37).

El análisis de Sen (2000) pone en evidencia la contraposición existente entre las tradiciones culturales de los pueblos y la necesidad de desarrollar las economías, llamando la atención sobre la importancia de que sean las personas las que decidan si sacrifican uno u otro aspecto.

Esto se conecta con lo advertido por Escobar (2007), en la medida en que como se mencionó arriba, en los países del Tercer Mundo los modelos de desarrollo son impuestos de manera externa y asumidos por parte de los gobiernos de tal manera que lo priorizan y sobreponen frente a los escenarios rurales, campesinos, empobrecidos, que suelen estar habitados por grupos étnicos en su mayoría, cuyas costumbres son juzgadas como arcaicas ante lo que es considerado moderno.

En este sentido, siguiendo a Escobar (2007) quienes se encuentran en estas condiciones terminan siendo aislados de los beneficios del desarrollo, sin embargo, contribuyen con sus recursos naturales a los avances de la economía nacional e

internacional. Todo lo anterior con un vicio de consentimiento, pues no cuentan con suficiente información para tomar decisiones al respecto, y se enfrentan a un desbalance costo beneficio con respecto al juego del desarrollo.

Ahora bien, y siguiendo a Fanon (2010), Césaire (2006), Mignolo (2000) y Quijano (1999) si a la pobreza le agregamos la condición racial, en el caso particular de las personas negras, con un continuum de discriminación por parte del sistema colonial y racista que persiste, desde el crimen de la esclavización y luego la perpetuidad de la misma clase social en el poder, nos encontramos frente al empobrecimiento histórico de los cuerpos y colectivos negros. Esta exclusión es histórica y permea diversas esferas de poder, tanto a nivel económico como político, social y cultural.

2.2 Derechos humanos como marco de análisis

Las Naciones Unidas (1948) avanza hacia el establecimiento de los derechos humanos de carácter universal, como respuesta a los niveles de barbarie y la degeneración de la humanidad. El hombre – blanco, occidental - había demostrado, y continuaba demostrando³, que era capaz de, mediante el poder y la fuerza, negar la humanidad de otros seres, que consideraba inferiores, y quienes debían existir solamente para su propio beneficio, como cosas, mercancía.

Para Naciones Unidas (1948), las dos guerras mundiales, los procesos colonizadores, la esclavización, la repartición de territorios, la invasión de estos y el saqueo de sus riquezas, había dejado claro que era necesario establecer mecanismos que permitieran regular el relacionamiento entre países, y el respeto hacia los seres humanos, entendidos desde la igualdad, la libertad, y la dignidad humana como fundamento.

Es así como, en 1948, se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su preámbulo reconoce que “el desconocimiento y el

³ El proceso colonizador en los países africanos seguía vigente al momento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y continuó por más de una década.

menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad (...)” (ONU, 1948)

Y de esta manera, pensarse y construir una base que permita la sana convivencia debe partir de establecer que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (ONU, 1948)

Los derechos humanos constituyen entonces, la positivización de normas morales que siempre han existido y se han ido transformando, y necesitan un piso jurídico que permita su garantía y a su vez, la exigibilidad de cumplimiento. Esto último, se llama eficacia. Es decir, pasar de lo que se dicta en normas escritas en papel, y la real aplicación de las mismas.

“(...) la reflexión sobre la dignidad es especialmente relevante en relación con los derechos. Pone de relieve la trascendencia de la vertiente moral de los mismos. En el ámbito de los derechos, atender de manera exclusiva a su vertiente jurídica o a sus mecanismos institucionalizados de protección y garantía es importante, pero no agota todo el ámbito de los mismos.” (Ansuátegui, 2016)

En teoría, los derechos humanos corresponden entonces, a todo ser humano, sin ningún tipo de distinción.

“Los derechos humanos son aquellos que toda persona, sin importar su raza, sexo, etnia, lengua, nacionalidad o religión posee como derechos inherentes desde su nacimiento. Incluyen el derecho a la vida, a la libertad o a la no esclavitud ni a torturas.” (ACNUR, sf)

No obstante, la simple existencia de la diversidad, y el histórico ejercicio de discriminación materializado mediante los sistemas de opresión, validados por el poder económico, se ven reflejados en que al momento de reconocer, y sobre todo, garantizar el pleno ejercicio de derechos, si sea relevante la raza, el sexo, la lengua, la nacionalidad o la religión.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es optimista al visualizar un mundo en condiciones de igualdad, libertad y dignidad, pues resalta que “se ha

proclamado (...) el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. (ONU, 1948)

También llama la atención sobre el compromiso de los Estados firmantes, “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y mujeres (...)” (ONU, 1948)

Y finalmente, se enuncia la condena inminente ante hechos de discriminación, pues la igualdad es una de sus bases constituyentes, la cual debe ser garantizada en todos los escenarios de acceso a derechos, “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” (ONU, 1948)

En el marco del desarrollo de la Declaración Universal, se acordó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, que establece que “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.” (OHCHR, 1976)

Esto quiere decir que, los grupos étnicos, no necesariamente minoritarios, tienen derecho a definir sus estilos de vida, acordes con sus tradiciones, cultura, espiritualidad, entre otros aspectos que definen su forma de habitar el mundo.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, defiende que,

“Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco,

así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.” (OHCHR, 1976)

En este sentido, a partir de lo planteado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) tienen derecho a conservar, usar, renovar, los recursos que se encuentran en el territorio que habitan, pues son el territorio y su entorno los espacios que les permite desarrollar la cultura. Los procesos culturales y ancestrales dan vida al territorio, y esto se da mediante la convivencia armónica con el territorio, que es a su vez, el lugar para el ser, y vivir las dinámicas comunitarias.

Bajo este entendido, como lo plantea Escobar (2000, 2018) la constante mercantilización de los territorios colectivos por parte de los Estados y empresas, mediante la explotación de recursos naturales, bajo la premisa del desaprovechamiento del mismo por parte de los grupos étnicos que los habitan, constituye una violación a sus derechos.

Es fundamental abordar entonces, para el caso particular de estudio de la presente investigación, el derecho al desarrollo sostenible y al medio ambiente sano.

Naciones Unidas reconoce el derecho al desarrollo partiendo de que propende por el bien general, que busca que todas las personas participen y tengan acceso a las bondades del mismo,

(...) es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan, (...) (ONU, 1986)

Toma a consideración los antecedentes que posicionan la igualdad, y la universalidad de los derechos humanos, así, el derecho al desarrollo, como lo establece Naciones Unidas, debe ir encaminado a reforzar el goce efectivo de todos los derechos humanos sin exclusiones de ninguna clase.

“(...) Recordando además los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones y demás instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y

sus organismos especializados relativos al desarrollo integral del ser humano y al progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos, incluidos los instrumentos relativos a la descolonización, la prevención de discriminaciones, el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, (...)” (ONU, 1986)

Adicionalmente, trae a consideración la libre determinación de los pueblos como derecho a decidir sobre sus formas de desarrollo, y las órdenes sociales que siguen, “recordando el derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual tienen derecho a determinar libremente su condición política y realizar su desarrollo económico, social y cultural, (...)” (ONU, 1986)

En este orden, siguiendo a Naciones Unidas (1986) se hace el llamado a priorizar al ser humano como quien recibe los beneficios del desarrollo, y por ende, se deben proteger sus derechos y garantizar el libre acceso al desarrollo.

No obstante, como lo plantea Escobar (2007), el desarrollo, en tanto escenario de relaciones humanas, está transversalizado por múltiples discriminaciones, siendo el racismo una de las más notorias. Si bien el mandato de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo reza que su fin último es beneficiar a la humanidad, a través de una participación activa de los sujetos de derechos sobre lo que implica el desarrollo, y que esto debe darse de manera universal, la realidad es que hay decisiones políticas con intereses económicos, permeados de racismo estructural, que dan como resultado una distribución inequitativa costo – beneficio, respecto del desarrollo.

En este sentido, se hace necesario abordar el derecho al desarrollo relacionado con el medio ambiente, a fin de realizar una aproximación al desarrollo sostenible, que es un eje fundamental para la presente investigación.

2.2.1 Derecho al desarrollo y derecho a un medio ambiente sano

Naciones Unidas ha avanzado en el posicionamiento del derecho al desarrollo de una manera holística, que tiene en cuenta a los seres humanos como los sujetos que inciden de manera directa en la forma de materializarlo, y son, a su vez, los principales beneficiarios o víctimas de los impactos que este genera.

Para efectos de la presente tesis, se abordará el desarrollo sostenible, como el enfoque que busca la articulación entre las políticas de desarrollo y la protección del medio ambiente.

Como lo resalta la CEPAL, la perspectiva de desarrollo se centra en la relación cercana que existe entre este, el ámbito social, y el medio ambiente.

El concepto de desarrollo sostenible, sobre el cual se fundamenta la nueva agenda de desarrollo internacional, es aparentemente sencillo, pero refleja, en realidad, un complejo equilibrio entre distintas perspectivas sobre la relación entre medio ambiente y desarrollo económico y social. (CEPAL)

De acuerdo con la CEPAL, El concepto de desarrollo sostenible, surge en la década de los 80, a partir de la preocupación acerca del goce efectivo de un medio ambiente sano para las generaciones venideras, sin sacrificar el acceso de quienes actualmente habitamos el planeta tierra.

La génesis del concepto de desarrollo sostenible proviene de la Comisión Brundtland, constituida por la Asamblea General en 1983. Su informe, “Nuestro Futuro Común” (1987) presentaba el término “desarrollo sostenible” como el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias necesidades, (...) Esta condición llevó al tratamiento, a lo largo del tiempo, de “tres dimensiones” o “tres pilares” del desarrollo sostenible (el económico, el social y el ambiental). (CEPAL)

En la Comisión de Brundtland se estableció que, en el contexto del momento, y con una perspectiva a futuro, era necesario replantear el enfoque que se le venía dando al desarrollo, encaminando su entendimiento hacia el desarrollo en el sentido amplio, pensándose en el rol fundamental de un medio ambiente sano como requisito del desarrollo sostenible. Plantea entonces “El reto de arrostrar el futuro y de salvaguardar los intereses de las generaciones venideras.” (ONU, 1987, pág. 11)

En concordancia con lo planteado por la Comisión de Brundtland, el desarrollo debe ser entendido más allá de lo económico, de la acumulación de riquezas, y debe ser considerado en tanto es parte de un entorno social en el que se tejen relaciones humanas, mediadas por intereses, posiciones, sesgos, objetivos.

El medio ambiente no existe como esfera separada de las acciones humanas, las ambiciones y demás necesidades (...). La palabra “desarrollo” también ha sido reducida por algunos a una expresión muy limitada, algo así como lo que “las naciones pobres deberían hacer para convertirse en más ricas”. (ONU, 1987, pág. 12)

Brundtland pone de presente la relación intrínseca entre desarrollo y medio ambiente, no se puede avanzar hacia el desarrollo dañando el entorno y las relaciones que con él establecen los seres vivos.

(...) el “medio ambiente” es donde vivimos todos, y el “desarrollo” es lo que todos hacemos al tratar de mejorar nuestra suerte en el entorno en que vivimos. Ambas cosas son inseparables. (ONU, 1987, pág. 12)

Este informe planteó una intersección entre pobreza y problemas medioambientales, entendiendo las desigualdades sociales en tanto los impactos negativos del desarrollo en el medio ambiente. Se centra en la necesidad de un desarrollo que permita el bienestar de todos sin importar la clase, y no se cuestiona sobre lo racial.

Lo que se necesita ahora es una nueva era de crecimiento económico, un crecimiento que sea poderoso a la par que sostenible social y medioambientalmente. Las cuestiones referentes a la población – la presión demográfica y los derechos humanos de los pueblos – así como los lazos entre estas cuestiones relacionadas entre sí y la pobreza, el medio ambiente y el desarrollo, mostraron ser una de las más difíciles preocupaciones a las que tuvimos que enfrentarnos (ONU, 1987, pág. 13)

Así mismo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), Río de Janeiro, (1992) es el instrumento que formaliza el concepto de desarrollo sostenible a través de una serie de principios, comúnmente denominados Principios de Río. (CEPAL)

Cabe resaltar el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, de Naciones Unidas, que aborda la necesidad de brindar

herramientas necesarias a quienes habitan un territorio para que, con pleno conocimiento, participen de las decisiones que se toman a nivel político y económico, que afectan el medio ambiente. Así mismo, hace un llamado a la necesidad de que las personas puedan acceder a los mecanismos de protección y a la reparación de daños causados.

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. (ONU)

Por su parte, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) se pone énfasis en el tema de la pobreza en el desarrollo sostenible; en los medios de implementación, particularmente el financiamiento; y el consumo y la producción sostenible. (CEPAL)

Esta Cumbre resalta las desigualdades que presenta el desarrollo, en términos de costos y beneficios, las cuales obedecen a las inequidades preexistentes en cuanto a clase. Y en este sentido, propende por la igualdad sin importar procedencia, pertenencia racial, religiosa, entre otras. En esta línea, resalta la necesidad de reconocer la importancia y relevancia de la mujer y de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo. Poniendo de presente que “(...) los beneficios y costos de la globalización no se distribuyen de forma pareja y a los países en desarrollo les resulta especialmente difícil responder a este reto. (ONU, 2002)

Partiendo de las inequidades preexistentes, la precariedad en términos del acceso a derechos y servicios básicos, la Cumbre llama la atención acerca de garantizar los mínimos de dignidad.

Nos felicitamos de que la Cumbre de Johannesburgo haya centrado la atención en la universalidad de la dignidad humana y estamos resueltos, no sólo mediante la adopción de decisiones sobre objetivos (...) a aumentar rápidamente el acceso a los servicios básicos como el suministro de agua potable, el saneamiento, una vivienda adecuada, la energía, la atención de la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad. (ONU, 2002)

En este escenario se resaltó la importancia de la participación en los procesos de planeación e implementación de proyectos de desarrollo, en cada etapa y en todos los aspectos relevantes.

Reconocemos que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y la ejecución de actividades a todos los niveles. (ONU, 2002)

En la Cumbre se hace un llamado de atención al sector privado en tanto su responsabilidad en los efectos o impactos que causan sus actividades en el medio ambiente y la sociedad, lo cual debe ser garantizado por los estados. “Convenimos en que es necesario que las empresas del sector privado asuman plena responsabilidad de sus actos en un entorno regulatorio transparente y estable.” (ONU, 2002)

En esta línea, las Naciones Unidas ha dado continuidad a la convocatoria de diversas cumbres y ha propiciado espacios para la discusión alrededor de las más grandes preocupaciones que aquejan al mundo respecto del desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, la pobreza y las inequidades.

Cuando la Asamblea General determinó, en 2010, la realización de Rio+20, estableció dos temas para la conferencia: el marco institucional para el desarrollo

sostenible y “economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”. La idea de una “economía verde” suponía que el cambio de paradigma necesario para proteger el medio ambiente puede generar también nuevas oportunidades de crecimiento económico, un tema importante en un momento de crisis internacional. (CEPAL)

En este orden de ideas, la CEPAL refuerza la premisa de que para que exista un desarrollo sostenible, se debe avanzar hacia la igualdad en acceso a derechos, y en tanto la relación costo beneficio que generan los procesos de desarrollo, la garantía del derecho a un medio ambiente sano, y plantearse alternativas a los modelos actuales que regulan la economía.

Esta aproximación integral, en la que la igualdad y la sostenibilidad ambiental son centrales, impone cambios estructurales en el sistema económico que requieren de pactos sociales importantes. (CEPAL)

Finalmente, y a pesar de la relevancia de este, es solo hasta 2022 que las Naciones Unidas en “La Resolución de la Asamblea General (...) declaró el acceso a un “medio ambiente limpio, saludable y sostenible” como un derecho humano universal.” (ONU, 2022)

La ONU, mediante esta declaración, reitera que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano, de acceder al agua potable, y vivir el entorno sin sufrir las consecuencias del cambio climático.

“esta resolución transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, ni el aire limpio ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable. Al menos no sin luchar por ello.” (ONU, 2022)

2.3 Mecanismos de amparo a derechos a partir del Sistema Internacional de los Derechos Humanos de los pueblos étnico-raciales

Debido a los procesos de incidencia de los grupos étnico raciales, y de organizaciones defensoras de sus derechos, el Sistema Internacional de los Derechos Humanos ha generado mecanismos para la prevención de los actos de

racismo y la protección de los Derechos Fundamentales individuales y colectivos del pueblo afrodescendiente. Herramientas como, el Convenio OIT 169⁴, (Rodríguez-Piñero, 2005), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas⁵, entre otros.

2.3.1 Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial – CERD

La Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial que entra en vigor en enero de 1969, se basa en la igualdad de derechos establecida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos (...) que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional. (ONU, 1965)

Esta Convención parte de la premisa de que el colonialismo y todas las formas de discriminación que hacen parte de la forma del tipo de relacionamiento establecido por este sistema, constituyen hechos y estructuras reprochables, que no pueden existir en ninguna parte del mundo.

Considerando que las Naciones Unidas han condenado el colonialismo y todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su forma y dondequiera que existan. (ONU, 1965)

Retomando la posición de la Declaración que precede esta Convención, la ONU insta a la abolición de la discriminación racial, en aras de defender y proteger la dignidad humana, con base en la universalidad de los derechos, y el acceso a estos por parte de personas o grupos sociales históricamente discriminados.

⁴ Organización Internacional de Trabajo. Convenio 169 de 1989. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

⁵ En adelante CERD.

Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963 [resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea General] afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana, (ONU, 1965)

Así también, la Convención ofrece una definición de discriminación racial, donde resalta que, a partir de unas diferencias creadas socialmente, se niega el acceso a derechos a un sector de la población, debido a rasgos fenotípicos y características culturales, principalmente.

En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. (ONU, 1965)

En esta línea, la Convención reitera que la ciencia ha comprobado que no existe justificación alguna para jerarquizar los seres humanos a partir de las diferencias, que la discriminación y exclusión de un sector de la población va en contra de la dignidad humana.

Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial, (ONU, 1965)

Bajo las premisas anteriormente señaladas, la Convención compromete a los Estados firmantes a no ejercer la discriminación racial y a evitar que agentes públicos o privados incurran en actos discriminatorios. Como garante de los derechos humanos, los Estados deben reconocer y respetar los derechos de todos sus habitantes, y brindar las herramientas necesarias para su protección y defensa y, en caso de que se cause algún daño, el acceso a todos los mecanismos de reparación y resarcimiento.

Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación. (ONU, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965)

2.3.2 Convenio OIT 169 – Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes⁶

La Organización Internacional del Trabajo – OIT presenta un conjunto de medidas basadas en las evidencias acumuladas sobre las desigualdades que se presentan en los países latinoamericanos entre los pueblos indígenas y afrodescendientes y los demás miembros de la población (Rodríguez-Piñero, 2005; Seider, 2015). Se fija entonces en las diferencias notables en cuanto acceso a recursos, que ponen en desventaja a los pueblos étnico-raciales.

La Conferencia observó que en muchas partes del mundo estos pueblos no gozaban de los derechos en igual grado que el resto de la población en los Estados donde viven y que han sufrido a menudo una erosión en sus valores, costumbres y perspectivas. Los pueblos indígenas y tribales en América Latina presentan, hoy en día, los peores indicadores socioeconómicos y laborales, y la discriminación por origen étnico o racial agrava las brechas de ingreso de manera radical. (OIT, 1989)

Es de resaltar el papel relevante que juega el Convenio de la OIT en términos de la defensa de los derechos de los pueblos⁷, tendiente a lograr niveles de equidad y

⁶ El Convenio define los pueblos tribales como pueblos cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.

⁷ Entiéndase como pueblos afrodescendientes e indígenas de un país. El Convenio aclara, que en este contexto, la palabra pueblo no se refiere al entendido en el ámbito internacional.

justicia que permitirán lograr procesos de desarrollo que representen beneficios para la humanidad.

El Convenio OIT 169 parte de la base de la no discriminación, en este sentido, propende por el acceso efectivo a derechos por parte de los pueblos, en pie de igualdad con el resto de la población, así como va dirigido a hombres y mujeres dentro de los pueblos. (OIT, 1989)

Es fundamental tener presente las premisas que dan base al desarrollo del Convenio, las cuales son, el reconocimiento y respeto a la particularidad de las formas de vida de los pueblos, en pleno derecho, así como la obligación del Estado y demás entes de realizar procesos de consulta cuando van a llevar a cabo acciones que generen repercusiones en sus vidas y sus territorios. (OIT, 1989)

El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio. (OIT, 1989)

El Convenio OIT 169 establece que los Estados deben generar las condiciones necesarias para llevar a cabo procesos de consulta con los pueblos siempre que se planee tomar decisiones que signifiquen repercusiones directas.

Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (OIT, 1989)

Así mismo, el Convenio OIT 169 determina que las consultas deben partir de un principio relevante, que propende por el logro de procesos transparentes, que conlleven a acuerdos beneficiosos para los pueblos.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. (OIT, 1989)

El Convenio OIT 169 se basa en el entendido de que los pueblos tienen sus propias costumbres y formas de relacionarse con el entorno, y sus mecanismos de subsistencia, su espiritualidad, y su forma de ser como colectivo, están íntimamente relacionadas con el territorio que habitan, tienen derecho a pensarse e implementar sus ideas de desarrollo.

El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. (OIT, 1989)

El Convenio establece que los Estados firmantes deben generar los instrumentos legales necesarios para dar cumplimiento a lo acordado en el marco de la OIT 169, con los mecanismos necesarios para su implementación. Los Estados también deben rendir informe a la OIT sobre los avances respecto de los compromisos que adquirieron en este contexto.

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. (OIT, 1989)

El Convenio OIT 169 reconoce que los pueblos han construido relaciones con el territorio, que definen sus formas de vida, en todas las esferas, por tanto

Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. (OIT, 1989)

Igualmente, el Convenio OIT 169 establece que el derecho a la propiedad colectiva de los territorios ancestralmente habitados por los pueblos. En este sentido, tiene la obligación de proteger sus derechos y garantizar su participación en la toma de decisiones sobre los recursos que se encuentran en estos territorios.

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. (...) Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. (OIT, 1989)

El Convenio OIT 169 aclara que, si bien los recursos que yacen en suelo nacional pertenecen al Estado, si estos se encuentran ubicados en territorios colectivos, los gobiernos deben consultar con los pueblos con miras a presentarles los posibles perjuicios que las actividades causarían en su territorio y entorno en general, así como establecer medidas y proyectos que garanticen el acceso a los beneficios que generen estas acciones, y prever mecanismos de reparación ante los potenciales daños. (OIT, 1989; Rodríguez-Piñero, 2005; Sieder, 2015).

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que

reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. (OIT, 1989)

Teniendo en cuenta la existencia de formas fraudulentas de apropiación de tierras por parte de entes externos a los pueblos, el Convenio OIT 169 insta a los Estados a vigilar que no sucedan escenarios desventajosos donde mediante engaños o negociaciones ilegales los sujetos colectivos pierdan sus derechos territoriales.

Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. (OIT, 1989)

Ahora bien, si suceden este tipo de casos, el Estado debe aplicar los instrumentos otorgados por la ley para ejercer las sanciones pertinentes con el objetivo de restituir los derechos de los pueblos.

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, (...) (OIT, 1989)

En este entendido, el Convenio OIT 169 sienta las bases sobre los derechos étnico-territoriales, de los pueblos étnicos, y establece la consulta previa como el mecanismo idóneo para garantizar la participación efectiva de los pueblos directamente afectados por el desarrollo de un proyecto determinado en sus territorios, mitigar los posibles daños que se causarían y definir medidas de reparación ante tal eventualidad (OIT, 1989; Rodríguez-Piñero, 2005; Sieder, 2015).

2.4 Derechos Humanos y Empresa

Naciones Unidas (OHCHR, 2011) reconoce que las empresas son actores clave en los contextos sociales a nivel nacional e internacional, y a su vez tienen alto grado de injerencia en el desarrollo de los derechos humanos. En este entendido, las Naciones Unidas dispusieron principios que tienen como objetivo proteger y garantizar el goce de los derechos humanos instando a las empresas a respetarlos,

tomando medidas de prevención, precaución, y en última instancia, reparación ante los posibles daños que la actividad económica pueda generar en la población.

No obstante, (OHCHR, 2011) resalta que es consciente de la poca reglamentación interna sobre esta temática e incluso la falta de voluntad política de algunos países ha permitido la evasión de responsabilidad por parte de las empresas respecto de los efectos que su actuación genera en las comunidades ubicadas en las zonas donde sus proyectos tienen influencia.

En 2011, Naciones Unidas construyó los lineamientos sobre cómo debe ser la relación entre las empresas y las personas y comunidades, esto con el fin de proteger y respetar los derechos humanos. Estos son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" (OHCHR, 2011)

Estos Principios Rectores deben entenderse como un todo coherente y ser interpretados, individual y colectivamente, en términos de su objetivo de mejorar las normas y prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible. (OHCHR, 2011, pág. 1)

En estos se establece que es deber de los Estados garantizar el acceso a los mecanismos jurídicos que permitan un trato justo a las comunidades, a los territorios, al medio ambiente, y así mismo, que las empresas cuenten con la seguridad jurídica suficiente para su accionar, teniendo como pilar el respeto de los derechos humanos.

Los Estados también tienen el deber de proteger y promover el estado de derecho, en particular adoptando medidas para garantizar la igualdad ante la ley y su justa aplicación, y estableciendo mecanismos adecuados de rendición de cuentas, seguridad jurídica y transparencia procesal y legal. (OHCHR, 2011, pág. 8)

Los Principios Rectores se plantean desde los enfoques diferenciales, teniendo en cuenta las circunstancias y características diversas de las personas, así como sus necesidades dependiendo de su contexto.

Estos Principios Rectores deben aplicarse de manera no discriminatoria, prestando atención especial a los derechos, necesidades y problemas de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación, y teniendo debidamente en cuenta los diversos riesgos que pueden enfrentar mujeres y hombres. (OHCHR, 2011, pág. 1)

Es importante resaltar que los Principios Rectores tienen como mandato la no discriminación, haciendo énfasis en las poblaciones históricamente excluidas por la estructura económica, política y social, con el fin de reforzar las medidas de prevención, teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad manifiesta y la posibilidad de generar graves afectaciones. Entiéndase estas poblaciones como los pueblos étnicos racialmente diferenciados, los campesinos, personas en condición de discapacidad, entre otros.

Los Principios Rectores recalcan las obligaciones del Estado como garante de los derechos humanos de quienes habitan sus territorios.

Las obligaciones internacionales de derechos humanos exigen que los Estados respeten, protejan y realicen los derechos humanos de las personas que se encuentran en su territorio y/o su jurisdicción. Eso incluye el deber de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas. (OHCHR, 2011, pág. 3)

Ante su deber de proteger los derechos humanos y evitar que se cause daño a estos, los Estados violentan los derechos humanos, bien sea por acción o por omisión. (OHCHR, 2011)

(...) los Estados pueden estar incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos cuando se les puedan atribuir esas violaciones o cuando no adopten las medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por agentes privados. (OHCHR, 1976, pág. 3)

En los Principios Rectores se plantea que el Estado debe garantizar los derechos de la población, a través de procesos de acompañamiento y veeduría de la acción de las empresas en los territorios, propendiendo por un trato justo y equitativo, en

este sentido, debe brindar herramientas para que las empresas apliquen los enfoques diferenciales y atiendan las necesidades diversas.

El asesoramiento a las empresas sobre la observancia de los derechos humanos debe señalar los resultados esperados y facilitar el intercambio de mejores prácticas. Debe aconsejar los métodos adecuados, incluida la debida diligencia en materia de derechos humanos, y explicar cómo tratar eficazmente las cuestiones de género, vulnerabilidad y/o marginación, reconociendo los problemas específicos de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias. (OHCHR, 2011, pág. 6)

Por otro lado, los Principios Rectores determinan que las empresas deben evitar causar daños a las comunidades que habitan los territorios en los que tienen radio de acción, y en este sentido, si llegara a generar alguna afectación, debe repararla.

El principio 11 reza que, las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación. (OHCHR, 2011, pág. 15)

Así mismo, los Principios Rectores dictan que las empresas tienen el deber de conocer y aplicar los instrumentos internacionales y nacionales que protegen los derechos humanos, y con especial énfasis, los desarrollos de la ONU encaminados a implementar los enfoques diferenciales sobre los sujetos de especial protección.

(...) las empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicas y deberán prestarles una atención especial cuando vulneren los derechos humanos de esas personas. Los instrumentos de las Naciones Unidas han detallado a tal efecto los derechos de los pueblos indígenas, mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias. Por otra parte, en situaciones de conflicto armado, las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario. (OHCHR, 2011, págs. 16, 17)

De acuerdo con los Principios Rectores, las empresas deberían solicitar estudios legales y legítimos para evaluar la viabilidad de sus proyectos en términos de los alcances y consecuencias que estos generarían ante el goce efectivo de derechos humanos, y de manera fundamental, debe estar mediado por un proceso democrático, es decir, se debe garantizar la participación de las comunidades que recibirán las afectaciones. En los casos de grupos étnicos, se debe surtir la consulta previa como derecho fundamental.

A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos las empresas deben identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. Este proceso debe: (...) Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas (...) (OHCHR, 2011, págs. 22, 23)

A partir de los Principios Rectores las empresas tienen el deber de, una vez realizado los estudios necesarios para evaluar el impacto medio ambiental, si se incurre en acciones que generen daños a las comunidades o a su entorno, reparar o hacer parte del proceso de reparación.

Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. (OHCHR, 2011, pág. 28)

Es entonces, de acuerdo con los Principios Rectores, obligación del Estado garantizar el acceso a medidas de reparación por parte de las personas o grupos afectados por alguna actividad empresarial. Si bien se entiende obligatoria la reparación, es necesario que existan los instrumentos que se requieran para que pueda ser efectiva.

Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces. (OHCHR, 2011, pág. 33)

Finalmente, los Principios Rectores, además de garantizar la existencia de mecanismos de reparación, el Estado debe generar los elementos propicios para que las personas tengan acceso a ellos.

Para garantizar el acceso a la reparación por violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tratar de que el público conozca y comprenda estos mecanismos, cómo puede accederse a los mismos, y ofrecer el apoyo necesario (financiero o experto) para ello. (OHCHR, 2011, pág. 34)

2.5 Vulnerabilidades traducidas en políticas de desarrollo con impactos en un grupo racial en específico.

Este aparte presenta tres casos que permiten ilustrar elementos del racismo ambiental en escenarios diferentes. El primer caso sucede en Alabama - Estados Unidos, el segundo tiene lugar en Esmeraldas – Ecuador, y el tercero se da en Cartagena – Colombia.

En los tres casos existen coincidencias, independientemente de que los antecedentes y contextos difieran. Los puntos en el que confluyen, que se tendrán en cuenta para este análisis, son, como lo plantea su pertenencia étnico racial, las preexistentes condiciones de vulneración a sus derechos, el racismo estructural que han padecido históricamente, y haber sido escogidas para llevar a cabo proyectos con alto impacto medioambiental, asumiendo los costos de estos sin obtener beneficios. Estos argumentos siguen los planteamientos de la Corte Constitucional, en la Sentencia T-969/14 (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

2.5.1 Caso 1. Titusville, Alabama y BFI

Los hechos manifiestan la ubicación de una operación destinada al reciclaje de basura en un barrio habitado en su mayoría por personas negras, en una ciudad de Alabama – Estados Unidos. (WESTRA, 2001)

Sobre la empresa objeto del presente estudio, en su hoja de presentación se resaltan varias características que se deben tener en cuenta para analizar el caso.

Es una de las compañías fundadoras de la industria de gestión de desechos sólidos, sus clientes están ubicados en 48 estados y en Canadá, sus clientes incluyen 940 cuentas comerciales e industriales y 7 millones de hogares. (Waste360, 1998, traducción propia)

Relata Westra (2001), que los hechos datan de principios de la década de los 90, en este apartado, Westra hace un recuento de la historia, desde que se pensó el proyecto.

En 1990 Browning-Ferris Industries (BFI)⁸ dio inicio a la planeación de la locación de un lugar para la “Transferencia de basura y reciclaje” en Titusville, un barrio predominantemente negro en Birmingham, Alabama. (WESTRA, 2001, pág. 113, traducción propia)

Así mismo, Westra (2001) expone las razones que mediante las cuales BFI justifica su acción, pues tal como se manifiesta, buscaba generar beneficios mediados por avances técnicos para el tratamiento de desperdicios sólidos.

El objetivo era adquirir un espacio donde la basura y el desperdicio acumulados pudieran ser reducidos mecánicamente, y los reciclables podrían ser separados para la venta en otros mercados, (...) (WESTRA, Faces of environmental racism. Confornting issues of global justice. Second Edition. ISBN: 0-7425-1248-7, 2001, pág. 113)

Al presentar el proyecto de manera plana, sin aplicar ningún enfoque diferencial que permita observar con más detenimiento y cuestionar las razones por las cuales se ubica la operación particularmente en Titusville, sostiene Westra (2001), se invisibiliza que la tendencia de la empresa es realizar sus actividades generadoras de efectos negativos ambientales ubicadas en barrios predominantemente poblados por gente negra.

A simple vista este plan no parece ser problemático, aunque, de este breve resumen, surge una pregunta. El problema principal es la ubicación escogida: un lugar en una comunidad predominantemente negra. Luego, un patrón parecía hacerse presente

⁸ En adelante BFI.

ya que 26 de las 28 operaciones de BFI Alabama estaban localizados en barrios de gente negra. (WESTRA, 2001, pág. 13, traducción propia)

Westra (2001) resalta aquí que, prexisten condiciones de vulnerabilidad en la comunidad de Titusville, ya que ha sido utilizada como zona industrial tradicionalmente, y una operación adicional generaría más daños ambientales. En tanto zonas abandonadas por el Estado, y áreas cuyos habitantes sufren de enfermedades y daños causados debido a la contaminación, en su mayoría están habitadas por gente negra.

(...) proponer ubicar la instalación de BFI agregaría otra amenaza potencial en un área que contiene ya mucha industria pesada cerca de lugares habitados por humanos. Entonces el fenómeno de las “zonas industriales abandonadas” se perpetuaría en una comunidad que ya sufre de impactos medioambientales desproporcionados. Las zonas industriales abandonadas son áreas geográficas habitadas en gran medida, por personas negras cuando las actividades contaminantes integradas a la cultura industrial están concentradas en el detrimento de la salud humana y los reales valores del Estado. (WESTRA, 2001, pág. 114, traducción propia)

Westra (2001) llama la atención sobre cómo se llevaron a cabo los pasos necesarios para llegar a ubicar las instalaciones de BFI en Titusville. Y resalta aspectos clave para entender el caso, cuestionando los niveles de participación, el grado de acceso a la información, el contexto permisivo para generar acciones con daño, y las cargas desproporcionadas por motivos raciales.

En suma, los objetivos de BFI eran cuestionables en diversos aspectos. Debemos tener presentes varios puntos: (1) problemas relacionados con la libertad de consentimiento; (2) confidencialidad, acceso a información y debido proceso; (3) la posibilidad de que se dieran prácticas impropias e ilegales; y (4) racismo ambiental, el cual es el principal foco de este estudio. (WESTRA, 2001, pág. 114, traducción propia)

Es necesario entonces comprender, a partir de lo explicado por Westra (2001), los tiempos en los que transcurrieron los hechos, tanto la decisión de la empresa, como los trámites legales que debió surtir para obtener permisos, y los mecanismos de

participación comunitaria establecidos para garantizar la democracia en este escenario.

En términos de permisos y estudios previos, la empresa obtuvo la viabilidad por parte de una entidad estatal en el transcurso de una semana, y acto seguido, llevó a cabo un estudio ambiental mediante contratación de agentes privados, en lugar de ser realizado por la entidad pública encargada, como lo expone Westra (2001)⁹.

(...) el 16 de enero de 1991, BFI solicitó una opinión por parte de Thomas Magee, jefe de planeación en el Departamento de Planeación Urbanística del Departamento de Birmingham. (...) el 23 de enero Magge confirmó la feacibilidad del proyecto de acuerdo con la zonificación de M-2, y en marzo, BFI contrató los ingenieros de BCM para llevar a cabo una evaluación ambiental de la propiedad. (WESTRA, 2001, pág. 115, traducción propia)

En línea con los tiempos planteados por Westra (2001), para implementar los planes de BFI era necesaria la compra de un lugar que había sido utilizado por una empresa de alimentos. Luego de los permisos otorgados y el estudio ambiental, en el mes de abril, se procedió a realizar la compra de “Golden Flake Snack Foods, Inc.” (WESTRA, 2001, pág. 115, traducción propia)

Hasta este punto, siguiendo a Westra (2001) no ha existido la participación de la comunidad que resultaría directamente afectada por la operación de BFI. El proceso de la venta continuó, y para los trámites posteriores, sólo existió la participación de la empresa compradora y la empresa que vendía, así lo asevera esta autora

En julio, BFI presentó una aplicación de subdivisión (la cual requiere solamente una notificación por parte de los vecinos adyacentes, estos son, Golden Flake, con la intención de subdividir), y una audiencia pública bajo el Caso No. S-73-91 fue establecida. Solo ellos fueron las partes afectadas, como si los demás habitantes del área no tuviesen interés legítimo en el tema. Pero (...) ni el nombre de BFI ni su intención apareció en el documento. (WESTRA, 2001, pág. 115, traducción propia)

⁹ Como lo plantea (Westra, 120) la entidad pública encargada de realizar este tipo de estudios es la EPA – Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Argumenta Westra (2001) que la información de esta operación no era conocida públicamente, se realizó en total confidencialidad entre el agente del Estado encargado de otorgar los permisos y las empresas involucradas en la operación financiera.

Por esta razón, cuando Thomas Magee, el 11 de marzo de 1992, firmó la aprobación de la aplicación en nombre del Estado de Alabama, Condado de Jefferson, y su oficina, sólo estos oficiales parecían tener conocimiento sobre la identidad de los involucrados en la transacción en cuestión. (WESTRA, 2001, pág. 115, traducción propia)

En este orden, Westra (2001) retoma una solicitud de permisos que se realizó iniciando el año 1991, y obtuvo respuestas positivas desde el inicio, finalmente le tomó un poco más de un año en obtener todos los permisos necesarios para su operación, tiempo en el cual no hubo participación de la comunidad afectada.

La segunda audiencia pública tuvo lugar en noviembre de 1992, y para ese momento todas las aprobaciones de permisos ya estaban en vigor, (...) (WESTRA, 2001, pág. 115)

En este caso, como lo muestra Westra (2001) la empresa podría probar el cumplimiento de los requisitos necesarios para avanzar en su proyecto.

Esta cronología muestra que BFI efectivamente había cumplido con la interpretación oficial de la letra de la ley en ese momento, aunque luego esa interpretación fue desacreditada por los tribunales. (WESTRA, *Faces of environmental racism. Confronting issues of global justice*. Second Edition. ISBN: 0-7425-1248-7, 2001, pág. 115)

Sin embargo, la autora pone de presente que los ciudadanos contaban con información parcializada y errónea, pues no estaban al tanto de lo que realmente estaba sucediendo en su territorio. En esta medida, manifestaron su descontento.

Una vez los ciudadanos de Titusville se enteraron de la real naturaleza de la transacción que se estaba llevando a cabo y de los planes que habían pensado solamente se referían a la expansión de la operación de alimentos, la asociación de ciudadanos contrató a un abogado, W.L. Williams. Los ciudadanos acudieron en

masa a los despachos del Consejo para asistir a todas las reuniones, para protestar. (WESTRA, 2001, pág. 116, traducción propia)

La sustentación de Westra (2001), argumenta que los integrantes de la comunidad no participaron en el proceso de toma de decisiones sobre su territorio, no se realizó la consulta necesaria, teniendo en cuenta que lo que ahí se planeaba generaría afectaciones a las personas que habitaban el barrio.

Las preocupaciones de los ciudadanos de Titusville sobre su agua potable y sus derechos a la información y libre consentimiento estaban bien fundadas, y no simplemente “miedos” infundados, para ser pacificados mediante campañas de relaciones públicas. (WESTRA, 2001, pág. 118, traducción propia)

En este sentido, Westra (2001) sostiene que las reclamaciones de la van dirigidas a poner en evidencia que existió racismo ambiental en la toma de decisión de la empresa al ubicar la instalación de manejo de basuras en el barrio de Titusville, invisibilizando la existencia y necesidades de la comunidad que lo habita, a pesar de las afectaciones que causaría.

Además, la coalición que cabildeaba contra BFI protestó por motivos de (1) racismo ambiental y astucia por parte de BFI, o lo que he denominado la falta de un debido proceso democrático y de consentimiento libre e informado para todas las partes interesadas. (...) No se les garantizó su derecho moral a ser consultados y respetados en lo que respecta a decisiones que tendrán grave impacto en sus vidas, una posición que va en contra de la ley, la constitución de Estados Unidos (...) y la moralidad. (WESTRA, 119)

En esta línea, Westra (2001) resume aspectos clave a tener en cuenta cuando se trata de racismo ambiental, pues, “Casi siempre, la falta de interés, la negligencia y el interés propio son las principales causas del racismo ambiental.” (WESTRA, 2001, pág. 121, traducción propia)

Por otra parte, Westra (2001) plantea que, a pesar de que varios aspectos aquí estudiados pueden ser comunes a diversos sectores sociales empobrecidos, la raza si es un determinante, y que la intersección raza, clase prueba en este caso que es racismo ambiental

(...) surgen cuestionamientos acerca de que las imposiciones de cargas injustas, la zonificación inapropiada, la irresponsabilidad corporativa, y la falta de consulta con las partes interesadas puede ser impuesta desafortunadamente en todas las personas pobres y sin poder, sin importar su color o grupo étnico. Sin embargo, (...) mostraré de manera específica que el caso de Titusville es un caso evidente de “racismo ambiental.” (WESTRA, 2001, pág. 119, traducción propia)

Como se teoriza en el capítulo 1, por autores como (Keucheyan (2016), Bullard (2001), Mills (2001) en el aparte sobre racismo ambiental, existe una carga impuesta sobre factores raciales preexistentes, que se reflejan en la discriminación y exclusión en la que se encuentran los pueblos negros y afrodescendientes. Estas condiciones previas facilitan la realización de proyectos en sus territorios, ya que son consideradas de menos valor, con una ausencia del Estado manifestada en la falta de acceso a servicios básicos, y por ende, cuentan con menos herramientas de cabildeo para la exigibilidad de derechos. En esta línea argumentativa, plantea Westra,

La práctica de continuar localizando este tipo de operaciones en áreas que ya han sido usadas por empresas “dudosas”, lo cual equivale al apoyo continuo de zonas industriales en algunas áreas donde las minorías y las comunidades empobrecidas también fueron localizadas, tiene claras connotaciones racistas. Si un área ya es considerada ser un barrio menos valioso, y si tiene presencia de empresas que no serán toleradas en un barrio rico, entonces el camino ha sido preparado para la perpetuación de las zonas industriales, donde se realizarán menos preguntas por la ubicación de nuevas instalaciones. (WESTRA, 2001, pág. 119, traducción propia)

Para Westra (2001), la tendencia a ubicar este tipo de industria en lugares habitados por gente negra, permite defender que, además de otros aspectos, como la clase, la raza es pieza clave en la intersección de factores discriminatorios.

A este punto, se podría decir que las circunstancias y amenazas descritas aquí no obedecen necesariamente a una raza o grupo. Esto, claramente, es correcto, hasta un punto; pero lo que se deja por fuera es la locación original escogida para instalar varias operaciones industriales, las cuales anteceden la adición propuesta por BFI. Esto a su vez muestra e implica la deliberada perpetuación de zonas industriales en

áreas habitadas por personas racializadas. (WESTRA, 2001, pág. 120, traducción propia)

En este sentido, y a manera de conclusión de este caso, siguiendo la posición de Westra (2001), se evidencia la existencia de un desbalance costo beneficio causado por la implementación de proyectos que generan daño medioambiental en los lugares habitados por gente negra. En concordancia, Westra (2001) resalta dicha asimetría, así:

Lo que está en juego aquí es la existencia clara de una carga desproporcionada impuesta a las comunidades y vecindarios habitados por personas racializadas en comparación con otros y una distribución injusta de los beneficios. (WESTRA, 2001, pág. 121, traducción propia)

2.5.2 Caso 2. Esmeralda – Ecuador

Moreno (2019), a partir de diversos elementos, presenta una premisa que confirma la existencia de racismo ambiental en el caso de estudio, y pone sobre la mesa el rol del Estado y la estructura de acumulación de capital que opera bajo una lógica discriminatoria.

En este trabajo, enmarco la noción de racismo ambiental en sus dimensiones institucionales y estructurales, relacionadas con el racismo en las instituciones del Estado y en el sistema de acumulación capitalista que dependen de la devaluación de las personas no blancas. Este marco analítico guía las discusiones que presento. (Moreno, 2019)

Durante su investigación, Moreno (2019) muestra la confluencia de factores que afectan a la comunidad Afrodescendiente de Wimbí, los cuales configuran racismo ambiental, en tanto se desconocen los derechos de la comunidad, y se obvian las afectaciones que causan las actividades económicas que ahí se desarrollan. Este es un caso de desalojo para dar lugar a intereses enfocados en el capital, a pesar de las afectaciones causadas al territorio y a las personas que lo habitan, quienes ostentan el derecho colectivo sobre este.

En la comunidad de Wimbí, cantón San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas, Ecuador, se producen formas de racismo que se expresan no solo en

el despojo o la acumulación por desposesión de territorio ancestral (que incluye desalojo y formas de violencia como amedrentamiento de la población local), sino también en formas de sufrimiento ambiental que tienen efectos en la salud y los medios de subsistencia, y que más bien se deberían entender como una forma de eliminación étnica en *territorio*, que produce la muerte lenta de poblaciones afroecuatorianas mediante acciones e inacciones que comprometen su vida y salud. La lucha antirracista consiste en permanecer en territorio y en apelar al derecho de posesión ancestral como pueblo afroecuatoriano y a los derechos de la naturaleza de la Constitución de 2008. (Moreno, 2019)

Moreno (2019) inicia planteando que las acciones de la empresa de palmicultura llamada Energy & Palma incurren en racismo ambiental, pues afectan de manera exacerbada a la población afrodescendiente de la comunidad de Wimbí.

Empezando con el conflicto entre una comunidad afroecuatoriana de Esmeraldas y una empresa palmicultora, este trabajo explora formas de racismo ambiental que afectan a las poblaciones y territorios del norte de la provincia de Esmeraldas, Ecuador. Específicamente se analiza el caso de la comunidad de Wimbí, parroquia perteneciente al cantón San Lorenzo, en relación con el conflicto con la empresa palmicultora Energy & Palma. (Moreno, 2019)

Destaca Moreno (2019) la presencia e influencia de diversas industrias en los territorios habitados por población Afrodescendiente en Ecuador, y de manera particular, para el presente estudio, en Esmeraldas.

Sin ninguna duda, los pueblos afro ecuatorianos de Esmeraldas se enfrentan con un proceso de cercamiento y su territorio está disminuyendo efectivamente en extensión ante el avance de proyectos de la agroindustria de palma, minería aurífera e industria maderera. Pero al mismo tiempo, existen efectos que afrontan las poblaciones que resisten en territorio y que, al hacerlo, experimentan sufrimiento ambiental, lo que afecta su bienestar. (Moreno, 2019)

La autora manifiesta que, las situaciones que enfrentan los pueblos con pertenencia étnico - racial responden a un abandono estatal y a una forma negligente de tratar y entender las problemáticas que ahí ocurren. En este sentido, Moreno (2019) plantea,

La conjunción del despojo territorial, la contaminación ambiental, la violencia y las acciones y omisiones del Estado apuntan a procesos de muerte lenta y a un Estado que “deja morir” a las poblaciones afrodescendientes e indígenas. (Moreno, 2019)

En esta línea, para la autora, los daños medioambientales, el despojo de tierras, y la poca respuesta estatal, obedecen a la estructura racista que dialoga de manera íntima con el modelo capitalista, concentrado en la acumulación de riqueza, a expensas de las afectaciones causadas a grupos humanos históricamente discriminados. Así, Moreno (2019) sostiene la siguiente tesis:

Los procesos que afectan a comunidades del norte de la provincia de Esmeraldas ejemplifican los mecanismos en que el racismo ambiental funciona en íntima relación con la acumulación capitalista. En lugar de restringir la comprensión del racismo al nivel de las relaciones interpersonales, desplazo el énfasis hacia las dimensiones estructurales del mismo. (MORENO, 2019)

El racismo ambiental es entonces, según (Moreno, 2019), con base en lo planteado por (Chavis, 1994), la forma de racismo que se refleja en la toma de decisión de políticas públicas que, una vez consideradas todas las opciones, se escoge, de manera legal, llevar a cabo actividades con alto impacto medioambiental en los territorios habitados por comunidades con pertenencia étnico racial, quienes se encuentran en situación de exclusión histórica, no solo del sistema económico y social, sino del medio de las teorías ambientalistas. En otras palabras, para Chavis (1994), el racismo ambiental consiste en permear la toma de decisiones políticas y legales de carácter medioambiental con preceptos discriminatorios, que han sido justificados a través del tiempo, sin dar relevancia a las voces de estos pueblos en los movimientos ambientalistas tradicionales.

El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a los derechos humanos, con carácter universal, y aplicando los preceptos de la igualdad y no discriminación. En este entendido, su rol es fundamental en lo relacionado con el racismo ambiental, pues incurre en esta práctica, bien sea por acción o por omisión. Moreno (2019) lo plantea así:

Esta definición apunta al papel del Estado y sus instituciones que son partícipes ya sea de manera activa o por negligencia- en los procesos de racismo ambiental. (Moreno, 2019)

A este punto, Moreno (2019) explica las principales características de Wimbí, donde se hace énfasis en que se trata de un territorio colectivo, por tanto, los derechos de la comunidad Afrodescendiente sobre las hectáreas que poseen no se ejercen de manera individual.

Wimbí es una parroquia rural (el nombre oficial es Parroquia 5 de Junio) en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. La parroquia tiene 416 habitantes pertenecientes al pueblo afro ecuatoriano. Parte de su territorio se encuentra en la Comuna Río Santiago Cayapas y es, por lo tanto, territorio comunal inalienable; otra parte se encuentra fuera de la Comuna, en territorios de posesión ancestral sin titulación en donde se encuentran los terrenos en disputa con la compañía palmicultora. (Moreno, 2019)

Como lo denuncia Moreno (2019), no solo la empresa palmicultura, sino todas las industrias que operan actualmente en estas tierras, han utilizado diversos mecanismos ilegales para realizar compras a individuos sobre territorios colectivos.

A raíz de la presión de intereses de actores externos vinculados con la extracción de madera, producción de palma y minería aurífera, las comunidades del norte de Esmeraldas han vendido o entregado miles de hectáreas. Los mecanismos han incluido ventas fraudulentas, amenazas y cooptación de líderes locales. Algunos miembros de la comunidad de Wimbí y sus aliados se refieren a cierta lógica en el ingreso de los actores externos. (Moreno, 2019)

Por su parte, Kimberley Brown, en su artículo publicado en 2018, refuerza la afirmación anterior, manifestando que las empresas compraban tierras a una persona de la comunidad, ofreciendo poco dinero, mediante el uso de una persona foránea.

Comprar a través de un intermediario fue una práctica común entre el año 2000 y el 2002 según Quintero. Se basa en que una persona de fuera convenza a un miembro de la comunidad para que venda sus tierras por un precio muy bajo, como \$15-20

por hectárea. Después, esa persona se las vende a una empresa de palma aceitera por una gran suma. (Brown, 2018)

En esta línea, Moreno (2019) presenta la reseña del conflicto, cuándo inicia, los actores clave, y la disputa por el territorio que se ha generado a partir de este. Tras una venta fraudulenta, sin considerar a la comunidad Afrodescendiente que habita el territorio, negándole la participación mediante consulta previa ante la toma de dicha decisión que les afectaría directamente, la comunidad de Wimbí ha emprendido diversas acciones tendientes a defender sus derechos.

El conflicto se remonta a una adjudicación irregular de tierras de posesión ancestral (reconocidas como tales desde la Constitución de 1998) a un comunero de Wimbí, quien vendió las mismas a un inversionista de Quito. Posteriormente las tierras pasaron rápidamente a manos de la empresa Energy & Palma, que actualmente tiene el título de propiedad de las 1200 hectáreas en disputa. Los conflictos se iniciaron a poco tiempo de la adjudicación y venta ilegal de las tierras, pues los wimbiseños que habían utilizado tradicionalmente estos territorios siguieron haciéndolo. Ya en 2015, el inversionista quiteño realizó una denuncia para que se procediera al desalojo de las tierras, pero Wimbí recurrió a una acción de protección que lo impidió. (Moreno, 2019)

Moreno (2019) refiere que los derechos a la posesión del territorio ocupado por ellos han sido violentados, y sus procesos de resistencia han causado que se les considere intrusos, y el Estado ha asumido posiciones tendientes a validar este proceso y a defender a la empresa.

Los líderes de Wimbí presentaron medidas cautelares y de protección que fueron denegadas por las autoridades de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo. Los líderes han sido judicializados y criminalizados como ladrones e invasores de su propio territorio y reclaman su derecho ancestral al mismo. (Moreno, 2019)

Reseña Moreno (2019) que, contando con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, en 2011 comunidades pertenecientes a Esmeraldas, obtuvieron medidas encaminadas a la protección de sus derechos. No obstante, su materialización no ha sido posible, pues no cesa la intervención de las industrias en su territorio.

Según lo plantea Moreno (2019), la mayor afectación causada, por el cultivo extensivo de palma aceitera se refleja en la erosión del bosque, que junto con otras actividades de carácter extractivista como la tala de árboles se han profundizado en los territorios.

Las concesiones a empresas madereras o las negociaciones entre las comunidades y dichas empresas causaron una disminución considerable del bosque, que en gran medida ha desaparecido excepto de áreas de reserva y áreas protegidas. Posteriormente esta pérdida de bosque se profundizó con la extensión del monocultivo de palma y el uso concomitante de agroquímicos. (Moreno, 2019)

A pesar de las ganancias que obtienen la economía nacional y las empresas a costa de los recursos que yacen en los territorios colectivos de la población de Wimbí, el acceso a servicios básicos y la garantía de derechos fundamentales es mínima, así lo expone Moreno (2019).

En Esmeraldas, y en especial en el norte de la provincia, el atropello de derechos al que se refiere el técnico también se refleja en la falta de infraestructura y de dotación de servicios básicos que aqueja a las comunidades negras, indígenas o de mestizos pobres. Este es el caso de Wimbí, comunidad que no posee agua potable (a pesar de la contaminación del río), tiene un solo camino lastrado de acceso, limitado servicio de transporte y no cuenta con educación secundaria ni con un centro de salud en la comunidad. (Moreno, 2019)

Para Moreno (2019), todo lo anterior se explica por una falta de interés del Estado hacia la protección de los derechos de la población racializada que habita estos territorios, denotando exclusión y discriminación.

Parecería ser que las vidas de las personas afroecuatorianas e indígenas de Esmeraldas no tuvieran el valor necesario para que estas instituciones estatales respondan con la urgencia que la situación amerita. (Moreno, 2019)

Moreno (2019) pone sobre la mesa resultados de algunas entrevistas que manifiestan la existencia de estereotipos racistas en el marco de la interacción de la empresa y los pobladores de la comunidad.

Estos comentarios tienen una carga heredada de la colonia, y enfatizan la falta de productividad o el no aprovechamiento de los recursos por parte de las personas pertenecientes a grupos étnico raciales. (Moreno, 2019)

Mediante entrevistas realizadas por Moreno (2019) para sustentar su tesis, se puso de presente la “colonialidad del conocimiento”, concepto que será abordado en el tercer capítulo del presente trabajo, la cual demuestra que en la lógica racista y excluyente, sólo existen unos saberes válidos, unos aportes significativos, y unas formas de aprovechamiento de la naturaleza, así lo sostienen (Césaire, 1972), (Adichie, El peligro de la historia única, 2018), entre otros. De esta manera, los conocimientos propuestos por los pueblos étnico - raciales, se reducen a subjetividades anecdóticas.

La racialización de las poblaciones afroesmeraldeñas se produce mediante discursos que se refieren al supuesto contraste entre las poblaciones locales y los actores externos con respecto a hacer producir a la naturaleza. Caracterizando el discurso racista, señalaba un entrevistado: “Que los negros y los indios no son productivos por su raza” o que “no saben hacer producir la tierra” (entrevista a académico aliado a la lucha de Wimbí, Esmeraldas, octubre de 2017). (...) Al mismo tiempo, se estereotipaba a las poblaciones afroesmeraldeñas e indígenas como perezosas e ineptas para aprovechar la riqueza de los recursos. Estos discursos continúan y refuerzan las jerarquías etnoraciales que devalúan las vidas, cuerpos y experiencias de afroecuatorianos e indígenas. (Moreno, 2019)

En este sentido, Moreno (2019) cuestiona el papel del Estado como garante de derechos, que, en lugar de desempeñar labores encaminadas a la protección de la población, perpetúa el abandono y la exclusión traducida en la negligencia respecto de los daños medioambientales causados por las empresas, conjugado con los niveles de pobreza que presenta esta comunidad.

A estas manifestaciones de racismo, se suman en el caso de Wimbí aquellas que amplifican la marginalidad y pobreza mediante el sufrimiento ambiental: ante la gravedad de la situación producida por los efectos nocivos de contaminación ambiental, la respuesta del Estado ha sido “dejar morir” o exponer a la muerte lenta a poblaciones “desechables” (Moreno, 2019)

Ante las múltiples situaciones que enfrenta la comunidad, reconoce Moreno (2019) que su apuesta ha estado dirigida a la resistencia en el territorio, con miras a dignificar y posicionar sus derechos como dueños de la tierra.

La estrategia de la comunidad ha sido permanecer en el territorio en disputa y fortalecer su posesión efectiva frente a racionalidades de acumulación (palmicultora o minera) que racializan a la gente y geografía del norte de Esmeraldas como inadecuadas, y legitiman a quienes acaparan la tierra para proyectos de supuesto desarrollo y modernidad. (MORENO, 2019)

Y el objetivo de su resistencia, como lo plantea Moreno (2019), es lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos por la posesión ancestral del territorio, así no cuenten con título de propiedad.

Los pobladores de Wimbí, en el conflicto por tierras con la empresa palmicultora, (...) apelan a los derechos colectivos de las comunidades afroecuatorianas como grupo étnico (como pueblos y nacionalidades en el lenguaje de la Constitución ecuatoriana). Aunque la comunidad no tenía título de propiedad de los terrenos en disputa, la posesión de los mismos ha sido por presencia histórica y por uso, como terrenos de cultivo y cacería. (MORENO, 2019)

La conclusión de Moreno (2019) apunta hacia la relación íntima que existe entre el modelo capitalista en la lógica de generación de riquezas, y el racismo ambiental. Ya que, como lo expuso en el desarrollo del texto, existe una alta coincidencia entre las luchas por los derechos territoriales y los territorios habitados por poblaciones racializadas. Así entonces, hace un llamado a no matizar el término racismo, sino presentarlo como lo que es, un sistema que oprime a grupos sociales con base en su pertenencia étnico racial.

Es más, urge en el actual contexto nombrar el racismo de manera explícita pues la violencia directa desde el Estado u otros actores contra defensores de la naturaleza apunta de manera desproporcionada a activistas y miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes. (Moreno, 2019)

Moreno (2019) continúa sus reflexiones finales, alrededor de cómo el racismo opera en las decisiones estatales con el fin de conservar el status quo mediante la

perpetuación de las desigualdades que permitan generar avances en materia económica, a partir de la distribución desigual de las cargas y los beneficios de las actividades encaminadas a alimentar el modelo de desarrollo de la acumulación capitalista.

Por medio de un análisis que incluye un enfoque desde el racismo ambiental, he demostrado en este trabajo cómo en el norte de Esmeraldas los procesos de desposesión y segregación social que afectan a los territorios y poblaciones afroecuatorianas, y a la comunidad de Wimbí en específico, se fundamentan en la devaluación de las personas afrodescendientes y en los efectos nocivos que la degradación ambiental tiene en sus cuerpos, su salud y bienestar general. Sin la devaluación de estas poblaciones y sus cuerpos sería difícil justificar la inacción estatal frente al sufrimiento ambiental que se vive en la zona. El racismo funciona aquí para asegurar la desigualdad existente entre afroecuatorianos y blanco – mestizos requerida para el desarrollo de la agroindustria y la industria minera, pues implica la pérdida de vidas y desechabilidad de quienes tienen menor valor en las jerarquías etnoraciales del país. (Moreno, 2019)

2.5.3 Caso 3. Consejos Comunitarios Puerto Rey y Tierra Baja, La Boquilla, Cartagena, Colombia

La Corte Constitucional colombiana mediante sentencia T-969/14, da respuesta a la demanda de derechos presentada por sujetos colectivos de Cartagena, pertenecientes a pueblos negros, los cuales alegan estar padeciendo daños medioambientales causados por un proyecto que no les genera ningún beneficio, el cual no les fue consultado.

Caso de comunidad negra que manifiesta no habersele realizado consulta previa de un proyecto de disposición de aguas residuales cuyo trayecto pasa por sus territorios causándoles perjuicios y también manifiestan no contar con el servicio de alcantarillado. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Según lo planteado por la Corte Constitucional (2014), el proceso inicia en 2012 cuando representantes de los Consejos Comunitarios ejercen el derecho a la tutela exigiendo se reconozcan los daños causados a sus comunidades durante el

proceso de planeación y ejecución del proyecto, mediante el cual les fueron afectados los derechos colectivos que ostentan.

El 30 de agosto de 2012, Agustina Carmona de Manrique y Henry Guyzamani Vivas, actuando como representantes legales de los Consejos Comunitarios de Tierra Baja y Puerto Rey, respectivamente, interpusieron acción de tutela contra la Empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., al considerar que se vulneraron los derechos a la igualdad, al debido proceso, al respeto por la dignidad humana, y a la consulta previa, y por violación de los derechos consagrados en la Ley 70 de 1993, el Convenio 169 de la OIT, el Decreto 1320 de 1998, y de la Ley 99 de 1993. En consecuencia, solicita que se ordene mitigar los perjuicios causados y se indemnice a las comunidades afectadas. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

De acuerdo con lo planteado por la corte, en este territorio no se cuenta con acceso a servicios públicos, y de manera particular y paradójica, la falta de acceso al servicio que presta la empresa que ejecuta el proyecto, acueducto.

Dichas comunidades carecen, entre otras, de servicio de alcantarillado, y las aguas residuales corren por enfrente de las residencias, conforme consta en el registro fotográfico aportado al expediente por los demandantes. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

No obstante, como lo apunta la Corte Constitucional (2014), la operación de la empresa ha causado daños al medio ambiente sano, provocando un escenario insalubre para quienes habitan esos territorios, así lo han manifestado los habitantes del sector.

Se han presentado inundaciones de las vías de acceso y de las viviendas de dichas comunidades, (...) Según la versión de los demandantes (...) son consecuencia de las obras del proyecto de aguas residuales que sirve a la ciudad de Cartagena denominado “Emisario Submarino”, ejecutado por la empresa demandada. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Adicionalmente, sumado a las condiciones preexistentes, estas inundaciones y la no existencia de un sistema que gestione las aguas, los habitantes han presentado problemas de salud. Aunado a lo anterior, se han presentado epidemias y

enfermedades entre la población, causadas, entre otras razones, por la falta de alcantarillado. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

La Corte Constitucional (2014) comenta que, siendo las directas afectadas por la operación del proyecto ejecutado por la empresa, las comunidades no entienden por qué no tuvieron participación democrática en la toma de decisiones sobre su territorio. Y más grave aún, siendo sujeto colectivo étnico, se les negó el derecho fundamental a la consulta previa.

El 14 de mayo de 2012, los demandantes solicitaron a la entidad demandada explicar las razones por las cuales no se había realizado la consulta previa de la obra que estaban ejecutando, conocida como “Emisario Submarino”. Agregan que el trayecto terrestre del Emisario atraviesa la carretera de Puerto Rey, y pasa por el centro del territorio de Tierra Baja. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

En esta línea, la Corte Constitucional (2014) transmite lo expresado por las comunidades, y es que el proceso legal que emprenden responde a que no fueron consultadas ni se les explicó los efectos que les causaría la intervención de la empresa sobre su territorio, su salud y estilo de vida, no se les compartió información sobre qué medidas de prevención se tomarían para mitigar los daños.

Por otra parte dicen que las comunidades desconocen el plan de manejo ambiental respectivo, y que la obra le está causando diversos perjuicios, pues impide el flujo de aguas lluvias y residuales, lo cual produce inundaciones y estancamiento de las aguas. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

La Corte Constitucional (2014) pone de presente que la empresa se defiende con base en las acciones que llevó a cabo en torno a la participación de la población, sin embargo, más allá de exponer la publicación en la prensa donde convocaba a la consulta, y mencionar las comunidades con las que se reunió, entre las cuales no están las demandantes, no aportó pruebas de haber realizado la consulta previa de manera efectiva.

El 14 de junio de 2012, Aguas de Cartagena responde que sí se hizo consulta previa con las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto y se realizaron algunas obras y actividades como parte de la responsabilidad social de la empresa.

Continúa diciendo que se citó a consulta con un aviso en el periódico El Tiempo, de julio 9 de 2000, y se publicó en el boletín oficial y en las carteleras de las inspecciones de policía de los corregimientos de Punta Canoa, Arroyo de Piedra, Manzanillo del Mar y la Boquilla (fl 30). Sin embargo, en la respuesta de la empresa no se menciona específicamente cuándo se llevaron a cabo las consultas con las dos comunidades demandantes. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Enmarcado en el proceso de reclamación de derechos, la Corte Constitucional (2014) realiza un recuento de las acciones judiciales que se adelantaron con el fin de verificar las versiones recibidas provenientes de las partes involucradas. En este escenario, el juez logró constatar que existían problemas de salubridad en las comunidades.

El 10 de septiembre de 2012, la juez de primera instancia practicó una diligencia de inspección judicial en los caseríos de Tierra Baja y Puerto Rey. Durante la diligencia observó aguas corrientes por diversas partes de los caseríos, al igual que aguas estancadas de color verde oscuro, y que salía agua residual de al lado del sanitario de una de las casas. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Durante esta diligencia, el juez recibió testimonio de una habitante de la comunidad, quien manifestó que la empresa les informó en un principio que el proyecto no pasaría por su territorio, y una vez la empresa definió que en efecto, el tubo atravesaría el territorio de las comunidades demandantes, citaron a la Junta de Acción Comunal, no al Consejo Comunitario, y en esos espacios no les explicaron cuáles serían las consecuencias. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Por su parte, la alcaldía de Cartagena, que fue requerida por la falta de alcantarillado en las demandantes, solicitó, en 13 de septiembre del mismo año, se desestimara el proceso pues quien afectó los derechos de las comunidades fue la empresa, apoya la versión de la empresa sobre la realización de la Consulta Previa, y finalmente alega que la tutela no es el mecanismo idóneo para exigir el alcantarillado. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

La Corte Constitucional (2014) relata que luego de la diligencia y contraste de versiones, la primera instancia decide negar las peticiones de las comunidades,

debido a que, según su criterio, no usaron el instrumento legal adecuado para el caso particular.

Mediante Sentencia del 14 de septiembre de 2012, el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena decidió denegar la acción de tutela por improcedente ya que los demandantes pueden recurrir a la acción popular para proteger sus derechos. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

La Corte Constitucional (2014) afirma que, de la misma manera, y sin contar con las pruebas suficientes del escenario de consulta previa que la empresa declara haber realizado, define que tal procedimiento si se llevó a cabo, a partir de los elementos aportados

Finalmente, acoge lo dicho por la empresa de servicios públicos demandada en el sentido de que si se llevó a cabo una consulta previa. Sin embargo, no indaga específicamente si las comunidades demandantes fueron consultadas en el presente caso, o si fueron otras comunidades las consultadas. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Continúa la Corte Constitucional (2014), comentando que a un mes de distancia aproximadamente, la decisión inicial fue ratificada en segunda instancia en su totalidad.

Mediante Sentencia del 30 de octubre de 2012, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena decidió confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia. (Constitucional, 2014)

La Corte Constitucional, en noviembre de 2014 reitera las solicitudes encaminadas a dar respuesta a la demanda de las comunidades, en este sentido, indaga sobre la consulta previa a la empresa y a la alcaldía acerca del alcantarillado. Ninguna de las dos envió la información requerida, sin embargo, (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

El **gerente general de la empresa demandada**, por su parte, informó mediante escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 14 de noviembre de 2014, que no se había alterado ni modificado el área de influencia del proyecto con

posterioridad a la consulta previa, y aportó las coordenadas planas de la misma. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

La Corte Constitucional (2014) resalta los niveles de desigualdad y discriminación que afloran en este caso, pues los altos costos que asumen las comunidades no se ven reflejados en beneficios como los que obtendrá la ciudad en general.

Sin embargo, a pesar de no contar con el servicio de alcantarillado, el distrito de Cartagena decidió que el tubo con las aguas residuales de toda la ciudad pasara por los territorios de dichas comunidades negras con todos los riesgos y las afectaciones que dicho proyecto conlleva para ellas. (...) En otras palabras, las comunidades negras demandantes están asumiendo los riesgos y las cargas públicas del servicio de alcantarillado de Cartagena, sin recibir los beneficios de dicho servicio. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Respecto del acceso a servicio de alcantarillado, durante este proceso ante la Corte, la posición de la empresa y de la alcaldía fue la de justificar sus acciones, y trasladarse la responsabilidad entre ellas. La empresa sostiene que al firmar contrato con el Distrito, es este que debe ocuparse de generar las condiciones de bienestar para las comunidades. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Por otro lado, respecto del proyecto en particular, la empresa señala que no se causaron daños, y que al contrario, si bien, las comunidades no se beneficiarán inmediatamente de las obras, más adelante verán resultados. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

En relación con los perjuicios alegados por los demandantes agrega que la construcción del Emisario Submarino no ocasionó ningún daño a la comunidad, y que por el contrario su *“finalización y puesta en marcha significa la solución definitiva al saneamiento básico de la ciudad de Cartagena y permitirá en un mediano plazo la conexión al sistema de alcantarillado de los caseríos de Tierra Baja y Puerto Rey”*. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Es importante resaltar que, entre las consideraciones de la Corte Constitucional, en la mencionada sentencia de 2014, *“El Racismo Ambiental como forma de Discriminación Estructural”* constituye uno de los argumentos clave para resolver el

problema jurídico sobre la existencia de discriminación y trato desigual con las comunidades negras afectadas. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

La Corte Constitucional (2014) entonces procede a aportar una definición de racismo ambiental, acompañada de varios casos puntuales donde se prueba la existencia de este tipo de discriminación. Coinciden en que las empresas y el Estado toman la decisión de ubicar los proyectos con altos efectos negativos para el medio ambiente en los lugares donde se encuentran comunidades pertenecientes a grupos racializados, empobrecidos e históricamente discriminados.

En el derecho comparado el racismo ambiental es considerado una forma de discriminación en la cual la distribución de cargas y riesgos ambientales obedece a patrones raciales. Algunos de los casos más renombrados de racismo ambiental provienen de los Estados Unidos. Así, por ejemplo, uno de los primeros casos en llegar a las cortes fue el del Relleno del condado de Warren, en Carolina del Norte. En este caso el gobierno federal y el estatal eligieron un área del condado como sitio para depositar desechos tóxicos, cuya población era mayoritariamente afroamericana. La comunidad, en conjunto con la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) interpusieron una demanda para impedir que las autoridades depositaran los desechos tóxicos en la zona. Aun cuando perdieron el caso, veinte años después el gobierno contrató a una empresa para retirar los desechos tóxicos que había depositado. (Constitucional, 2014)

La Corte Constitucional (2014) llama la atención sobre la intencionalidad, que es un aspecto generalmente problemático cuando se trata de discriminación. Si bien hay personas que discriminan de manera consciente y deliberada, el racismo y la discriminación obedecen a una estructura que está instalada en la sociedad y sus instituciones, que sesgan la toma de decisiones, validando y perpetuando las desigualdades existentes.

Para algunos tratadistas es importante que exista una intención de discriminar o marginalizar a grupos determinados de la sociedad, identificados por sus características étnicas o raciales. Para otros, la discriminación no siempre es producto de una intención en cabeza de un individuo artífice de la misma. Por el contrario, tratándose de un fenómeno extendido al interior de la sociedad y del cual

hacen parte instituciones y estructuras sociales, algunos individuos participan en él con la intención de discriminar, mientras que otros lo hacen porque ven factible que ciertos grupos étnicos o raciales, que han sido tradicionalmente marginados, acepten las cargas y los riesgos sin oponer mayor resistencia. Otros, por su parte, pueden ser partícipes por un fenómeno de naturalización de un determinado estado de cosas. Así, nadie se sorprende de que la pobreza y la marginalidad estén distribuidas estadísticamente de manera que afecten de manera desproporcionada a un grupo étnico o racial determinado. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

En atención a lo anterior, la Corte Constitucional (2014) sienta posición sobre su rol como ente que imparte justicia, y debe estudiar los casos teniendo conciencia de las desigualdades preexistentes y del racismo estructural institucionalizado, que se traducen en la imposición de grandes cargas a un grupo étnico racial más que al resto de la población, y de manera inversa, los beneficios son pocos o nulos para las comunidades afectadas.

De cualquier manera, al margen de las dificultades probatorias, como lo afirmó la Sala, el papel del juez constitucional no consiste únicamente en identificar y juzgar aquellos casos de discriminación en los que existe una intención explícita o fácilmente deducible. Le corresponde juzgar, entre otras, las posibles violaciones al derecho a la igualdad de trato por parte de las autoridades, y en algunos casos también de los particulares, al margen de que ésta se concrete en una medida específica, o en un patrón más amplio de comportamiento institucional. En los dos casos, sin embargo, debe existir un grupo o comunidad étnica o racial identificable que soporta cargas y riesgos que no se les han impuesto a otros grupos. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

En concordancia, la Corte Constitucional (2014) plantea las condiciones que deben estar presentes para que exista racismo ambiental:

- 1) Una comunidad claramente identificable que comparta una identidad étnica o racial minoritaria que haya sido oprimida o marginada del proceso de toma de decisiones, (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

- 2) Que dicha comunidad deba soportar una serie de cargas y/o riesgos en materia ambiental que signifiquen un detrimento para sus derechos, bienes, valores, o intereses de relevancia constitucional, (Corte Constitucional de Colombia, 2014)
- 3) Que tales cargas y/o riesgos ambientales resulten desproporcionados en relación con aquellos que deben soportar otros grupos étnicos a los que pertenecen las personas que adoptan las decisiones con respecto de la distribución de tales cargas considerada discriminatoria, (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Con base en las tres premisas anteriormente expuestas, la Corte Constitucional (2014) concluye que el caso de las comunidades de Puerto Rey y Tierra Baja es un ejemplo de racismo ambiental.

En este caso se presentan todas las anteriores condiciones, y otra adicional. Los demandantes son dos comunidades negras que han sido tradicionalmente marginadas del proceso de toma de decisiones y de la distribución de recursos y servicios. La discriminación estructural contra las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ha sido reconocida por esta Corporación. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Adicionalmente, de manera puntual, sobre las condiciones preexistentes, la Corte Constitucional (2014) expone que adicional a los problemas causados por el proyecto y la falta de alcantarillado, las comunidades ya padecían afecciones causadas por el mal manejo de las aguas que redundaba en daños al medio ambiente y efectos negativos en cuanto a las formas de vida comunitarias.

Por otra parte, a estas comunidades les correspondió aguantar no sólo las cargas propias de la construcción del Emisario Submarino. Debieron soportar la contaminación de la Ciénaga de la Virgen a donde llegaban las aguas residuales antes de la construcción del Emisario, que hace parte de su territorio, y de la que muchos pescadores derivaban su sustento. (Corte Constitucional de Colombia, 2014).

La Corte Constitucional (2014) resalta además que las comunidades fueron ignoradas por parte de la empresa y la alcaldía, al tomar la decisión de que el proyecto pasara por su territorio, y no contaron con las garantías de participación

que les permitiera tener conocimiento de su funcionamiento y los efectos negativos que generaría.

Finalmente, las comunidades demandantes no participaron en la decisión de construir el Emisario, ni de su trazado, ni en ninguna otra de las decisiones con respecto a la distribución de riesgos y cargas ambientales que han tenido que soportar. (Corte Constitucional de Colombia, 2014).

Al final, la Corte resume la problemática así:

(...) no es solamente que las comunidades de Tierra Baja y Puerto Rey tengan que aguantar lo que los economistas denominan las “externalidades negativas” que son consecuencia del proyecto. El problema es, también, que no reciben ningún beneficio de la construcción y operación de dicho proyecto. Todas las aguas residuales de Cartagena atraviesan su territorio, lo cual supondría que los costos de conexión para ellos se reducen. Sin embargo, ellas no tienen derecho a utilizar el sistema de alcantarillado (...) (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

Como conclusión de este aparte, y a partir de todo lo expuesto por la Westra (2001), Moreno (2019) y la Corte Constitucional de Colombia (2014), si bien los tres casos suceden en contextos diferentes, coinciden en varios aspectos cruciales al momento de determinar que se ejerció racismo ambiental, en tanto el Estado o empresas decidieron realizar proyectos con alto impacto medioambiental en territorios predominantemente habitados por población Afrodescendiente, violando el derecho a la consulta previa en los casos latinoamericanos, y en el caso de Estados Unidos, en todo caso, se negó el derecho a la participación efectiva de la comunidad, así mismo, no se tuvieron en cuenta los derechos colectivos de las comunidades afectadas. En todos los casos se obvió el elemento democrático de los momentos de planeación y ejecución de las políticas o proyectos que tuvieron lugar en los territorios.

Así mismo, la información suministrada a los integrantes de las comunidades, cuando la hubo, fue parcializada o se ocultó información sobre los impactos que dichas actividades representarían en los territorios, la salud y el bienestar de las comunidades involucradas.

En este sentido, hubo vulneración a los derechos humanos de los pueblos, principalmente al derecho a un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo. Los derechos al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria, entre otros, se vieron gravemente afectados a partir de las decisiones inconsultas que tomaron el Estado o las empresas en cuestión.

Otro aspecto que fue común en los casos, se refiere a la invisibilización de las problemáticas causadas a las comunidades y la falta de celeridad de los sistemas jurídicos al momento de impartir justicia en los casos particulares.

Conclusiones capítulo 2

El análisis permite constatar que si bien, los derechos humanos son de carácter universal, y todos los seres humanos tienen derecho a un medio ambiente sano, existe el racismo ambiental como problemática resultante de injusticias, que se manifiestan en la decisión de realizar los proyectos y obras con alto impacto medioambiental en los territorios donde se encuentran los pueblos étnico raciales, que han sido históricamente discriminados.

En este orden de ideas, el análisis a partir de la ilustración de casos de Estados Unidos y latinoamericanos aporta elementos para el abordaje del caso del presente estudio. El racismo ambiental se hace evidente al constatar la existencia de consecuencias negativas, en términos medioambientales, en comunidades pertenecientes a pueblos étnicos tradicionalmente discriminados debido a la toma de decisiones políticas y económicas que involucran sus territorios, sin garantías de participación en el proceso, y con poca o nulo acceso a los beneficios que generan estas políticas o proyectos.

Finalmente, se concluye que, ante la existencia de una tensión entre los derechos humanos y el modelo de desarrollo, los pueblos étnicos, tradicionalmente discriminados, asumen mayores costos y consecuencias, comparados con los que debe soportar los demás ciudadanos.

CAPÍTULO 3

3 Racismo ambiental en Anchicayá. Estudio de caso

El presente capítulo pretende hacer evidente la existencia de prácticas que responden al racismo ambiental en el caso del Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá, a partir de la validación de aspectos relevantes del marco teórico y el estudio comparativo de casos, en los capítulos precedentes. Este estudio de caso será abordado mediante un análisis desde el racismo ambiental y las etapas de las políticas públicas. Aquí se problematizarán las etapas de participación, y los protocolos institucionales mediante los cuales se dio respuesta a las demandas de las comunidades afectadas.

Este capítulo seguirá el orden que propone André Noël Roth (2002) en su análisis de política pública, resaltando especial atención en la etapa de participación de actores.

Esta primera parte del capítulo se guía por las siguientes cuestiones. ¿En la etapa de la formulación de la acción del vertimiento de sedimentos de la Hidroeléctrica al río Anchicayá por parte de la EPSA, se consideraron los derechos humanos de la población que iba a ser impactada por la obra? ¿Las decisiones que se tomaron fueron democráticas? ¿Se consideraron los impactos ambientales que tendría esa obra en la región?

En segundo lugar, se estudia el proceso de evaluación de esta acción a partir de las siguientes preguntas: ¿En la etapa de evaluación de esa acción se consideraron los derechos humanos de la población que iba a ser impactada por la obra? ¿Las decisiones que se tomaron fueron democráticas? ¿Se consideraron los impactos ambientales que tendría esa obra en la región?

Es necesario anotar que en este capítulo no se harán consideraciones de carácter técnico, entendiéndolo como de carácter económico o financiero, de planeación, de corrupción, ineficacias, e ineficiencias, ya que el énfasis de esta investigación son los derechos humanos, la democracia y el medio ambiente.

3.1 Leyes que regulan la titularidad de la tierra a las comunidades negras (Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993).

Como se abordó en el capítulo precedente, el Convenio 169 OIT (1989) reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades pertenecientes a pueblos étnicos que poseen características similares que los hacen parte de un colectivo, en su relacionamiento con el medio ambiente, cultura y formas de vida, entre otros aspectos.

En Colombia, el Congreso de la República convierte el Convenio OIT 169 en parte del bloque de constitucionalidad, al sancionar la Ley 21 en el año 1991, la cual aprueba el Convenio OIT 169, el día 4 de marzo de 1991, acogiendo la totalidad del articulado de dicho convenio, y basándose en las consideraciones y reconocimientos que hace la OIT respecto de la discriminación, desigualdad existente entre los pueblos étnico raciales y el resto de la población en los países en los que habitan, así como sus aportes a la conservación del medio ambiente, y su derecho a participar y ser consultados cuando se va a realizar una actividad o proyecto en sus territorios, entre otros aspectos relevantes de obligatoria aplicabilidad (Congreso de la República, 1991).

Por su parte, la Ley 70 de 1993, desarrolla lo dispuesto en el artículo 55 transitorio de la Constitución Política de 1991. Esta ley, en su primer artículo plantea el objetivo de la ley, el cual propende por el reconocimiento y defensa de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades negras de Colombia. (Congreso de la República, 1993)

Es decir, la ley 70 de 1993 tendrá aplicabilidad en las zonas del Pacífico, en las que confluyan diversos aspectos resaltados en el primer artículo.

Reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción el derecho a la propiedad colectiva (...)

Mediante la Ley 70 se reitera que, su aplicación, además de las comunidades de la zona del Pacífico, se extiende hacia otras áreas del país que cumplan con las mismas condiciones, así,

(...) en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.” (ACNUR, Ley 70 de 1993)

En el artículo 4 de la Ley 70, determina que, siempre y cuando las comunidades asentadas en un territorio que cumpla con las características enumeradas en el artículo,

El Estado adjudicará a las comunidades negras de que trata esta ley la propiedad colectiva sobre las áreas que, de conformidad con las definiciones contenidas en el artículo segundo comprenden las tierras baldías de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y aquellas ubicadas en las áreas de que trata el inciso segundo del artículo 1º. de la presente ley que vienen ocupando de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. (Congreso de la República, 1993)

En el artículo 5 de la Ley 70 de 1993, se regula cómo se deben organizar las comunidades con aras de obtener la titularidad de las tierras que han habitado ancestralmente.

Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el Gobierno Nacional. (ACNUR, Ley 70 de 1993)

Las obligaciones que tienen los Consejos Comunitarios, además de definir las formas de relacionamiento y mecanismos de resolución de conflictos, van encaminadas a la preservación y cuidado del medio ambiente, constituye su

responsabilidad y derecho, pues el bienestar del territorio se traduce en el buen vivir de las comunidades a partir de sus tradiciones.

Además de las que prevea el reglamento, son funciones de los Consejos Comunitarios: delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; (...). (ACNUR, Ley 70 de 1993)

El artículo 7 de la citada ley establece que, en tanto derecho colectivo, la titularidad de la tierra no se puede vender, ni entregar derechos a un tercero sobre la misma.

En cada comunidad, la parte de la tierra de la comunidad negra destinada a su uso colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable. (ACNUR, Ley 70 de 1993)

En el artículo 20 de la Ley 70 de 1993 reitera el deber de las comunidades negras, que, organizadas como Consejos Comunitarios, poseen la titularidad de la tierra, de preservar el territorio y sus cualidades, desarrollando el rol de protectores de los recursos naturales que allí se encuentran, en tanto sus vidas se sostienen a partir de ese relacionamiento con el río y su entorno, y a su vez, ese cuidado del medio ambiente beneficia a la población en general, en tanto contribuyen a mitigar las afectaciones al medio ambiente.

Conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad colectiva sobre las áreas a que se refiere esta ley, debe ser ejercida de conformidad con la función social y ecológica que le es inherente. En consecuencia, los titulares deberán cumplir las obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir con las autoridades en la defensa de ese patrimonio (Congreso de la República de Colombia, 1993).

3.2 ¿Por qué Anchicayá?

El estudio de caso se sitúa en el río Anchicayá, debido a un interés personal y académico de visibilizar los daños ambientales y socioculturales causados por una decisión que tomó la Empresa de Energía del Pacífico¹⁰ - EPSA sobre el río Anchicayá, fuente hídrica que constituye el sustento y el fundamento del desarrollo de la vida del sujeto colectivo de comunidades negras que lo habita (Murillo, 2019).

Esta situación se ha agravado con la respuesta negligente recibida por parte del Estado y su aparato jurídico, que, luego de 22 años no presenta una respuesta integral al pueblo negro que habita y convive con el río (Caicedo, 2023; Murillo, 2019).

Este proceso ha representado una lucha de más de dos décadas de una comunidad que históricamente ha sufrido del abandono estatal, contra una empresa y un Estado que no ha fungido como garante de derechos individuales ni colectivos (Caicedo, 2023; Murillo, 2019).

El caso del río Anchicayá presenta ejemplo de cómo opera el racismo ambiental, pues pone de presente la desproporcionada imposición de cargas medioambientales negativas, en un escenario que no representa beneficios para las comunidades ni su entorno.

Ser una mujer negra de Buenaventura, nieta de una mujer Anchicagüeña, bisnieta de un hombre negro que cultivó la tierra en el río Anchicayá, cuyo territorio sufrió, como lo llama Silvano Caicedo, desplazamiento ambiental (Caicedo, 2023), a partir del accionar de la EPSA, me hace sentir la necesidad de poner sobre la mesa la discusión sobre el racismo ambiental en Colombia, de manera particular en comunidades negras.

¹⁰ En adelante EPSA.

3.2.1 Presentación del río Anchicayá

Es entonces necesario presentar el río Anchicayá, sus principales características, y sus implicaciones culturales a partir del relacionamiento con las comunidades negras que lo han habitado por generaciones.

El río Anchicayá es una fuente hídrica extensa, que nace desde límites con los Farallones de Cali y recorre una importante cuenca hidrográfica de Buenaventura que desemboca en el océano Pacífico (Murillo, 2019).

El líder del proceso de defensa de derechos étnico territoriales de las comunidades negras del río Anchicayá, y miembro del Consejo Comunitario Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, describe la importancia del río para la región.

El río Anchicayá es un río que entre el Valle del Cauca y la Costa Pacífica, jugó un papel muy importante en la parte agrícola y pecuaria, porque es un río rico en diferentes variedades, (...) (Caicedo, 2023)

Adicionalmente, explica el relacionamiento que han entablado las comunidades negras con el río Anchicayá, y toda la utilidad que tiene para desarrollar sus formas de vida y su cultura.

El territorio es la vida, (...) porque para la comunidad negra es imposible vivir sin territorio, porque de esa agua de ese territorio sacamos nosotros agua para bautizar nuestros hijos, nuestras hijas, sacamos el agua para alimentarnos. (Caicedo, 2023)

Está dividido en tres zonas, de las cuales, el área del Bajo Anchicayá es la más extensa y fue la afectada por la apertura de las compuertas de la represa de la EPSA. Así lo identifica la Defensoría del Pueblo de Colombia (2005) en un informe que emitió para advertir la vulneración de derechos de estas comunidades, su río y el territorio

La cuenca hidrográfica del río Anchicayá se divide fisiográficamente en zona alta y zona baja, esta última tiene una superficie de 63.344 ha, distribuidas en cinco

subcuencas y tres microcuencas, que corresponden al 49% del área total del territorio (Defensoría del Pueblo, 2005, pág. 4).

En este mismo informe la Defensoría del Pueblo esboza algunas características del Río Anchicayá que da cuenta de su importancia en la dieta y condiciones de vida para los habitantes.

La cuenca presenta gran diversidad hidrobiológica y faunística, aparecen reportadas 26 especies de peces de buena talla y número abundante que hacen parte fundamental de la dieta del hombre (Defensoría del Pueblo, 2005, pág. 4).

Del mismo modo, en este reporte la Defensoría del Pueblo aborda las características socioculturales de los habitantes pertenecientes a Consejos Comunitarios de la Cuenca del Río Anchicayá, siendo titulares de los derechos étnico-territoriales consignados en la Ley 70 de 1993.

Las familias asentadas en la cuenca baja del río Anchicayá en los términos de la Ley 70 de 1993 son de ascendencia afrocolombiana, poseen una cultura propia: comparten un pasado común, tienen sus propias tradiciones y costumbres y una conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos (...) Estas familias están organizadas en nueve Consejos Comunitarios: (1) Agua Clara (2) Bracitos y Amazonas (3) Guaimía (4) Limones (5) Llano Bajo (6) Sabaletas (7) San Marcos (8) Taparal y Humanes y (9) Mayor del río Anchicayá, los cuales derivan su actividad económica y su dieta alimentaria de la pesca en el río Anchicayá (Defensoría del Pueblo, 2005, pág. 4) (Defensoría del Pueblo, 2005, pág. 4).

La titularidad de la tierra que ostentan los Consejos Comunitarios actualmente fue otorgada por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA a partir de la solicitud elevada por las comunidades organizadas en razón de los derechos étnico - territoriales protegidos mediante la Ley 70. (Defensoría del Pueblo, 2005, pág. 4)

En el citado informe de la Defensoría del Pueblo, se resalta que al momento de la titulación colectiva de los territorios, la entidad encargada insta al Estado a la conservación de los recursos que allí yacen, en tanto es una zona que produce y

contiene elementos con un alto valor, no sólo para quienes habitan el territorio, el país y el mundo. Así se expresa

El INCORA consideró en las citadas resoluciones que “el área objeto de titulación comprende la Costa Pacífica vallecaucana, considerada dentro de la Política Ambiental Nacional como un ecosistema estratégico que debe ser conservado, porque los valiosos recursos genéticos y de biodiversidad que hoy existen en esta región, constituyen bienes públicos propiedad de toda la Nación, vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias allí asentadas, para el desarrollo del país y para el futuro de la humanidad (Defensoría del Pueblo, 2005, pág. 5).”

Las comunidades negras que habitan el territorio del río Anchicayá, continuó expresando este informe, así como todas las que se encuentran organizadas en Consejos Comunitarios y cuentan con derechos de propiedad sobre la tierra, tienen, además de los derechos adquiridos, obligaciones respecto del cuidado y conservación de estas. Así se manifiesta

Las tierras que se adjudican a las comunidades negras están sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica consagrada en el artículo 58 de la Constitución Política, razón por la cual los titulares del derecho de propiedad colectiva están en la obligación de cumplir las obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y de contribuir con las autoridades ambientales en la protección del patrimonio natural (Defensoría del Pueblo, 2005, pág. 5).

Ahora bien, para los Consejos Comunitarios que han estado desarrollando su vida y su cultura alrededor del río, el Anchicayá es su herencia ancestral, como lo menciona el señor Silvano Caicedo Girón (2023), líder del proceso de comunidades negras de Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá, de la defensa de los derechos étnico territoriales de las comunidades, y de la lucha por el reconocimiento de los daños causados y la reparación de los mismos (2023).

(...) porque yo digo una frase que lo único que nos quedó a nosotros después del proceso tan brutal de la esclavización fue el territorio hópito del Anchicayá, para la población. (...) porque allí en ese río está una cultura milenaria, de una comunidad que hemos vivido y nos hemos sostenido del río, y que en este río hay unos rasgos

culturales e identitarios de una población negra que vivimos ahí, en esa Cuenca. Porque para nosotros es nuestro mejor orgullo, vivir en este río en ese río Anchicayá. Ese río que nos vio nacer, ese río que nos vio crecer, ese río que nos ha dado todo. (Caicedo, 2023)

3.3 Presentación del caso:

Como lo documentan Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker y Kocian (2013) el río Anchicayá ha sido de vital importancia para la región, era un río de alta pureza, con variedad de fauna y flora, y era fuente de vida y subsistencia para sus habitantes, que desarrollaban sus actividades en el río de manera ancestral. Así lo expresan

El agua de Anchicayá era una de las prístinas de la región del Pacífico en el 2001, según reportan biólogos que han trabajado en el área y según los habitantes de esta región. La población bebía directamente del río y usaba el agua para cocinar todo tipo de consumo (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker, & Kocian, 2013, pág. 27).

A partir de los hechos que se desarrollarán en el siguiente apartado, sucedidos en 2001, estos autores señalan que el río Anchicayá fue contaminado y dañado, perdió su vitalidad. Así lo expresan: “Después del vertimiento de lodo acumulado en la represa, el agua cambió de color a un café amarillento y de mal olor (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker, & Kocian, 2013, pág. 27).”

En este orden de ideas, Caicedo (2023) retrata de manera clara, cómo era el río y lo que le sucedió luego del accionar de la EPSA, lo cual dañó todo lo que han preservado y conservado por generaciones, su entorno, su casa.

(...) el río tiene unos derechos y que nosotros los hombres y las mujeres de Anchicayá nos podemos convertir en sus propios guardianes (...), como salvaguardia de ese patrimonio histórico, porque yo digo una frase, lo único que nos quedó a nosotros después del proceso tan brutal de la esclavización fue el territorio hópito de Anchicayá, y que sabíamos que el río era un río fluvial, que tenía muchas corrientes, (...) remansos, recodos, hoy todo eso se ha muerto, y todo hace parte del hilo conductor de una cuenca, porque los ríos no se pueden represar, los ríos son un elemento vivo, vital, para la vida del ser humano (Caicedo, 2023).

3.3.1 Hechos y daños ambientales causados por la intervención.

El caso del presente estudio tiene lugar en la cuenca baja del río Anchicayá, lugar donde la empresa de energía EPSA generó daños medio ambientales que afectaron los derechos individuales y colectivos de las comunidades negras, propietarias del territorio (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar , Batker, & Kocian, 2013; Caicedo, 2023)

Estos autores enfatizan que el río ha sido históricamente su principal medio de subsistencia, como fuente de alimentación, de agua para el consumo personal, y lugar donde desarrollan sus actividades culturales y espirituales. Precisamente, esta fuente de vida recibió la carga negativa medioambiental que ha significado graves repercusiones, las cuales se han sostenido en el tiempo debido a la respuesta tardía del Estado en su obligación constitucional de garante de derechos. Al respecto afirman

La región de Anchicayá en el pacífico Colombiano se caracteriza por una inmensa riqueza natural y cultural. En esta región, la comunidad negra constituye el grupo humano con mayor presencia. Esta comunidad vive íntimamente ligada a su medio ambiente por la naturaleza de sus actividades y estilo de vida. Ellos dependen de la salud de los ecosistemas a su alrededor para subsistir y para asegurar su futuro (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar , Batker, & Kocian, 2013, pág. 1).

En cuanto a los daños causados, el líder del proceso colectivo y de defensa del territorio, Silvano Caicedo Girón (Caicedo, 2023), con miras a la recuperación del río Anchicayá, narra en entrevista los daños causados al afluente de agua, reconociendo los atributos y riquezas que perdió tras el derrame de los sedimentos por parte de la represa.

Durante esta conversación, el señor Caicedo (2023) también denuncia la falta de respuesta por parte del Estado al momento de ejercer su rol como garante de derechos, la dilación del proceso y la invisibilización de sus reclamos, explicado, en sus palabras, por el racismo estructural, y de manera más específica, el racismo ambiental.

Con esta apertura de la presa en una forma tan brutal, toda la morfología del río Anchicayá cambió, tanto del río como de la zona costera que es en los esteros, (...) el río ya no ruge, el río ya no habla, el río ya no llora, el río ya no canta, a la larga es como un río muerto, un río que era tan vigoroso, hoy está casi moribundo, por la indolencia de la compañía y por la indolencia también del Estado, que había podido fallar tan rápidamente, eficazmente en derecho, pero es hace parte del compendio del racismo que existe en ese país. Porque nos hemos hecho varias preguntas, si esto que ocurrió en el río Anchicayá hubiera ocurrido en una comunidad de (...) mestizos (...), hubiese sido mejor la respuesta del Estado Nación, pero como esto ocurrió en una comunidad negra y además campesina entonces la respuesta del Estado racista, clasista, ha sido indiferente, ha sido cargada de racismo soterrado, porque aquí, déjeme decirle que hay un racismo ambiental, que ha ocurrido contra los pobladores, contra la gente indefensa del río Anchicayá (Caicedo, 2023).

Los hechos son documentados además, en diversas fuentes, donde se expone dónde y cuándo sucedieron, cuál fue la empresa responsable y los daños que causó al medio ambiente¹¹. Según el estudio de Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker y Kocian (2013) los daños se han sostenido en el tiempo sin una respuesta institucional garante de derechos. Al respecto afirman estos autores.

El 21 de julio del año 2001, la EPSA hizo una descarga ilegal de lodos de una de sus represas sobre el río Anchicayá. Según estimados de la EPSA, la descarga fue de aproximadamente 500.000 metros cúbicos de lodo. Este derrame de lodos ocasionado por la apertura de las compuertas de la represa de la EPSA en el Anchicayá causó una serie de perjuicios materiales e inmateriales a lo largo de aproximadamente 60 km a ambos lados del río afectando 15 comunidades y aproximadamente 3.087 habitantes. Este derrame no solo afectó a la comunidad en el momento del derrame inicial, si no que ha venido afectando a la comunidad desde ese entonces (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar , Batker, & Kocian, 2013, pág. 1).

Silvano Caicedo (2023), líder de la comunidad, expresa lo que ha sucedido en el río a partir de los daños causados inicialmente, y reafirma cómo aún continúan las

¹¹ Al respecto, véanse entre otros Defensoría del Pueblo (2005); Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker y Kocian (2013) y Murillo (2019)

afectaciones, porque las sustancias arrojadas al río no han sido extraídas. Al respecto expresa

Porque el río se ha sedimentado y nadie se ha encargado de sacarle ese sedimento, ese poco de piedra que le ha caído, además (...) es bueno que la gente lo sepa, la mitad del sedimento, de ese lodo putrefacto, podrido, que fue arrojado el 21 de julio de 2001 a la cuenca de Anchicayá todavía está en la Presa, porque el río está atrapado (Caicedo, 2023).

En el informe de Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker y Kocian (2013), coincidiendo con el de la Defensoría del Pueblo (2005) se exponen los daños identificados en términos ambientales, económicos y socioculturales. Así lo expresa dicho informe

Para hacer la valoración de los perjuicios materiales se tuvo en cuenta el lucro cesante como consecuencia del daño causado por el derrame de lodos de la represa. (...) Aunque los impactos afectaron muchas actividades y ecosistemas, solo los más importantes y cuantificables fueron incluidos en esta sección. Estos incluyen los sectores de la pesca, la agricultura, el transporte fluvial, el acceso a agua potable, y las pérdidas de tierra al borde del río (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker, & Kocian, 2013, pág. 1).

En esta línea, Caicedo (2023) señala diversos tipos de afectaciones, tanto a nivel ecológico o ambiental, como en el ámbito físico y moral.

Así, el líder Silvano Caicedo (2023) enuncia que los daños causados a los medios de subsistencia de las comunidades del río Anchicayá se ven reflejados en cómo el río, que tradicionalmente era fuente para diversas especies y constituía un elemento base para las actividades agrícolas, al haber sido envenenado, deja de cumplir su función de dador de vida.

De esta manera, este líder de las comunidades negras del Río Anchicayá, menciona daños colectivos, tales como:

Hoy, los veranos y los inviernos son iguales porque ya no se consigue ninguna calidad de pez en el río, (...) porque ya el área del Anchicayá ya es invivible para ellos, (...) como ese río está putrefacto, lo que baja es veneno. Además, con esa

contaminación acabaron con la agricultura y acabaron también con nuestras plantas medicinales. Con todas las legumbres que las mujeres siembran, (...) Todas esas también murieron, con la peste que bajó de la avalancha. Ahora cuando baja ese barro, ese barro ese barro que viene del invierno queda con 3 capas, que no sale, tiene que echarle agua bastante para sacarlo, entonces es un barro podrido, un barro putrefacto. Todas las quebradas se han ido secando. Como sea que es un río que está en cuidados intensivos. (Caicedo, 2023)

Caicedo (2023), a manera de daños a la salud y la vida que afectaron a personas en particular, pero al ser parte de la comunidad les afectaron como un todo, recuerda casos puntuales de enfermedades y muertes causadas por la contaminación del río.

(...) este daño que se le ha hecho a la comunidad negra del río de Anchicaya... Y ante estas afectaciones hubieron (sic) víctimas, desafortunadamente sus dueños de los muertos y las muertas se retrataron y lo que les dio miedo en este profundicio y no quisieron entregar la boleta de defunción ¿no? Porque hubo gente que tomó agua del río sin saber qué es lo que estaba pasando y murió. (Caicedo, 2023)

Adicionalmente, el líder Caicedo refiere enfermedades generalizadas, provenientes del consumo del agua del río, debido a que es su única fuente de agua.

Eso, aún de haber pasado más de 22 años, mucha gente nos tiramos al río y todavía salimos con rasquiña. (...) Sale con rasquiña, hay manchas, hay mucha gente con enfermedades, con problemas en el estómago. (Caicedo, 2023)

A este punto, Caicedo (2023) realiza una aproximación a la interseccionalidad, referida en el primer capítulo de la presente tesis, cuando expone las problemáticas y daños particulares que afectan a las mujeres negras del río Anchicayá, así, hace énfasis en que al estar atravesadas por varios sistemas de opresión, sus historias son aún más invisibilizadas que el caso en general.

Pues lo que yo quiero comentar es también como la forma de las mujeres (...) Y usted sabe que la mujer, como, como es la persona que queda en la que cuidado de la casa, es la encargada del agua, porque como no hay acueducto, todo el tiempo en que están bajando al río a recoger el agua o yéndose a las quebradas, en el río también tenemos hogares infantiles de madres comunitarias. Entonces todo eso

queda en la impunidad, porque como tú misma lo dices eso no se registra, eso no se sabe. Y además que son mujeres negras y campesinas. (...) las señoras de la parte nuestra, de la parte baja, (...) ellas viven de pianguar (...) porque ellas viven en un en un barrial cuando tienen que ir a trabajar esa piangua en el barrial y entonces en sus partes íntimas de ellas (...) sufre. (Caicedo, 2023)

En esta lógica del análisis diferenciado de los daños y afectaciones de quienes habitan los Consejos Comunitarios que han recibido los efectos negativos de esta decisión de la EPSA, Caicedo resalta los daños que han sufrido los niños y las niñas del Anchicayá, y lo relaciona con el rol de cuidado de las mujeres en el territorio y en las familias.

Los niños y las niñas, (...) un niño y una niña donde no hay parque, ellos se van a las playas, al paso, (...) y es una habilidad para ellos porque ellos aprenden es solos, en el campo se aprende viendo. Entonces la mamá tiene que estar llamada a ese cuidado de que el niño no se meta al río o la niña, porque ya no está, el río ya no está como antes, pero el niño te no te va a entender eso. Entonces eso les produce también a ellos muchas enfermedades como la diarrea, como la gripa, bronquitis (...). (Caicedo, 2023)

Estas niñas y niños, son, como lo presenta Caicedo, son las y los renacientes que tienen en sus manos la conservación del río, que ancestralmente han cuidado.

Ya hemos pedido que los niños y las niñas sean guardianes de ese territorio y que detrás de los niños y las niñas, vamos nosotros, los adultos. Como en esa salvaguardia del patrimonio histórico (...) (Caicedo, 2023)

Respecto de los daños morales, si bien, Caicedo (2023) resalta que los daños sufridos por el río han causado afectaciones de tipo moral en todas las comunidades, posiciona las afectaciones negativas en el caso de las personas mayores, de los cuales, según lo menciona Caicedo, muchos y muchas fallecieron sin ver reparados los daños.

(...) Cuando el río cambia de morfología, nosotros también sufrimos (...) Un elemento aquí que es de sufrimiento, ¿no?, de nostalgia, muchos se fueron con ellos, los ancianos y las ancianas. (...) y lloraban lágrimas de sangre, (...). Y cada

vez que iban a los talleres, ellos de lamentaban, lloraban, rezaban, cantaban, porque no entendían (...) Entonces ellos se preguntaban y decían ellos, qué esa gente nos quería sacar al río. Porque no entendían por qué habían tomado la decisión de hacer eso porque en los años que ellos tenían, nunca eso había ocurrido eso. ¿Y por qué hacían eso? Cuando todo lo que ellos producían ya en el mismo sitio donde lo habían sembrado todos los tiempos y ya no se daba más, (...)

Esto se empata con los hallazgos del informe realizado por Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker y Kocian (2013). Allí advierten que estilo de vida de las comunidades ha girado históricamente en torno al río Anchicayá, este ha sido fuente de su autonomía y del relacionamiento entre sus pobladores. Todos los aspectos económicos, culturales, ancestrales, espirituales tienen su base en el río.

Además de los daños económicos que afectaron a los habitantes de la región, también hubo un serio perjuicio inmaterial. La comunidad negra del río Anchicayá ocupa su territorio ancestral y los habitantes de esta zona han trabajado fuertemente para mantener su cultura y sus costumbres. Con el pasar del tiempo los habitantes de esta zona han desarrollado culturas, economías y modos de vida completamente dependientes y vinculados al río. La existencia e integridad del río es parte de la identidad de estas comunidades (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker, & Kocian, 2013, pág. 1).

En este sentido, el accionar de la empresa, más allá de afectar la economía de las comunidades, causó daños dirigidos a afectar profundamente sus derechos étnico territoriales, adquiridos tras luchas y procesos de reivindicación que vienen gestando sus ancestros y han sido sostenidas por las y los renacientes (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker, & Kocian, 2013; Caicedo, 2023).

La capacidad que han tenido las comunidades de proveerse a sí mismas de los medios de subsistencia, ha sido gravemente afectada y mermada a partir del sedimento del río, así mismo las formas de vida en comunidad. Al respecto sostiene el informe de Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker y Kocian

El derrame de los lodos de la represa de la EPSA en el río Anchicayá causó un grave perjuicio moral y causó la vulneración de los habitantes de la comunidad. (...) Su autonomía y autosuficiencia también han sido gravemente afectadas con la pérdida

de producción local de sus alimentos y otros bienes que no solo les daban independencia económica sino que hacían el tejido social de estas comunidades (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker, & Kocian, 2013, pág. 1).

Así mismo, Caicedo (2023) posiciona un fenómeno importante, que sucedió en Anchicayá, y es la necesidad de abandonar las tierras ancestralmente habitadas por las comunidades debido a los daños medioambientales a los que han sido sometidos, y a la falta de respuesta estatal para su reparación.

Allá tenemos un pueblo que se llama Llano Alto, (...) ese pueblo tuvo que trasladarse a otro sitio, una parte alta, porque hace años vivían ahí, vivió (sic) muchas generaciones, (...) porque todo se acabó, todo se lo llevó el río. Hubo un desplazamiento ambiental, que eso es lo que poco se conoce, que el ambiente también desplaza a la gente. (Caicedo, 2023)

Por su parte, Briceño, Flores, Aguilar, Batker y Kocian (2013) resaltan al respecto que si bien, los profundos daños medioambientales que ha padecido Anchicayá fueron causados por la apertura de las compuertas y la sedimentación del río, el hecho de que exista una represa en este, causa daños por su actividad cotidiana, es decir, partimentar el río para construir la represa, y el uso de maquinarias y químicos, afectan su flujo natural y dañan el ecosistema. Así lo expresan

En general, la presencia de una represa hidroeléctrica crea una serie de impactos ambientales alrededor de su localidad por varias razones. Los impactos más comunes se dan por la fragmentación de ecosistemas que se da al crear una barrera artificial en un sistema que depende de flujo de agua, nutrientes y corrientes en el río. Como consecuencia, se puede incrementar el riesgo de erosión acuática, alterar procesos que mantienen hábitats y biodiversidad, y cambiar la composición físico-química del río. Además el uso de maquinaria y las construcciones que acompañan estos proyectos también generan una serie de impactos donde contaminantes como hidrocarburos y metales pesados pueden ser liberados (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar, Batker, & Kocian, 2013, pág. 10).

Así que, continúan estos autores, sumado a las afectaciones que ya genera la existencia de una represa en un río, en este caso en particular, se llevó a cabo una acción de manera abrupta, en un día, de una gran cantidad de lodo, cargado de

químicos y malos olores, que arrasó con la vida del río. Enfatizan que no hay evidencia de que existió un plan de acción, sino que se tomó una decisión apresurada e inconsulta. Así lo expresan

En el caso de la represa del Bajo Anchicayá, se presenció un impacto más significativo y de gran escala que resultó en el colapso casi completo del frágil ecosistema ribereño de esta área. La descarga de aproximadamente 500.000 metros cúbicos de sedimento contaminado por hidrocarburos y metales pesados, hecha repentinamente y sin planeación ni estudio ambiental, generó grandes cambios en la ecología del río (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar , Batker, & Kocian, 2013, pág. 10).

Y agregan que, a pesar de haber transcurrido varios años, a la fecha del estudio siguen vigentes las afectaciones causadas en 2001. Así lo expresan:

Los habitantes locales reportan que a pesar de que el impacto sucedió el 21 de julio de 2001, el ecosistema no ha recuperado su capacidad de producción ecosistémica (Briceño, Flores, Toledo, Aguilar , Batker, & Kocian, 2013, pág. 10).

Todo ello coincide con lo que desde el 2005 la Defensoría del Pueblo (2005) advertía sobre las injusticias que se hacen evidentes en este caso, entre otras, la falta de reciprocidad para con las comunidades, que a partir de sus costumbres y tradición se encargan de salvaguardar los recursos naturales y han establecido un relacionamiento armonioso con el río y su ecosistema, y, adicional a ello, los mandatos legales les recuerdan esta obligación. Expresa esta entidad que

(...) resulta paradójico que mientras se exige a las comunidades negras cumplir con la función ecológica de la propiedad, es decir, utilizar prácticas compatibles con la fragilidad del ecosistema, la empresa generadora de energía ocasionó un impacto negativo, no solo en materia ambiental, sino también en lo referente a la integridad e identidad de las comunidades (Defensoría del Pueblo, 2005, pág. 16).

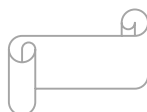
3.3.2 Línea de tiempo respecto del litigio del caso y la respuesta estatal.

Desde el año 2002, ante las afectaciones provocadas por el vertimiento de sedimentos en el Río Anchicayá por parte de la EPSA, las comunidades afectadas han librado una batalla jurídica buscando reparación de los perjuicios causados, así como protección del río, sus ecosistemas y territorios. Los estrados judiciales han sido otro escenario de su lucha histórica por la reivindicación de sus derechos y la defensa del territorio, y hoy aún se representan una oportunidad importante en este respecto (Peñuela, 2022).

En este contexto, las comunidades se encuentran en desventaja al momento de iniciar y sostener un proceso jurídico, como lo sostiene Caicedo,

Los anchicagueños y anchicagueñas además de tener el problema, no tenemos los recursos, los músculos financieros pa' defendernos de semejante emporio. (Caicedo, 2023)

Aún así, después de dos décadas de intensos debates judiciales sin que se materialicen medidas concretas de reparación y protección territorial, en el año 2023 la Corte Constitucional profiere una decisión judicial que atiende a las demandas de las comunidades del Río Anchicayá (Bonilla, 2023). A la par, hoy en día cursan acciones ante este alto tribunal en las que se busca la declaratoria del Río Anchicayá como sujeto de derechos (Torres, 2023). Desde una perspectiva sociojurídica, la movilización política y legal que han desplegado las comunidades, además de lograr reivindicaciones en escenarios judiciales, ha posicionado en el debate público la necesidad de tramitar los conflictos socioambientales en perspectiva de protección de derechos humanos (Murillo, 2019). A continuación se hará una breve referencia de dichos procesos judiciales.



3.3.2.1 Procesos ante la jurisdicción contencioso-administrativa

Ante las afectaciones provocadas por el vertimiento de sedimentos en el río Anchicayá por parte de la EPSA (hoy Celsia), en octubre del año 2002, mediante apoderado judicial, las comunidades de los Consejos Comunitarios Mayor del Río Anchicayá, Taparal-Humane, Guamia, Punta Soldado y Bracito-Amazona interpusieron acción de grupo contra la EPSA, la Corporación Regional del Valle del Cauca y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Con esta acción se buscaba la reparación de los perjuicios ocasionados. Sobre esta acción tuvo conocimiento y posterior decisión de primera instancia el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura (Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, 2009).

Durante el trámite procesal, la práctica de pruebas fue un asunto de debate judicial que perduró durante casi dos décadas. Desde el inicio del proceso, el apoderado judicial de las comunidades del río Anchicayá impulsó la incorporación de una prueba anticipada consistente en un dictamen pericial que en principio sería válida en un trámite de acción popular, pero que resultaba crucial en el curso de la acción de grupo. Este primer ejercicio probatorio permitió un acercamiento a la identificación del daño generado (Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, 2009).

La EPSA rebatió la solicitud, práctica e incorporación de ese dictamen pericial, aduciendo que no cumplía con las regulaciones probatorias sobre las pruebas anticipadas, que se desconocía su derecho al debido proceso en cuanto no se había habilitado espacio de contradicción, y que además carecía de fundamento técnico. Esta solicitud probatoria terminó siendo resuelta por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el año 2005, la cual ordenó a la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca y a la UMATA de Buenaventura la práctica de dictámenes e informes sobre perjuicios en materia agrícola y pesquera, y la práctica de un dictamen pericial centrado en la cuantificación monetaria de los daños. En el año

2007 se practicaron esas pruebas, y fueron tenidas en cuenta para la decisión de la acción de grupo (Corte Constitucional de Colombia, 2015a).

En el año 2009, después de la evaluación del material probatorio, en el curso de la acción de grupo en primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura declaró patrimonialmente a la EPSA; le ordenó junto a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca el pago de una indemnización de ciento sesenta y nueve mil millones de pesos a las comunidades del Río Anchicayá; y ordenó a la EPSA la presentación de excusas públicas. En esta decisión desestimó los reparos que presentó la EPSA en materia probatoria (Corte Constitucional de Colombia, 2015a; Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, 2009).

Esta decisión fue impugnada por la EPSA, y pasó a ser resuelta en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Mediante Sentencia del 7 de septiembre de 2009, el Tribunal confirmó el sentido de la decisión de primera instancia, reduciendo la indemnización de acuerdo a sus valoraciones monetarias a un monto de ciento sesenta y seis mil millones de pesos, y desestimando parcialmente los reparos elevados por la EPSA en la práctica probatoria. En efecto, el Tribunal señaló que la prueba anticipada rebatida por la EPSA no había sido practicada ni incorporada de acuerdo a la regulación vigente. No obstante, frente a las pruebas ordenadas en el 2005 y practicadas en el 2007, el Tribunal señaló que eran válidas e importantes en el sentido de la decisión (Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, 2009).

Frente a esta decisión del Tribunal, la EPSA interpuso acción de tutela aduciendo que el fallo representaba una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la justicia. Fue de esta forma que un caso que estaba llamado a ser resuelto en la jurisdicción contencioso administrativo en el marco de una acción de grupo, termina siendo objeto de debate judicial primero ante el Consejo de Estado, y luego ante la Corte Constitucional (Corte Constitucional de Colombia, 2015a). A la par, desde el año 2005 y por estos hechos, se ha abierto un incidente

sancionatorio ante el Ministerio del Medio Ambiente en el cual ha intervenido la Defensoría del Pueblo (2005).

Ante esta situación, las comunidades desde 2005 han elevado peticiones al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que su caso sea estudiado, y se siente un precedente en materia de protección de los derechos étnico-territoriales ante esta instancia. En el año 2018, este órgano decidió abrir el caso y desde entonces se está a la espera de una decisión sobre la admisibilidad en el marco de las regulaciones de dicho sistema (Ospina, 2022).

3.3.2.2 Procesos ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional

En el año 2010 la EPSA solicitó ante el Consejo de Estado la revisión del fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ante la desestimación de sus reparos probatorios en sede de instancia, y como se mencionó anteriormente, interpuso acción de tutela contra dicho fallo del Tribunal por considerarlo violatorio del debido proceso y el acceso a la justicia (Corte Constitucional de Colombia, 2015a).

El 20 de mayo del año 2010 la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió la acción de tutela interpuesta contra el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En esta decisión, el Consejo de Estado denegó el amparo solicitado argumentando que no se había agotado el requisito de subsidiariedad en la medida en que se había solicitado la revisión del fallo ante el Consejo de Estado y que por ende existían mecanismos judiciales ordinarios idóneos (Consejo de Estado, Sección Cuarta, citado por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 2021; Corte Constitucional de Colombia, 2015^a).

El 9 de diciembre de 2010, con una argumentación similar, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió confirmar el fallo de la Sección Cuarta (Consejo de Estado, Sección Quinta, citado por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 2021; Corte Constitucional de Colombia, 2015^a).

El 25 de febrero de 2011, la Sala Segunda de Selección Segunda de la Corte Constitucional seleccionó para revisión la acción de tutela resuelta por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado. En el año 2012, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-274 después de revisar los fallos de las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, resolvió conceder el amparo solicitado por la EPSA, dejando sin efectos las decisiones de instancia y reabriendo un trámite probatorio para decidir sobre el fondo del asunto. En su argumentación, la Corte, dando la razón a la EPSA, consideró que la prueba anticipada rebatida era irregular, y que por ende todo ese trámite tendría que repetirse para garantizar el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia (Corte Constitucional de Colombia, 2012).

Poco tiempo después, las comunidades Negras del Río Anchicayá, mediante apoderado judicial radicaron solicitud de nulidad de la Sentencia T-274 de 2012, argumentando que dicho fallo desconocía el precedente constitucional en materia de tutela contra providencias judiciales, y asuntos de relevancia constitucional (Corte Constitucional de Colombia, 2015a).

La Corte Constitucional decidió esta solicitud mediante Auto 132 de 2015. Allí resolvió anular la Sentencia T-274 de 2012 argumentando lo siguiente: se desconoce el precedente en la medida en que la revisión ante el Consejo de Estado era un mecanismo idóneo; y se vulneró el derecho al debido proceso de las comunidades en Anchicayá en cuanto se anularon pruebas periciales ordenadas en el año 2007, que tenían valor probatorio y fueron recogidas legalmente. Frente a este último particular, la Corte sostuvo que anular estas pruebas y reabrir la etapa procesal probatoria privaría a las comunidades del acceso a la justicia y la verdad. Por tanto, la Corte decidió anular la Sentencia T-274 de 2012, confirmando los fallos de instancia de la Sección Cuarta y Quinta del Consejo de Estado (Corte Constitucional de Colombia, 2015b).

Ese mismo año, y en la misma cuerda de la anulación de la Sentencia T-274 de 2012, mediante Sentencia SU-686 de 2015 la Corte Constitucional ordenó además la anulación de la decisión que archivaba el proceso de la acción de grupo en

consecuencia de la Sentencia T-274, y la devolución del expediente a los jueces de instancia para la implementación efectiva del fallo de la acción de grupo mediante el cual se ordenaba la indemnización de las comunidades (Corte Constitucional de Colombia, 2015a; 2015b).

En junio del año 2021, después de varias decisiones de trámite, el Consejo de Estado resolvió el proceso de revisión que había en curso frente a las decisiones de instancia de la acción de grupo. En esta ocasión, se dio un pronunciamiento definitivo frente a la indemnización como tal, una vez se habían resuelto las solicitudes probatorias ante la Corte Constitucional (Universidad Externado de Colombia, 2021).

El Consejo de Estado declaró al Estado responsable por los daños ambientales y consecutivos causados al Río Anchicayá, el territorio y las comunidades, y ordenó a la EPSA, la Corporación Autónoma del Valle del Cauca y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pagar una indemnización de doscientos tres mil novecientos sesenta y un millones cuatrocientos cuarenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos por concepto de indemnización a los afectados (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 2021). Después de veinte años de litigio, esta decisión es histórica en materia de reconocimiento de derechos de las comunidades negras del río Anchicayá, y en la consolidación de un precedente judicial para casos que envuelven este tipo de conflictos socioambientales (Universidad Externado de Colombia, 2021).

El litigio librado por las comunidades del río Anchicayá se ha centrado no solo en la indemnización de los perjuicios causados por la EPSA, sino también en la formulación y seguimiento de políticas públicas centradas en la restauración y conservación del ecosistema, así como en la protección de los derechos étnico-territoriales de las comunidades. En este entendido, desde el año 2020 las comunidades solicitaron en estrados judiciales la adopción y seguimiento de un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del río Anchicayá; la obtención de información de parte de la empresa CELSIA (antes EPSA) sobre las condiciones de funcionamiento del embalse a fin de formular y ejecutar un Plan de

Manejo Integral; y la realización de las gestiones necesarias para consolidar un programa de fomento piscícola (Bonilla, 2023).

Todas estas peticiones fueron denegadas por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura en sentencia del 23 de septiembre de 2020 en primera instancia, y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 29 de octubre de 2020 en segunda instancia. Ante estas decisiones, las comunidades del río Anchicayá decidieron interponer acción de tutela alegando que los falladores habían desconocido sus derechos fundamentales al agua, el ambiente sano, el trabajo y la alimentación, y étnico-territoriales que les asisten como pueblo Negro (Bonilla, 2023).

El caso fue resuelto por la Corte Constitucional en el año 2023 mediante Sentencia SU-196 de 2023, decisión que a la fecha está en comunicado público de esa corporación. La Corte decidió revocar las decisiones de instancia que denegaban los derechos de las comunidades, y en su lugar, concedieron las peticiones de las comunidades del Río Anchicayá. Se destacan las siguientes órdenes emitidas a la empresa Celsia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Unidad Especial de Parques Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Corporación Autónoma del Valle del Cauca: obtención de información del estado del embalse para proceder con la formulación y ejecución de un Plan de Manejo Integral; implementación efectiva de un programa de fomento piscícola; y la adopción y seguimiento de un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) para el río Anchicayá, partiendo de procedimientos de diálogo y consulta previa en concordancia con los derechos étnico-territoriales (Corte Constitucional de Colombia, 2023).

A agosto de 2023, la empresa CELSIA (antigua EPSA) ha adelantado algunos pagos por motivo de indemnización (CELSIA Colombia, 2022). No obstante, y además de no brindar el dato exacto de del monto pagado al momento, ante la opinión pública exponen una narrativa que minimiza la dimensión de los daños causados al río, el territorio y sus comunidades. Además de ello, en el año 2022, en

línea de las declaraciones de Celsia, el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Colombia declaró que “desde el 2003 las condiciones del Río Anchicayá están restablecidas” (Eje 21, 2022). A todas luces, desde la institucionalidad se observa un lenguaje que miniaturiza no sólo las afectaciones causadas al Río, las comunidades y territorios, sino que invalidan a pesar de la evidencia, toda la narrativa y los conocimientos vivenciales de las comunidades negras desplegadas a lo largo de este viacrucis judicial.

Como se ve, han sido casi veinte años de una batalla jurídica en la que finalmente en los estrados judiciales se han reconocido los derechos de las comunidades negras del río Anchicayá. Hoy persiste la expectativa frente a la implementación efectiva de los fallos judiciales que protegen los derechos de las comunidades, y la declaratoria del río Anchicayá como sujeto de derechos (Bonilla, 2023).

El líder Silvano Caicedo expresa que a pesar de todo este viacrucis judicial, y que sobre todo, se han alcanzado decisiones judiciales importantes, aún las comunidades no ven materializada la justicia para su caso. Así lo expresa,

Podemos decir, 22 años de impunidad, porque aunque hay fallo, no ha llegado todavía la luz verde que es la indemnización que debe llegar a cada persona que fue afectada dentro de la colectividad del río Anchicayá (Caicedo, 2023).

Del mismo modo, si bien existen las decisiones recientes de la Corte Constitucional en torno a la realización de consultas previas sobre la construcción del Plan de Manejo Integral, y toda una serie de acciones centradas en la restauración socio-ecológica y cultural del río (Corte Constitucional de Colombia, 2023), salta a la luz, como lo manifiesta el líder Silvano Caicedo (2013) que la consulta se realiza sobre lo que hace más de 20 años se impuso. Señala al respecto.

Estamos en un marco de una consulta, no, pero estamos consulta en un marco, una consulta de una empresa que ya fue construida, que estamos en una consulta, como decía una vieja mi pueblo, un simulacro (...) basado en lo que ya está construido, en un primer que lo habíamos construido en un premio de una empresa que tiene ejecución que está trabajando. Y que nos ha perjudicado porque la mitad de esos sedimentos están ahí (Caicedo, 2023).

Así mismo, la comunidad, ante la incertidumbre de la ineficacia del Estado en la implementación de las decisiones judiciales, este líder señala que de una u otra manera la esperanza de justicia también está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así lo expresa

Aunque yo creo que esta vez ya no va a poder defenderse porque ya creo que ya este es el último fallo que viene, que se reafirma en beneficio de la comunidad nuestra.. Inclusive que hasta nos tocó recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Caicedo, 2023).

3.4 Racismo ambiental en Anchicayá a la luz de las fases de la política pública

Este apartado tiene como finalidad analizar el caso de racismo ambiental en Anchicayá a la luz de las etapas de las políticas públicas propuestas por Roth (2002), tomando en consideración los efectos en tres aspectos clave, el medio ambiente, los derechos humanos y el proceso participativo o democrático. Este último, teniendo en cuenta que se trata de comunidades negras, reconocidas y organizadas en Consejos Comunitarios, la participación se refiere al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.

En casos similares, como en el de la Boquilla, la Corte Constitucional de Colombia sostiene que, “(...) la consulta previa tiene como objeto ampliar la voz de las comunidades, para garantizar su participación efectiva en las decisiones que los afectan (Corte Constitucional de Colombia, 2014).”

En materia de formulación e implementación de políticas públicas, Roth (2002) considera que se deben habilitar espacios de amplia participación de la ciudadanía. No obstante, es frecuente encontrar que los Estados usualmente, no se actúa bajo estos parámetros sino a partir de preconcepciones, sesgos, contextos e intereses. En el

Roth (2002), respecto de las etapas de las políticas públicas, teniendo en consideración cómo funciona la toma de decisiones a partir de los diversos

contextos, procedencias, intereses y preconcepciones de quienes intervienen en el proceso de políticas públicas.

En este orden de ideas, siguiendo a Roth (2002), los planes de acción de los gobiernos y su traducción a políticas públicas, están mediados por las creencias, maneras de percibir el mundo, y los demás aspectos que pueden convertirse en sesgos.

3.4.1 La decisión

El primer paso abordado por André Noël Roth, es la formulación de políticas públicas, en el cual plantea “el problema de la decisión”. (Roth, 2002, pág. 73)

La actuación del Estado por medio de su aparato político administrativo implica obligatoriamente la elección de unas soluciones en vez de otras. Siempre existe una pluralidad de soluciones posibles para resolver o tratar un problema, tanto en términos de finalidades y de medios como de contenido. El gobierno fija prioridades, metas y objetivos a alcanzar, así como metodologías. (Roth, 2002)

Esto implica que, como lo expone Roth (2002), se presenta un problema ante el cual el gobierno debe tomar una decisión inicial, que es, frente a las diversas soluciones, cuál responde de manera más clara a las prioridades ya establecidas.

En este entendido, Roth (2002) plantea que si bien es el gobierno el encargado de definir las líneas a desarrollar, además de sus propias apuestas, debe lidiar con la intervención de un número considerable de actores tanto públicos como privados, con intereses sobre las decisiones que se tomen.

Cuando se dice que es el gobierno quien realiza esta tarea hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que formalmente es él quien toma las decisiones, en la realidad interviene en este proceso un número plural de actores. Estos actores (políticos, administrativos, sociales, económicos, científicos, morales, etc.) van a influir sobre el proceso de decisión a partir de sus intereses y recursos tanto materiales como ideológicos. (ROTH, 2002, P 73)

La realidad es que la toma de decisiones no es un ejercicio imparcial, sino que, de acuerdo con Roth (2002), está influenciada por las creencias y subjetividades de quien está a cargo, sumado a las diversas exigencias de una variedad de actores.

La decisión es el fruto de un largo y complejo proceso que poco tiene que ver con el esquema clásico de la decisión concebida como un acto lineal y basado en los postulados de libertad y racionalidad del decisor. (ROTH, 2002, P 73)

Lo ideal sería que, tal como lo propone Roth (2002), teniendo presente el aspecto a resolver, se estudien y planteen los sustentos técnicos, jurídicos y sociales, así como, los impactos que generaría la elección de opciones disponibles, para así contar con bases sólidas que expliquen por qué, entre tantas opciones, se escogió la que finalmente se va a implementar.

Idealmente durante esta etapa de formulación se establece un proceso de análisis del problema, de búsqueda de argumentos y de contra argumentos, de propuestas y de indagación acerca de las consecuencias posibles de tal cual o cual solución. (ROTH, 2002, P 74)

En este punto, lo expresa Roth (2002), se presenta una lucha de poderes, donde cada actor se vale de los instrumentos a su alcance para lograr que la opción escogida obedezca a sus intereses.

Por lo general la selección es el resultado de una actividad política en la cual los actores entran en conflicto, amenazan, buscan aliados, chantajea, negocian acuerdos, juegan con sus capacidades comunicativas, de propaganda, de movilización, de información, etc. (ROTH, 2002, P 74)

En la línea que sigue el autor, luego de las circunstancias expuestas, una entidad, en cabeza de una persona, es la encargada de tomar la decisión, “Al final, en un momento dado, cuando ha culminado un cierto procedimiento legal – las reglas del juego-, un actor específico (...) toma la decisión.” (Roth, 2002, pág. 75)

Este proceso, parece ser, a simple vista, el resultado de un estudio minucioso de factores basados en costos y beneficios para la comunidad en general, y sobre todo, para la población donde se llevará a cabo la política pública. No obstante, como lo

sostiene Roth (2002), la confluencia de intereses propios y de actores externos con poder de influencia determina el rumbo de la opción que es finalmente escogida.

Se entiende por actores los gremios empresariales, sectores políticos, medios de comunicación, y la comunidad en general. En este proceso, las comunidades directamente afectadas deberían tener una participación primordial pues son quienes conocen las consecuencias que estos proyectos tendrán en sus territorios y en su forma de vida.

Si bien, muchas veces las comunidades no participan, cuando lo hacen, su injerencia es mínima, no cuentan con los recursos económicos para competir con los sectores públicos y privados que tienen intereses en esos proyectos o políticas públicas.

Respecto de los pueblos étnico territoriales la situación se agrava, en tanto, debido a la exclusión y discriminación histórica, el acceso a escenarios de toma de decisiones en altas esferas es limitado, o nulo.

Roth (2002) sostiene que, en la toma de la decisión inicial, al estar influenciada por creencias y preconcepciones, también juegan un papel importante los prejuicios, las relaciones de poder y sistemas de opresión, que en el caso de estudio, nos concentraremos en el racismo estructural.

El racismo ambiental se hace evidente en este momento preliminar de la política pública, pues no se garantizó el proceso democrático, ni se tomaron en consideración los daños al medio ambiente, ni los derechos humanos, y en consecuencia, no se respetaron ni garantizaron los derechos étnico territoriales.

3.4.2 Planificación

Plantea Roth (2002) que, una vez se ha elegido la opción que, a consideración del agente tomador de decisiones es la mejor, se procede a la etapa de planeación y planificación de la política pública.

En este orden de ideas, Roth (2002) describe el principal derrotero de la planeación, el cual es, en otras palabras, planear para responder a los principales factores que afectan el proceso de desarrollo.

Entonces, las tareas centrales de la actividad de planificación consisten principalmente, primero, en reducir la incertidumbre del futuro a través del control de los principales factores del desarrollo, y segundo, en reducir la incoherencia entre las distintas políticas sectoriales y sus objetivos, muchas veces contradictorios, con el fin de armonizar el proceso de desarrollo. (Roth, 2002, pág. 80)

Para Roth (2002), es fundamental contar con sistemas de información eficientes que permitan tener precisión en los datos.

La reducción de la incertidumbre implica el conocimiento previo de la situación y por tal razón el esfuerzo de planificación necesita el desarrollo y perfeccionamiento de los instrumentos de recolección de datos e información. (Roth, 2002, pág. 80)

Roth (2002) plantea la necesidad de tener en cuenta indicadores en el proceso de planeación, ya que son instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades que realizan los entes públicos y privados, a todos los niveles.

La estadística social y económica y la contabilidad nacional son elementos esenciales para empezar a conocer la realidad de una manera más objetiva. La construcción de todo tipo de indicadores (sociales, económicos) se constituye en una tarea fundamental para las administraciones nacionales e internacionales con el fin de permitir el seguimiento de los avances del desarrollo a través del tiempo y del espacio. (Roth, 2002, pág. 80)

Finalmente, a pesar de la planeación y los estudios minuciosos que se puedan realizar, “(...) Establecer un plan necesariamente implica tomar decisiones que favorecen algunos intereses en detrimento de otros.” (Roth, 2002, pág. 84)

Según lo expone Roth (2002) el proceso de planeación implica entonces ejercicios de mapeo, así como un análisis social y económico para conocer las realidades sobre las que se planean las políticas. Vale la pena cuestionar cuál es la participación de las comunidades directamente afectadas por las políticas que están en proceso de planeación.

En el caso de estudio, de acuerdo con lo planteado por (Defensoría del Pueblo (2005) y Caicedo (2023), no hay evidencia de que se hayan tomado en consideración las voces ni los intereses de las comunidades negras que conforman los Consejos Comunitarios, ubicados en la cuenca del río Anchicayá. En este punto, no se realizó la consulta previa, libre e informada, vulnerando así un derecho fundamental de las comunidades, que tal como lo ordena la Corte Constitucional.

(...) la Consulta debe ser previa a la realización de la obra, proyecto o actividad. De tal modo, no resulta aceptable que los responsables de los proyectos, obras o actividades realicen la consulta durante la ejecución de los mismos, o con posterioridad a ellos. La razón de ser de ello es que el objetivo de la consulta es precisamente evitar al máximo causar afectaciones no deseadas a las comunidades. Ello supone que dentro de la consulta se deben adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias, adecuadas y suficientes para prevenir y minimizar los impactos negativos que tienen los proyectos.

Los resultados de la intervención, tal como lo expusieron Defensoría (2005) y Caicedo (2023), dejan entrever que los daños medioambientales no fueron un punto analizado durante la planeación, o no se les dio la importancia que requerían respecto de los efectos catastróficos que causaría el vertimiento de sedimentos en el río para la salud de las personas.

Durante la planeación, siguiendo lo planteado por Defensoría (2005) y Caicedo (2023) no se le dio relevancia al menoscabo que generaría este accionar en la vida cultural, social y económica, la vulneración de los derechos étnico-territoriales, ni la ruptura del tejido social.

De esta manera, interpretando palabras de Caicedo (2023) se incurre en una práctica racista al invisibilizar los pueblos, sus prácticas, sus intereses y necesidades, así como su rol de preservación del río y el medio ambiente en general. Se desconocen sus formas de vida y se menosprecian sus derechos.

Se constata que en esta etapa no se garantizó el derecho fundamental a la consulta previa, a través de entrevista con el líder Silvano Caicedo, quien afirma que:

Cuando la empresa de energía, igual que la CVC¹², porque la CVC es socia, por eso ella nunca ha hecho nada sobre este caso, ellas no le consultaron a nadie, no le consultaron a la comunidad negra del río Anchicayá, porque aquí hay una coincidencia (...) en el año 2000 la población de Anchicayá fue desplazada, porque en el año 2000 fue que empezaron a incursionar en forma brutal, el fenómeno del desplazamiento, del paramilitarismo. (...) no puede haber tanta coincidencia. Nos desplazan en el año 2000 y en el 2001 abren la presa.

Ahora bien, en el caso particular del caso del río Anchicayá, como lo menciona Caicedo (2023), el problema que se presentó para la empresa, fue que al percatarse de la acumulación de materiales tóxicos acumulados en la represa se enfrentó a varias opciones de posible decisión. Sin una consulta previa, libre e informada, con los Consejos Comunitarios de comunidades negras, dueñas del territorio, y encargadas de preservar el río, decidió abrir las compuertas y derramar el sedimento sobre el río Anchicayá, fuente de vida de las comunidades, causando así un daño medioambiental invaluable que se tradujo en afectaciones físicas, morales, y étnico territoriales. (Defensoría del Pueblo (2005); Caicedo (2023), entre otros)

Cuando la empresa de energía, igual que la CVC, porque la CVC es socia, por eso ella nunca han hecho nada sobre este caso. Ellas no le consultaron a nadie, no le consultaron a la comunidad negra del río Anchicayá. Porque aquí hay una coincidencia de que la empresa, la empresa está mencionada. En el año 2000, la población de la Anchicayá fue desplazada porque en el año 2000 mismo que empezaron a incursionar en forma brutal. El fenómeno del desplazamiento, del paramilitarismo. (...) en el 2000, año 2000 fuimos desplazados desde corregimiento 8 hasta el corregimiento 9. Y en el 2001 abren la presa. Entonces no puede haber tanta coincidencia como para después decir no tenemos con quién consultar, no tenemos a quien decirle porque allá no había nadie, la gente estaba corriendo, ¿no? (Caicedo, 2023)

¹² Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

3.4.3 Implementación

Luego de la elección de la decisión y la planeación de las acciones, se procede a la implementación de la política pública, etapa que permite materializar el plan, lo que implica que la lucha política continúe, de acuerdo con Roth (2002).

La implementación de la política es, parafraseando a Clausewitz, la continuación de la lucha política con otros medios y en escenarios diferentes. Menospreciar el proceso de implementación es olvidar que “la política de implementación es la determinante definitiva del resultado” de una decisión. (Roth, 2002, pág.107)

Plantea Roth que, además de las desigualdades y falta de garantías que pueden existir en tanto la participación de las comunidades, existen diferencias entre los planes y la ejecución real de las actividades.

Aparece lo que se llamó el implementation gap, es decir, la diferencia, la brecha que existe entre la decisión y la realidad de su aplicación; o, en otras palabras, la distancia –a veces abismal- que separa la teoría de la práctica. (Roth, 2002, pág.107)

En esta etapa, Roth (2002) reitera que los contextos, los antecedentes, opiniones, ideas preexistentes, e intereses, definen la manera de implementar las políticas públicas que ya han sido planificadas. En este sentido, la decisión de la puesta en funcionamiento de una política pública, tampoco obedece a métodos meramente imparciales.

Las políticas públicas están diseñadas, decididas e implementadas por hombres y mujeres que, a su vez, son afectados positiva o negativamente por ellas. Todas las instituciones involucradas en un proceso de política pública – o administración, parlamento, ejecutivo, gremios, etc.-, tienen características sociales y políticas e intereses que hacen de cada una de ellas un actor más del juego político-administrativo. De manera que la pretendida o anhelada neutralidad de una administración pública que actúa según “criterios técnicos, impersonales, de competencia y de legalidad”. (Roth, 2002, pág.108)

El autor introduce las perspectivas existentes al momento de la implementación de las políticas públicas, el primero se trabaja de manera descendente.

Top-down, trabajo administrativo que se desarrolla de arriba (top) hacia abajo (down) o del centro hacia la periferia. (...) este enfoque presupone que existe una clara separación, tanto conceptual como temporal, entre la formulación y la decisión de la política, de un lado, y, del otro, la implementación de las decisiones. (Roth, 2002, pág.109)

Por el contrario, el segundo enfoque que plantea Roth (2002) se construye desde las bases hacia quienes están en posición de tomar decisiones. Es decir, se toma en cuenta el contexto del lugar donde se requiere tomar acción, para lograr, a partir de acuerdos, implementar la política pública.

La segunda concepción toma la dirección opuesta y se llama bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. (...) Según esta segunda concepción se trata de partir de los comportamientos concretos en el nivel donde existe problema para construir la política pública poco a poco, con reglas, procedimientos y estructuras organizativas por medio de un proceso ascendente, o por retroceso, en vez de descendente. (Roth, 2002, pág. 109 – 110)

Ahora bien, respecto de la etapa de implementación, el criterio expuesto por Roth (2002), la empresa no siguió el modelo “Bottom-up”, pues no garantizó la participación de la comunidad al momento en que decidió ejecutar la apertura de las compuertas, con el fin de solucionar un problema que afectaría el proceso de generación de energía, sin realizar un análisis contextual, ni un estudio partiendo de los enfoques diferenciales. Según información expuesta por Caicedo (2023); Defensoría del Pueblo (2005)

La ejecución de la política pública, a este punto, materializó un daño medioambiental que recayó sobre las comunidades negras del río Anchicayá, y no tomó en cuenta las formas de vida, el relacionamiento de la población con el río y su nivel de interdependencia. Aseveran Caicedo (2023); Defensoría del Pueblo (2005).

La empresa no garantizó espacios democráticos con miras a brindar la información completa sobre las implicaciones de la ejecución, para así realizar la consulta previa, libre e informada, que permitiera la búsqueda de acuerdos con las comunidades. Caicedo (2023); Defensoría del Pueblo (2005)

Adicionalmente, planear e implementar una acción que genere altos costos y cargas medioambientales para una población que no recibe beneficios de la actividad que se realiza, que se encuentra en situación de exclusión histórica, y que ha sufrido ancestralmente del racismo estructural, son elementos explicativos de racismo ambiental.

(...) porque nosotros (...) no tenemos acueducto. No tenemos alternativa. (...). Tenemos como 10 años con energía, 2015¹³. Nosotros nos sentamos en la mesa, (...) y nosotros les pedimos a ellos que nos electrificaran (...) como un acuerdo social con la empresa. (Caicedo 2023)

La paradoja aquí es que, una empresa que se dedica a proveer energía al departamento del Valle del Cauca, departamento del que hace parte Anchicayá, y que funciona desde los años 50, utiliza y modifica el río con la instalación de la represa en la zona, y peor aún, agrava la situación con la decisión de abrir la compuertas, verter sedimento en el río, y aun así, las comunidades afectadas directamente por el accionar de la empresa no cuentan con el servicio de energía.

3.4.4 Evaluación

En este proceso de políticas públicas, Roth destaca la evaluación como último paso, y en esta etapa, se gestiona y sistematiza toda la información pertinente a la implementación de la política pública, con el fin de definir su nivel de éxito. (Roth, 2002, P. 125)

Roth (2002) pone en relación las formas de evaluar, una más concentrada en el nivel central, contraria a la evaluación más democrática, que permite la participación de varios actores al momento de determinar la eficacia de una política pública.

(...) Entre la evaluación de tipo gerencial utilizada como instrumento de gestión (...) y la evaluación interactiva, participativa, pluralista, concebida como una herramienta para la profundización del ideal democrático, existe algo más que matices. La evaluación debe ser participativa. (Roth, 2002, pág. 126)

¹³ Se refiere, de manera particular, al Consejo Mayor de Comunidades Negras del Río Anchicayá

Roth resalta el argumento de la democratización de esta etapa, pues, la evaluación, en tanto debe permitir la participación pluralista en términos de determinar la eficiencia del Estado, constituye un avance para la democracia. (Roth, 2002, P.135)

Para Roth, la evaluación es la manera de constatar que la decisión que se ejecuta tendrá efectos que se harán evidentes de inmediato, y otros que surgirán a través del tiempo. Así, “Un Estado responsable y democrático no puede tomar decisiones sin tener un mínimo de interés por las consecuencias que éstas conllevan más allá del corto plazo.” (Roth, 2002, pág.126)

En este sentido, se debe plantear las cuestiones encaminadas a tener claridades sobre “¿Cómo determinar si una política es o ha sido exitosa o no? ¿En qué medida se lograron los objetivos propuestos por una ley? Cuáles han sido sus consecuencias y sus costos?” (Roth, 2002, pág.135)

Como lo anuncia Roth, estos cuestionamientos son importantes para dar respuestas a los sectores de interés. “Tales preguntas son fundamentales para quien se interesa en conocer la actuación del Estado, en evaluar su grado de eficacia y eficiencia, y en conocer los efectos de su intervención, sus logros y fracasos.” (Roth, 2002, pág.135)

Roth (2002) plantea que la evaluación se debe realizar a partir de elementos que permitan objetivarla, para hacer evidentes los efectos de las acciones implementadas. Esto permite avanzar en un análisis sobre el proceso de planeación, implementación, y finalmente los resultados de las decisiones tomadas.

La evaluación, entendida como una práctica seria de argumentación basada en una información pertinente, permite precisamente opinar de manera más acertada, con menos subjetividad, acerca de los efectos de las acciones públicas. Su importancia es aún mayor cuando las instituciones y los gobiernos contemporáneos tienden a fundamentar su legitimidad no sólo en la legalidad de sus decisiones, sino en lo que hacen, es decir, en resultados. (Roth, 2002, P.135)

Roth (2002) recalca la importancia que los gobiernos tengan en cuenta los contextos, intereses y características propias de los sectores sociales relacionados

directamente con las acciones ejecutadas a través de la implementación de las políticas públicas, y en ese marco, generar los espacios necesarios para brindar información clara sobre sus actividades y así buscar legitimidad.

Los gobiernos deben tratar de comprender lo que pasa con los procesos sociales inducidos por la acción pública para fundamentar de manera lo más acertada posible las acciones futuras; (...) comunicar para explicar, con base en una información argumentada, y dialogar con sus públicos con el fin de conseguir el respaldo a sus acciones; y, por último, los gobiernos no pueden dejar de lado la responsabilidad de ejercer un control sobre las actividades que realizan. (Roth, 2002, P.142)

Roth (2002) sostiene que las evaluaciones se pueden realizar en varios momentos, dependiendo del tipo de decisión que se implemente, y de los objetivos que se desee cumplir. Así, las especifica de esta manera: una que se realiza antes de implementar la actividad para tener en cuenta las consecuencias que causaría. La evaluación que se realiza respecto de las consecuencias de carácter económico, dándole más valor que a los efectos que puede causar al medio ambiente. La otra opción es evaluar en la medida en que se ejecuta el proyecto, para tomar los correctivos necesarios. Y finalmente, la evaluación que se realiza una vez se ha implementado la política pública, la cual debe constar de instrumentos para medir los resultados, tales como encuestas. (Roth, 2002, págs. 143, 144, 145, 146, 149)

En todos los escenarios, Roth plantea que la manera de evaluar utiliza la metodología de costo-beneficio, con el fin de tomar decisiones de manera objetiva.

En estos casos, los métodos utilizados frecuentemente se derivan del cálculo económico y de la teoría del public choice como los conocidos análisis costos-ventajas, costos-beneficios, costos-eficacia o métodos multicriterios. Con estos métodos se pretende racionalizar el proceso de toma de decisión (...). (Roth, 2002, pág. 145)

Con este planteamiento, Roth (2002) se refiere a que los métodos utilizados pretenden la objetividad, en tanto su grado de tecnificación, pues quienes toman las decisiones deben priorizar entre opciones, dándoles más peso a unas que a otras.

Estas metodologías tienen a presentarse como una herramienta científica, basada en las ciencias naturales, con un alto grado de sofisticación técnica y de simplificación de la realidad a través de matrices. (...) no es, sin embargo, una garantía real de objetividad. En efecto, tanto antes como durante los procesos de evaluación, los múltiples momentos en los cuales los evaluadores deben jerarquizar preferencias, realizar arbitrajes entre criterios, resolver problemas de mensurabilidad, seleccionar indicadores y métodos, asignar ponderaciones a los indicadores, etc., reintroduce sin duda, elementos de subjetividad en los resultados de la evaluación. (Roth, 2002, pág. 146)

En este sentido, esta etapa final del proceso de las políticas pública no está exenta de las creencias y prejuicios que tienen los agentes encargados de la evaluación, “Los evaluadores difícilmente pueden actuar por fuera de sus valores, normas y preconcepciones propios de los solicitantes de la evaluación.” (Roth, 2002, pág.138).

Según lo plantean Caicedo (2023) y Defensoría del Pueblo (2005) El caso de racismo ambiental en el río Anchicayá nos muestra una política pública que no surtió la etapa de evaluación. No se dispusieron las herramientas técnicas necesarias para que analizaran los costos y beneficios del accionar.

Tampoco se generaron espacios que facilitaran conocer el entorno y las formas de habitar el territorio de las comunidades negras del río Anchicayá, para comprender las consecuencias de la apertura de las compuertas de la represa. (Caicedo (2023); Defensoría del Pueblo (2005))

Identificar los impactos de la política pública implicó un proceso de litigio e incidencia liderada por las comunidades afectadas ante las entidades estatales, y tal como se expuso anteriormente, requirió de un escenario judicial, que ha durado más de veinte años. (Caicedo (2023); Defensoría del Pueblo (2005))

Es una lucha por el reconocimiento de los derechos, reparación de daños medioambientales y morales, indemnización por pérdidas económicas, que no resultó de un proceso de interlocución entre la empresa, el Estado y las comunidades, sino de su necesidad de exigir justicia por las afectaciones. (Juzgado

Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura (2009), Consejo de Estado (2015, 2021) Corte Constitucional de Colombia (2012, 2015, 2023)

En esta línea, Caicedo (2023) llama la atención sobre la participación tardía de las comunidades en un proceso de consulta, la cual se está llevando a cabo, a partir del litigio estratégico y proceso jurídico que estas han asumido a raíz de los daños medioambientales causados por la empresa. Resalta que se está consultando sobre una empresa que está operando hace décadas, que tomó la decisión de abrir las compuertas de la represa sin consultar, y que el proceso actual no ofrece las garantías de participación.

(...) ahora que estamos en el famoso PMA que empezó como desde el 2011 pa acá, empezamos a dialogar con ese PMA. Estamos, supuestamente estamos en el marco de consulta. porque a partir de que se da la apertura, con el escándalo que hicimos después nos mandaron a llamar de la Universidad Javeriana, a través de Manuel Ramón Muñoz, que hoy es el instituto de Interculturalidad, ahí se empezó. Estamos en un marco de una consulta, no, pero estamos consulta en un marco, una consulta de una empresa que ya fue construida, que estamos en una consulta, como decía una vieja mi pueblo, un simulacro, basado en lo que ya está construido, en PMA de una empresa que está en ejecución que está trabajando. (...) Al principio me sonaba a mi muy bueno porque llegaban personajes de alto kilaje de la compañía, hoy solamente va la social y dos compañeros más del área como de medio ambiente que tienen ellos ahí. Pero entonces la respuesta es como para llevar la razón. Entonces eso se convirtió como unas reuniones vagas, a veces sin resultados, haciendo cositas ahí como pañitos de agua tibia en el marco de ese PMA. (Caicedo, 2023)

A este punto es pertinente citar a la Corte Constitucional, cuando establece que la Consulta Previa se debe realizar antes de implementar un proyecto, en los momentos iniciales, para así evitar consecuencias negativas en las comunidades donde se desarrollará el proyecto. Este derecho fundamental no está llamado a la compensación de daños y afectaciones, sino a democratizar la toma de decisiones sobre los territorios habitados por las comunidades étnico raciales.

En todo caso, este acuerdo debe estar dirigido a prevenir, en la mayor medida posible, los impactos no deseados por las comunidades. La adecuada protección de los derechos de las comunidades supone el deber correlativo de prevenir, en primera medida, y sólo excepcionalmente compensar aquellos impactos que no se puedan prevenir. De tal modo, la consulta no puede convertirse simplemente en un mecanismo de compensación e indemnización de daños ya causados, pues ello desnaturalizaría por completo el propósito de este derecho fundamental. (Corte Constitucional de Colombia, 2014)

3.5 El caso de racismo ambiental en el Río Anchicayá a la luz de la colonialidad del conocimiento

Es importante entender el caso del río Anchicayá, y el proceso judicial que han librado las comunidades por más de dos décadas, desde una perspectiva de colonialidad del conocimiento, que es una de las facetas del racismo, y en este escenario, se relaciona con el racismo ambiental.

Se entiende que el conocimiento es un mecanismo para alcanzar el poder, y es una herramienta que permite avanzar como sociedad. Sin embargo, ¿Qué se considera conocimiento? ¿Cuáles conocimientos son válidos? ¿Hasta dónde se puede acceder al conocimiento? ¿Quiénes imparten conocimiento? ¿A quiénes, y cómo les es impartido?

Tal como lo refiere Mignolo (2003), las disciplinas del conocimiento, han sido establecidas de manera hegemónica, considerando como preciso, imparcial, objetivo, solamente lo producido desde los lugares de enunciación de quienes tienen el poder.

“Cuando un hijo de la moderna civilización europea se dispone a investigar un problema cualquiera de la historia universal, es inevitable y lógico que se lo plantee desde el siguiente punto de vista: (...) Sólo en Occidente hay ciencia en aquella fase de su evolución que reconocemos como válida actualmente. (...) (Weber, (1904) 1985).” (Mignolo, 2003, pág. 62)

En esta misma línea, siguiendo a Césaire (1972), la supuesta superioridad racial permite que, desde las relaciones de poder, la supremacía asuma al otro como su laboratorio.

Gobineau dijo: “La única historia es blanca.” M. Caillois, a su vez, observa: “La única etnografía es blanca.” Es Occidente quien estudia la etnografía de los otros, no los otros quienes estudian la etnografía de Occidente. (Césaire, 1972, pág. 20 traducción propia)

En esta línea, Césaire (1972) sostiene que el colonialismo ha heredado una base social que ha impedido la narración de una historia donde se reconozcan los aportes y las cualidades de las personas y comunidades negras, y en este mismo sentido, ha invisibilizado sus formas de vida, de organización política y propuestas de desarrollo.

De los historiadores o de los novelistas de la civilización (es lo mismo), no de tal o cual, de todos o casi, su falsa objetividad, su chovinismo, su racismo solapado, su viciosa pasión por denegar todo mérito a las razas no blancas, particularmente a las razas con melanina, su monomanía para monopolizar toda gloria en provecho propio. (Césaire, 1972, pág. 27, traducción propia)

Para que un conocimiento sea considerado válido, se debe probar sobre bases científicas, que son avaladas por conocimientos creados a partir de parámetros preestablecidos por un sector de la sociedad que se ha especializado en determinados aspectos, y puede validar. “(...) los logros intelectuales precisan de condiciones materiales, y las condiciones materiales satisfactorias están relacionadas con la colonialidad del poder.” (Mignolo, 2003, pág. 64) De ahí que, los conocimientos o saberes otros, no sean considerados relevantes ni definitivos, si no, en el mejor de los casos, anecdóticos.

Mudimbe señala la incomodidad que experimentó cuando tuvo que revisar la historia de la filosofía como un tipo de práctica disciplinada impuesta por el colonialismo y, al mismo tiempo, abordar otras formas no disciplinadas de conocimiento que quedaban reducidas a conocimiento subalterno por parte de las prácticas coloniales de conocimiento disciplinado llamadas filosofía y relacionadas con la epistemología. El “sistema tradicional africano de conocimiento” se oponía a la “filosofía” del mismo

modo que lo tradicional se oponía a lo moderno: en otras palabras, la filosofía se convirtió en una herramienta para convertir en subalternas formas de conocimiento que traspasaban sus fronteras disciplinares. (Césaire, 1972, pág. 64, traducción propia)

Es entonces pertinente introducir un concepto que explica este relacionamiento de la colonialidad con los conocimientos otros. Este término La gnoseología fronteriza, se refiere a fundamentos del conocimiento desde una posición centro – periferia.

“La gnoseología fronteriza es una reflexión crítica sobre la producción del conocimiento tanto desde el interior de las fronteras del sistema-mundo moderno/colonial (conflictos imperiales, lenguajes hegemónicos, direccionalidad de las traducciones, etc.) como desde sus fronteras exteriores (conflictos imperiales con las culturas colonizadas, así como las fases subsiguientes de independencia y descolonización). (Mignolo, 2003, pág. 70)

En este punto es clave tener presente el rol de la historia en las construcciones sociales, y la importancia de tener acceso a varias miradas de la misma. La colonialidad ha atravesado todas las esferas del conocimiento, y la historia no ha sido ajena.

Hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la vara de medir pasó a ser la historia, desplazando a la escritura. (...) Los pueblos con historia podían escribir la historia de aquellos que carecían de ella. (Mignolo, 2003, pág. 61)

Es decir, según Mignolo (2003), quienes ostentaban el poder eran quienes tenían una historia que contar, considerando, además, que tenían la potestad de compartir la historia de quienes, a su parecer, no tenían una.

Por su parte, Chimamanda Ngozi Adichie aborda esta problemática en el libro *El peligro de la única historia*. Chimamanda asevera que

Es imposible hablar de relato único sin hablar de poder. (...) la manera en que se cuentan, quién las cuenta, cuándo las cuenta, cuántas se cuentan... todo ello en realidad depende del poder. Poder es la capacidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de dicha persona. (Adichie, 2018, págs. 18-19)

Desde esa posición de poder, se expresa ante el mundo una sola versión del otro y de sí mismo. El relato único crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Convierten un relato en el único relato. (Adichie, 2018, pág. 22)

Estas formas de narrar, de enseñar, de inculcar, instauran modelos homogenizantes que han logrado establecer unas formas de ser, hacer, pensar, entender el mundo y su funcionamiento, de categorizar lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptable y lo que no.

(...) qué hace que lo que no existe empiece a existir y en qué medida llega a hacerlo. El desarrollo, dicen unos. (...) así se ha contado la historia única de la modernización del mundo, que es la historia del progreso único y del pensamiento único, la historia de la colonización y la historia de la globalización, que no solo han impuesto unas determinadas maneras de producir y de consumir, sino también de sentirnos libres, cultos, capaces de pensar y de ser. (Adichie, 2018, pág. 36)

No reconocer la existencia de un grupo social, su historia, sus aportes, y destinarlos a ser definidos desde afuera, con base en imaginarios, es una poderosa forma de ejercer exclusión y discriminación.

El imperio de la historia única, en cambio, parece no dejar nada fuera. No ser reconocidos por ella o no aceptar su reconocimiento nos condena a no existir. A no pertenecer. A no ser. Todas las exclusiones, las opresiones, los desprecios y los expulsiões se derivan de esta expulsión de la historia única. Pero también las herejías y las disidencias, la crítica y la creación de mundos insumisos. (Adichie, 2018, pág. 44)

Es fundamental el reconocimiento de las narrativas propias, de las concepciones construidas por los colectivos resaltando sus particularidades, su esencia; es decir, escuchar la voz de quienes viven sus experiencias, y construyen conocimiento desde su intelecto, su entorno, sus investigaciones y el conocimiento global que poseen.

Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar.

Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla.
(Adichie, 2018, pág. 28)

En el caso del río Anchicayá, los saberes propios de las comunidades negras que de manera ancestral habitan los territorios, fueron ignorados e invisibilizados, y en el mejor de los casos, desestimados. Defensoría (2005); Caicedo (2023)

Las comunidades se enfrentaron en este escenario, a una empresa con músculo financiero y recursos para llevar a cabo un proceso legal y defenderse de las acusaciones por los efectos nefastos que causó su accionar. Defensoría (2005); Caicedo (2023)

Además encuentran la barrera de un Estado que decide no cumplir con los deberes constitucionales y los que ha asumido a nivel internacional, de proteger a las comunidades pertenecientes a pueblos étnico-raciales, más aún a las que se encuentran habitando y preservando los territorios colectivos que les han sido adjudicados. Así su deber de prevenir y mitigar los daños medioambientales que se pueden causar por parte de empresas o del mismo Estado, y al momento en que sucedan, garantizar las medidas de reparación. (Defensoría (2005); Caicedo (2023)

La colonialidad del saber se manifiesta en este caso, en tanto la empresa presenta su defensa a partir de argumentos científicos, a los cuales, en algunas instancias, se les da más validez que, a los estudios realizados por organizaciones independientes, y se le quita validez a las versiones de los habitantes de la zona, que son quienes perciben los cambios que sufrió el río, las enfermedades causadas, los daños a su sistema económico, las afectaciones a su autonomía, entre otros. Lo anterior, entre otros aspectos, ha dilatado el proceso por más de 20 años. Caicedo (2023)

Las comunidades negras que ancestralmente han convivido con el río, y han desarrollado una labor de conservación del mismo, lo conocen, saben cuál ha sido su comportamiento a través del tiempo, tienen unos saberes construidos de generación en generación, y entienden que en tanto la armonía con el medio ambiente, el derramamiento de sedimentos cargados con químicos genera daños

profundos al río, y ante la no respuesta para su recuperación, se convierten en daños casi que irremediables. Defensoría (2005); Caicedo (2023).

3.6. Hacia una apuesta por el etnodesarrollo

Siguiendo a Bonfil (Bonfil, 1982) etnodesarrollo es una apuesta que surge desde las comunidades y pueblos con pertenencia étnico racial, que se plantea como una opción propia de desarrollar la vida en colectivo desde los territorios con base en las costumbres particulares, así lo resalta

(...) por etnodesarrollo se entiende el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones; (...). (Bonfil, 1982, pág. 133).

Como lo apunta Vargas (2016), esta propuesta de desarrollo desde los pueblos étnicos es una respuesta a los efectos negativos que el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico ha causado en sus comunidades y territorios (Vargas, 2016, pág 403)

A su vez, esta autora explica cómo el modelo de desarrollo capitalista ha afectado las comunidades, a través de la desestimación de los saberes propios, y el aprovechamiento de los recursos naturales que yacen en los territorios de estos pueblos.

Este último ha sido impulsado por intereses nacionales e internacionales de crecimiento económico y de mercado y se ha impuesto a través de mecanismos heredados de la colonización española. De esta forma ha ofrecido en su discurso grandes beneficios en el cambio y subvaloración de lo propio y en la práctica se ha sustentado en la enajenación de las riquezas culturales y naturales (Vargas, 2016 pág. 403 – 404).

En la misma línea, Vargas (2016) cita en su texto una descripción que recoge los objetivos del etnodesarrollo, en tanto opción para hacer contrapeso a un modelo apabullante, aceptado a nivel mundial, y privilegiado por los gobiernos locales

En un sentido similar, Ordóñez (Cifuentes, 1999) sostiene que

(...) la mayor tarea del etnodesarrollo consiste en alentar y alimentar el proceso de “historización” de los pueblos étnicos, haciéndolos conscientes de sus potencialidades mediante la decisión de controlar sus recursos culturales propios y apropiados.” (Ordóñez, 1999, pág. 128).

En esta línea, siguiendo a Bonfil (1982) es pertinente abordar la cultura propia como un aspecto fundamental al momento de analizar el etnodesarrollo como propuesta de modos propios de gestión de recursos y toma de decisiones en los territorios étnicos. Bonfil Batalla ofrece el concepto de “control cultural” como explicación del papel que ésta juega,

Vargas (2016) retoma este concepto y lo entiende como la oportunidad que han creado los pueblos para determinar las acciones a implementar en sus territorios, las cuales están encaminadas a mejorar su propio entorno.

Así mismo, los pueblos étnico raciales necesitan un espacio para ser y desarrollar sus vidas en lo colectivo, ese lugar es el territorio, que va más allá de lo físico, y constituye todo un escenario de relacionamiento con la naturaleza y la espiritualidad. “Tanto para los pueblos indígenas como para los negros el territorio es tangible e intangible, y sus interrelaciones son materiales y espirituales.” (Vargas, 2016, pág. 89).

Así mismo, en la voz de líderes y lideresas del pueblo negro, el territorio, en tanto espacio de recreación de su cultura y ancestralidad, constituye un derecho (2015). Al respecto puntualiza esta organización

El Territorio hace parte de nuestra historia y es el espacio en donde se encuentran la cultura y el conocimiento; lo que lo constituye en uno de los pilares de nuestro ordenamiento, reglamentación de uso, manejo, control para nuestra supervivencia (Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura y la Costa Pacífica-Proceso de Comunidades Negras PCN, 2015, pág. 20).

Pensarse el etnodesarrollo pasa por la concepción y epistemologías de la gente negra respecto del territorio y la naturaleza, requiere, como lo enuncia Escobar (2010), tener presente que,

“la cosmovisión de los grupos negros e indígenas (...), tienen en mente una manera de relacionarse con el mundo natural y de significarlo. Es entonces importante tener una idea sobre lo que son estos modelos locales, en aras de determinar las demandas sobre la diferencia ecológica y cultural y sobre el hecho de que esta diferencia debe configurar la conservación y los esfuerzos de desarrollo”. (Escobar, 2010, pág. 134).

En este entendido, y siguiendo a este autor, las decisiones de políticas públicas, sobre todo las encaminadas a llevar a cabo proyectos de desarrollo, no pueden pasar por alto el significado del territorio para las comunidades, y por ende deben considerar la relación que éstas han establecido con el espacio que habitan.

Ahora bien, como lo sugiere Coronado (Coronado, 2012) en Colombia se le otorgó carácter legal al etnodesarrollo y los derechos étnico territoriales a partir de la promulgación de la Ley 70 en 1993,

(...) la consagración normativa del derecho al territorio permitió el reconocimiento de sus principales contenidos: propiedad colectiva, autonomía, gobierno propio, administración de los recursos naturales, entre otros; de sus características más importantes: inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad y de las obligaciones del Estado frente a su realización, respeto y protección (Coronado, 2012, pág. 160).

No obstante, siguiendo a (Betancur, 2012), esta legislación no se ha materializado. Al día de hoy, no existen las garantías de goce efectivo de los derechos territoriales para los pueblos negros “(...) en la Cuenca del Pacífico la propiedad colectiva en cabeza de las comunidades, (...) a pesar de haber sido reconocidas jurídicamente, ha sido relativizada, quebrada o completamente desconocida” (Betancur, 2012, pág. 46).

Por el contrario, como lo señala este autor, en el afán de lograr crecimiento económico, los gobiernos nacionales se han encargado de emprender acciones y

generar políticas públicas que permiten disponer de los territorios de los pueblos étnicos con fines de explotación de recursos, violentando sus derechos étnico territoriales.

“(…) hoy se profundizan las agendas del desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales por medio de inversiones nacionales e internacionales, que ponen en cuestión los gobiernos propios sobre sus territorios, mientras la consulta previa se utiliza más como un protocolo administrativo que un proceso de participación y concertación por las actividades que se realizan en los territorios de las comunidades étnicas.” (Betancur, 2012, pág. 47).

Los proyectos de desarrollo, continúa este autor, en tanto requieren de la extracción y explotación de recursos naturales, generando graves impactos sociales y ambientales, se planean y ejecutan en los territorios ancestrales de los pueblos étnico raciales.

“Las territorialidades de las comunidades indígenas y afrodescendientes, coinciden en lo local con estos planes de desarrollo nacional, que se presentan ante la opinión pública, principalmente urbana, como la opción de progreso y bienestar para el conjunto de la sociedad colombiana.” (Betancur, 2012, pág. 47).

Siguiendo a Vargas (2016), Betancur (2012) y Coronado (2012) Es así como la posibilidad de llevar a cabo el etnodesarrollo en los territorios, supone que las comunidades cuenten con la libertad de decidir su propio bienestar, basadas en sus usos y costumbres. El Estado debe respetar y proteger los derechos del pueblo, en este caso de los pueblos étnicos particularmente, y, por tanto, no puede existir un modelo de desarrollo que prevalezca sobre los demás, si esto implica desconocer las apuestas propias y violentar a las comunidades y sus territorios en nombre del crecimiento del pueblo en general.

Conclusiones capítulo 3

En el caso particular de las comunidades que habitan el Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá, la histórica discriminación, exclusión y abandono a los que han sido sometidos, se agrava debido a las acciones estatales destinadas a implementar políticas públicas y obras, sin considerar, en ninguna de las etapas de la política

pública, los efectos negativos medioambientales, las afectaciones a los derechos humanos, y sin tomar en cuenta el derecho a la participación democrática, y en este caso en particular, el derecho fundamental a la Consulta Previa, libre e informada.

En esta lógica, existe un modelo de desarrollo hegemónico, avalado por las bases poscoloniales de la sociedad, que genera un escenario donde se reconocen y valoran ciertos saberes, y se desestiman los que provienen de grupos poblacionales considerados inferiores.

CONCLUSIONES GENERALES

El desarrollo de la investigación posiciona elementos necesarios para demostrar que en el caso del río Anchicayá es explicativo del racismo ambiental. En el marco teórico esbozado y en el análisis de casos y estudio del Caso del Río Anchicayá, se evidencia que existe una matriz colonial que, mediante el colonialismo interno permea las estructuras económicas, políticas, culturales y medioambientales, desde una lógica racista, clasista y excluyente.

Lo anterior, como lo advierten Escobar (2007), Mignolo (2000) y Quijano (1999) se traduce en prácticas de injusticia social, soportada por un sistema económico cimentado en la supremacía racial, la discriminación y negación de los saberes, conocimientos y aportes de los pueblos racializados a la construcción de sociedad. Acogiendo los análisis de Westra (2001), Mills (2001) y Bullard (2001), el racismo ambiental entonces se explica en tanto, a partir de las preconcepciones, prejuicios y estructura racista, los tomadores de decisiones de política pública, ejercen mecanismos de discriminación sobre las comunidades racializadas, para el caso particular de estudio, las comunidades negras del río Anchicayá, en tanto imponen cargas medioambientales desproporcionales a los beneficios que reciben las comunidades.

En este trabajo, se han llevado estas reflexiones para analizar el Caso del Río Anchicayá, y se confirma la hipótesis mencionada en la introducción de la siguiente manera. Este es un claro ejemplo de una empresa hidroeléctrica que, con participación estatal, provee del servicio de energía a un departamento, nutriéndose del río que es fuente de vida para las comunidades negras, y no genera las

condiciones para que estas accedan al servicio que prestan, es un claro ejemplo de racismo ambiental.

La respuesta estatal ante los daños medioambientales causados por parte de la hidroeléctrica a la naturaleza y a las comunidades negras, así como las afectaciones a sus derechos étnico-territoriales, demuestra la falta de interés por el bienestar de estos pueblos y sus territorios, y la justicia ambiental a la que tienen derecho. Se ha demostrado la negligencia y el desprecio por las comunidades negras del río Anchicayá, no solo en la contaminación y afectación profunda del río y sus territorios por parte de la EPSA (hoy Celsia) y el Estado Colombiano, sino también en la extensa batalla judicial, atravesada por todo un viacrucis jurídico que ha limitado el acceso a los derechos de las comunidades afectadas. Si bien la empresa ha iniciado un proceso de pago de indemnización y ha habido decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado concordantes con las demandas de las comunidades, el proceso de restauración y protección socioecológica aún no inicia, y las comunidades siguen aún sin acceso efectivo a sus derechos. Todo ello no sólo les ha afectado sus medios de vida, sino que ha incidido también el desdén por sus conocimientos ancestrales y vivenciales que atienden a un relacionamiento histórico y profundo con el río y el territorio.

En este contexto, se hace evidente la brecha existente entre el desarrollo jurídico y teórico de los derechos humanos, y los mecanismos de protección especialmente dirigidos a pueblos étnico raciales contenida en instrumentos de derechos nacionales e internacionales, con especial énfasis en el Convenio 169 de la OIT. Este es un caso que evidencia el flagrante, sostenido y sistemático desconocimiento de estos derechos.

Así pues, en casos como estos, y en clave de concientizar a la sociedad sobre el racismo ambiental, se observa cómo ante la existencia de una tensión entre los derechos humanos y el modelo de desarrollo, los pueblos étnicos, tradicionalmente discriminados, asumen mayores costos y consecuencias, comparados con los que debe soportar los demás ciudadanos (Mills, 2001; Bullard, 2005; Westra, 2001).

En palabras de Caicedo (2023)

Pero como esto ocurrió en una comunidad negra, además campesina entonces la respuesta del Estado racista, clasista, ha sido indiferente. Ha sido cargada de racismo soterrado porque aquí, déjeme decirle que hay un racismo ambiental, y que ha ocurrido contra los pobladores, contra la gente indefensa del río Anchicayá. (...) que también el atropello inhumano, porque solamente puede pasar una comunidad negra como la nuestra, como te dije arriba, si fuera una comunidad blanca, mestiza o paisa [inaudible], entonces esto estaba de otro color. Pero como es una comunidad negra y campesina, de “animales”, como nos han llamado, de gente que no tiene derecho, de gente sin valores, gente no civilizada, de gente pati rajada, entonces ellos se burlan de nosotros.

Bajo estos argumentos, y consciente de la resistencia que genera el abordaje del racismo como estructura de poder, y sistema de opresión (Quijano, 1999; 2010), es indispensable posicionar el problema del racismo ambiental en la agenda pública y la esfera ciudadana de nuestras realidades socioculturales.

Finalmente, tal como lo menciona Caicedo (2023) como una de las conclusiones clave de su intervención, es necesario tomar conciencia de que el racismo ambiental sucede en diversas partes del mundo, posicionar la discusión alrededor de sus implicaciones. Así mismo, reconocer la labor de conservación del medio ambiente que desempeñan las comunidades en los territorios a costa de ver vulnerados sus derechos. Lo anterior, con el fin de que estos casos no se repitan, y que los Estados, las empresas y todos los demás actores sociales, propendan por la justicia ambiental, como lo posiciona Bullard (2005)

Y ojalá que el caso de Anchicayá, que estas afectaciones siguen como referente, sirva como referente para otros ríos, para otras regiones de Colombia, de América Latina y del Caribe y del mundo, para que estas afectaciones no puedan seguir ocurriendo. Y que en este Gobierno que dice que lo ha dado todo por el medio ambiente puedan sus ministras, sus ministros, tomar conciencia, porque yo invito a que haya conciencia ambiental, política cultural, para que este racismo ambiental, no, soterrado, que mantienen aquí no pueda seguir ocurriendo en un país tan bonito, tan elegante. y una vez cuando los presidentes salen a vender a Colombia, a hablar del calentamiento global, del cambio climático, muchas, cosas, yo digo, ¿por qué no me llevan a mí? Por qué no me llevan a mí para decirle al mundo que ellos hablan

con la boca muy bonito, pero que acá en el cumplimiento no está pasando nada, porque acá los que conservamos, los que cuidamos el medio ambiente somos otros hombres y otras mujeres. (...) esos otros que cuidamos, estamos en riesgo por cuidar y salvaguardar nuestro territorio.

Bibliografía

- ACNUR. (sf). *ACNUR. La Agencia de la ONU para los Refugiados*. Obtenido de <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/tipos-de-derechos-humanos-segun-la-onu>
- Adichie, C. (2018). *El peligro de la historia única*. España: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Alfonso Sierra, T., Cavelier Adarve, I., & Rodríguez Garavito, C. A. (2009b). Desplazamiento y discriminación racial: ls obligaciones del Estado colombiano. En T. Alfonso Sierra, I. Cavelier Adarve, & C. A. Rodríguez Garavito, *El desplazamiento Afro: tierra, violencia y derechos de las comunidades negras en Colombia* (págs. 48-52). Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho-Uniandes.
- Alimonda, H. (2011). La Colonialidad de la Naturaleza. Una Aproximación a la Ecología Política Latinoamericana. En H. Alimonada, *La Naturaleza Colonizada. Ecología Política y Minería en América Latina* (págs. 21-61). Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO-Ediciones CICCUS.
- Ansuátegui, F. (2016). Derechos Fundamentales y Dignidad Humana. En F. Ansuátegui, *Dignidad humana: presupuesto fundamental de los derechos humanos* (págs. 35-56). Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
- Betancur, J. (2012). Autonomías territoriales de los pobladores rurales en los nuevos contextos nacionales e internacionales. En P. U. Javeriana, *Autonomías Territoriales: experiencias y desafíos* (págs. 41-51). Bogotá: Autor.
- Bhabha, H. (1994). *The location of culture*. ISBN10: 0.415-33639-2. Nueva York: Routledge.
- Bonilla, A. (18 de junio de 2023). *Comunidades del Río Anchicayá ganan histórica batalla judicial contra hidroeléctrica*. Recuperado el junio de 2023, de El Tiempo: <https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/comunidades-negras-del-rio-anchicaya-ganan-historica-batalla-judicial-778682>
- Briceño, T., Flores, L., Toledo, D., Aguilar, B., Batker, D., & Kocian, M. (2013). *Evaluación Económico-Ecológica de los Impactos Ambientales en la Cuenca del Bajo Anchicayá por Vertimiento de Lodos de la Central Hidroeléctrica Anchicayá*. Estados Unidos: Earth Economics-Fundación Neotrópica.
- Bullard, R. (2001). Decision Making. En L. & WESTRA, *Faces of environmental racism. Confrontating issues of global justice. Second Edition*. (págs. 3-23). Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

- Bullard, R. (2005). *The quest for environmental justice*. ISBN 10: 1-57805-120-7. Berkeley: Counterpoint.
- Caballero, C. (2000). *El Racismo: Génesis y desarrollo de una ideología de la modernidad*. Recuperado el 10 de abril de 2023, de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/view/23356/20872>
- Caicedo, S. (1 de agosto de 2023). Racismo ambiental en Anchicayá. (K. Riascos, Entrevistador)
- CELSIA Colombia. (12 de diciembre de 2022). *Desde marzo, Celsia Colombia pagó indemnización a las comunidades de Anchicayá según el fallo del Consejo de Estado*. Obtenido de CELSIA: <https://www.celsia.com/es/noticias/desde-marzo-celsia-colombia-pago-indemnizacion-a-las-comunidades-de-anchicaya-segun-el-fallo-del-consejo-de-estado/>
- CEPAL. (s.f.). Obtenido de Acerca del desarrollo sostenible: <https://www.cepal.org/es/temas/desarrollo-sostenible/acerca-desarrollo-sostenible>
- Césaire, A. (1972). *Discourse on Colonialism*. Nueva York: Monthly Review Press.
- Césaire, A. (2006). *Discurso sobre el colonialismo*. Madrid: Ediciones Akal.
- Chavis, B. (1994). Prefacio. En R. D. Bullard, *Unequal Protection: Environmental Justice and Communities of Color*. San Francisco: Sierra Club Books.
- Congreso de la República. (1991). *Ley 21 de 1991*. Bogotá: Autor.
- Congreso de la República. (1993). *Ley 70 de 1993*. Bogotá: Autor.
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. (2021). *Sentencia del 10 de junio de 2021. Radicado 76001-23-31-000-2002-04584-02. Consejera Ponente María Adriana Marín*. Bogotá: Autor.
- Coronado, S. (2012). Derecho propio y autonomía territorial: un abordaje desde la experiencia de los territorios afrodescendientes en Colombia. En Pontificia Universidad Javeriana, *Autonomías Territoriales: experiencias y desafíos*. Bogotá: Autor.
- Corte Constitucional de Colombia. (2012). *Sentencia T-274 de 2012. Magistrado Ponente Juan Carlos Henao*. Bogotá: Autor.
- Corte Constitucional de Colombia. (2014). *Sentencia T-969 de 2014*. Bogotá: Autor.
- Corte Constitucional de Colombia. (2014). *Sentencia T-969/14*. Bogotá: Autor.
- Corte Constitucional de Colombia. (2015a). *Sentencia SU-686 de 2015. Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado*. Bogotá: Autor.
- Corte Constitucional de Colombia. (2015b). *Auto 132 de 2015. Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado*. Bogotá: Autor.
- Corte Constitucional de Colombia. (2023). *Comunicado Sentencia SU-196 de 2023. Magistrado Ponente José Lizarazo Ocampo*. Bogotá: Autor.

- Crenshaw, K. W. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Traducido por: Raquel (Lucas) Platero y Javier Sáez. *Stanford Law Review*, 43 (6), 1241 - 1299.
- Cusicanqui, S. (2018). *Un mundo Ch'ixi es posible. Ensayos de un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Davis, A. (2004). *Mujer, raza y clase. Traducido por Ana Varela Mateos*. Madrid: Akal.
- Defensoría. (2005). *Situación Ambiental del Río Anchicayá Buenaventura - Valle del Cauca*. Bogotá D.C.
- Defensoría del Pueblo. (16 de marzo de 2005). *Resolución Defensorial Número 35*. Bogotá: Autor.
- Delgado, R. (2000). A Cognitive Approach to Unconscious Racism. Unconscious Racism in Everyday Life. En R. Delgado, *Critical Race Theory, the cutting edge*. ISBN 1566397138. The Temple University Press.
- Delgado, R. (2000). Words that wound. A tort Action for Racial Insults Epithets. En R. Delgado, *Critical Race Theory, the cutting edge*. ISBN 1566397138. The Temple University Press.
- DiAngelo, R. (2020). NPR. Obtenido de 'There Is No Neutral': 'Nice White People' Can Still Be Complicit In A Racist Society: <https://www.npr.org/2020/06/09/873375416/there-is-no-neutral-nice-white-people-can-still-be-complicit-in-a-racist-society>
- Eje 21. (6 de diciembre de 2022). *Desde marzo, Celsia Colombia pagó indemnización a las comunidades de Anchicayá según el fallo del Consejo de Estado*. Obtenido de EJE 21: <https://www.eje21.com.co/2022/12/desde-marzo-celsia-colombia-pago-indemnizacion-a-las-comunidades-de-anchicaya-segun-el-fallo-del-consejo-de-estado/>
- Escobar, A. (2000). El Lugar de la Naturaleza y la Naturaleza del Lugar: ¿Globalización o posdesarrollo? En E. Lander, *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas* (págs. 113-145). Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO-UNESCO.
- Escobar, A. (2007). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Venezuela.
- Escobar, A. (2010). *Territorios de diferencia. Lugar, movimientos, vida, redes*. Estados Unidos: Evió Editores.
- Escobar, A. (2018). *Otro Posible es posible: caminando hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latino-América*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- Fanon, F. (2010). *Piel negra, máscaras blancas*. Madrid: Akal.
- Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura y la Costa Pacífica-Proceso de Comunidades Negras PCN. (2015). *Propuesta autónoma de reparación colectiva para comunidades negras de Buenaventura*. Buenaventura: Autor.

- Grosfoguel, R. (2012). El concepto de <racismo> en Michael Foucault y Frantz Fanon: ¿Teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no-ser? *Tabula Rasa*.
- Guzmán, R. (2018). Colonialismo, racismo y cuerpo: apuntes críticos desde Frantz Fanon. *Hermenéutica Intercultural Revista de Filosofía No. 29. ISSN: 0718-4980*, 121.
- Harvey, D. (2016). *The Ways of the World*. New York: Oxford University Press.
- IPS. (2006). *Inter Press Service*. Obtenido de POBREZA: Informe del Banco Mundial reconoce fracaso.: <http://www.ipsnoticias.net/2006/12/pobreza-informe-del-banco-mundial-reconoce-fracaso/>
- Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura. (2009). *Sentencia del 20 de mayo de 2009. Acción de Grupo Número 2002-4584-01. Expediente T-2972159*. . Buenaventura: Autor.
- Keucheyan, R. (2016). *La naturaleza es un campo de batalla. Ensayo de ecología política*. ISBN: 978-84-944338-4-9. Madrid: Clave Intelectual.
- López, I. H. (2000). The social construction of race. En R. Delgado, *Critical Race Theory, the cutting edge*. ISBN 1566397138. Temple University Press.
- Mbembe, A. (2013). *Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo*. ISBN: 978-84-942364-4-0. París: Éditions La Découverte.
- Mignolo, W. (2000). La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad. En CLACSO, *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y ciencias sociales perspectivas latinoamericanas* (págs. 55-85). Argentina: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Mignolo, W. (2003). *Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. ISBN 978-84-460-1584-0. Ediciones Akal.
- Mills, C. (2001). Black Trash. En W. L. E., *Faces of environmental racism. Confronting issues of global justice. Second Edition*. ISBN 0-7425-1248-7 (págs. 73 - 89). Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, INC.
- Moreno, M. (2019). *Racismo ambiental: muerte lenta y despojo de territorio ancestral afroecuatoriano en Esmeraldas*. Obtenido de Íconos. Revista de Ciencias Sociales: <https://biblat.unam.mx/hevila/IconosRevistadecienciassociales/2019/no64/5.pdf>
- Murillo, J. (2019). *Historia social de las comunidades de la Región de la Cuenca del Río Anchicayá. Intervenciones externas y acciones colectivas 1990-2010. Estudios de Caso: Consejos Comunitarios Mayor de Canchicayá, Sabaletas, Llano Bajo, El Cauchal-Danubio*. Recuperado el junio de 2023, de Universidad del Valle: <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/15228/CB-0600286.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- OHCHR. (23 de 3 de 1976). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Obtenido de https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf

- OHCHR. (2011). *Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"*. Obtenido de https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
- OIT. (1989). *CONVENIO núm. 169 DE LA OIT*. Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf
- ONU. (10 de 12 de 1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Obtenido de <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- ONU. (21 de 12 de 1965). *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial*. Obtenido de <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>
- ONU. (4 de Diciembre de 1986). *Declaración sobre el Derecho al Desarrollo*. Obtenido de Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development>
- ONU. (4 de 8 de 1987). *Asamblea General*. Obtenido de Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
- ONU. (2002). Obtenido de Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo (Sudáfrica): <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/96/PDF/N0263696.pdf?OpenElement>
- ONU. (2022). *Programa para el medio ambiente*. Obtenido de Decisión histórica: la ONU declara que el medio ambiente saludable es un derecho humano: <https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/decision-historica-la-onu-declara-que-el-medio-ambiente-saludable#:~:text=La%20Asamblea%20General%20de%20las,declive%20mundial%20de%20la%20naturaleza>.
- ONU. (s.f.). *Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales*. Obtenido de Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm>
- Ospina, J. (2022). *Anchicayá: la dignidad del río, es la dignidad de los pueblos*. Obtenido de Quinta Edición de Diplomado en Derechos Humanos para periodistas de América Latina y el Caribe: <https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/Anchicaya-Jeimy-reportaje.pdf>
- Peñuela, N. (1 de diciembre de 2022). *Líderes de Buenaventura llegaron a Bogotá para reclamar justicia por río Anchicayá*. Recuperado el junio de 2023, de El Espectador: <https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/sentencia-rio-anchicaya-reclamo-justicia-de-lideres-de-buenaventura-en-bogota/>

- Quijano, A. (1999). ¡Qué tal raza! *Ecuador Debate. Edición 48*, 142-151.
- Quijano, A. (2010). Coloniality and Modernity/Rationality. En W. Mignolo, & A. Escobar, *Globalization and the Decolonial Option* (págs. 22-33). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Rodríguez-Piñero, L. (2005). The Language of Rights: Convention No169 (1989)|. En L. Rodríguez-Piñero, *Indigenous Peoples, Postcolonialism, and International Law. The ILO Regime (1919-1989)* (págs. 291-320). New York: Oxford University Press.
- Roth, N. (2002). *Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad*. ISBN 84-08-0324-X. Nueva York: Edición original.
- Sieder, R. (2015). Indigenous peoples' rights and the law in Latin America. En C. A. Rodríguez Garavito, *Law and Society in Latin America. A new map* (págs. 144-156). New York: Routledge Tylor & Francis Group a GlassHouse Book.
- Sieder, R. (2015). Indigenous peoples' rights and the law in Latin America. En C. A. Rodríguez Garavito, *Law and Society in Latin America. A new map* (págs. 144-156). New York: Routledge Tylor & Francis Group a GlassHouse Book.
- Torres, F. (12 de mayo de 2023). *La lucha por declarar el río Anchicayá sujeto de derechos*. Recuperado el junio de 2023, de El Espectador: <https://www.elespectador.com/judicial/la-lucha-por-declarar-el-rio-anchicaya-sujeto-de-derechos/>
- Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. (2009). *Sentencia del 7 de septiembre de 2009. Acción de Grupo Número 2002-4584-01. Expediente T-2972159*. Cali: Autor.
- UNCTAD. (1996). *Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. 1996. Declaración de Midrand*. Obtenido de https://unctad.org/es/Docs/u9l360_sp.pdf
- Universidad Externado de Colombia. (4 de octubre de 2021). *Sentencia del Consejo de Estdo de 10 de junio de 2021 sobre la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados como consecuencia del vertimiento de sedimentos al Río Anchicayá*. Recuperado el julio de 2023, de Blog Departamento de Medio Ambiente.
- Urquijo, M. (2008). *La libertad como capacidad. El enfoque de las capacidades de Amartya Sen y sus implicaciones en la ética social y política*. ISBN 958-670-660-5. Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.
- Vargas, P. (2016). *Historias de territorialidades en Colombia. Biocentrismo y Antropocentrismo*. Colombia: Patricia Vargas Sarmiento.
- Vela, B. (2005). *El declive de los fundamentos económicos de la paz. De la Conferencia de Bretton Woods al Consenso de Washington*. ISBN 958-616-918-9. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

- Vela, B. (2015). *Colombia no es una isla. Una contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en el entorno global*. ISBN 9789597724127. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Wade, P. (2000). *Raza y etnicidad en Latinoamérica*. ISBN 9978-04-640-2. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Walsh, C. (2010). Shifting the Geopolitics of Critical Knowledge: Decolonial Thought and Cultural Studies 'Others' in the Andes. En W. Mignolo, & A. Escobar, *Globalization and the Decolonial Option* (págs. 78-94). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Waste360. (1 de 11 de 1998). *Browning Ferris Industries Inc*. Obtenido de https://www.waste360.com/mag/waste_browningferris_industries_inc
- WESTRA, L. &. (2001). *Faces of environmental racism. Confornting issues of global justice. Second Edition*. ISBN: 0-7425-1248-7. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.